



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**CONVENIO DE INTEGRACIÓN Y PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS
INCOMPLETOS EN JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LIMA – 2017**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogado

AUTOR:

Johan Alberto Damián Acuña

ASESORES TEMÁTICOS:

Dr. Santisteban Llontop, Pedro Pablo

Mg. Wenzel Miranda, Eliseo Segundo

ASESOR METODOLÓGICO

Dr. Rodríguez Figueroa, José Jorge


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Contratos

Lima – Perú

2018

Página del jurado

 UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO	ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS	Código : F06-PP-PR-02.02
		Versión : 09
		Fecha : 23-03-2018
		Página : 1 de 1

El Jurado encargado de evaluar la tesis presentada por don (ña)
 D. AMILAN ACUNA JOHNS
 cuyo título es: CONVENIO DE INTEGRACIÓN Y PRESERVAÇÃO
 EXTINTIVO DE RESERVAS INCOMPLETAS EM JUZGADO DE
 PAZ LETRADOS DE LIND. - 2017.

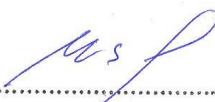
Reunido en la fecha, escuchó la sustentación y la resolución de preguntas por el
 estudiante, otorgándole el calificativo de: ...J... (número) ...D.I.E.C.S.E.I.S...
 (letras).

Lugar y fecha... 13 de Diciembre 2018


 PRESIDENTE

DR. RODRIGUEZ FIGUEROA JORGE
 ABOGADO CALN N° 1048
 ADMINISTRADOR CLAP 3363


 SECRETARIO


 VOCAL

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable de SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	--------------------	--------	---------------------------------

Dedicatoria:

A mis adorados padres, por el apoyo incondicional que me brindaron durante toda mi carrera universitaria.

Agradecimiento:

A mi hermana, Kassandra, y a mi primo, Eslin, por acompañarme físicamente y ser las personas que me inspiraron a culminar la presente tesis. A mis asesores, Dr. Rodríguez Figueroa, José Jorge; Dr. Santisteban Llontop Pedro Pablo y Mg. Wenzel Miranda, Eliseo Segundo; por la correcta, perseverante y dedicada asesoría brindada.

Declaratoria de autenticidad

Johan Alberto Damián Acuña identificado con DNI N° 70552736 y código 7000407638, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo – Lima Norte, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de referencias y citas para las fuentes consultadas. En ese sentido, la tesis no ha sido plagiada, total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para la obtención de algún grado académico previo o título profesional de otra casa de estudios.
4. Los datos presentados en la parte de los resultados son verídicos y no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados; por lo que, los resultados que se presentan en la presente tesis se configurarán como aportes para el plano de la investigación.

En consecuencia, de identificarse la presencia de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi accionar se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo – Lima Norte.

Lima, Septiembre del 2018.



Johan Alberto Damián Acuña

DNI N° 70552736

Presentación

Señores miembros del jurado calificador:

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y la sustentación de la Tesis de la sección de Pregrado de la Universidad “César Vallejo”, para optar el grado de Abogado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”, la misma que someto a vuestra consideración tiene la finalidad de describir las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

La presente tesis consta de seis capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en el cual se precisa la aproximación temática, se describen los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el problema, la justificación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos.

El segundo capítulo denominado método, precisando que en nuestra investigación se aplica el enfoque cualitativo y un tipo de estudio básica orientada a la comprensión, además, se desarrolla el diseño de la investigación, los métodos de muestreo, el rigor científico, se realiza el análisis cualitativo de los datos y se especifican los aspectos éticos de la investigación. En el tercer capítulo se encuentra la descripción de los resultados. En el cuarto capítulo se realizan las discusiones. En el quinto capítulo las conclusiones. Y, finalmente, en el sexto capítulo se desarrollan las recomendaciones.

Todo lo antes descrito se encuentra sustentado con material bibliográfico y las evidencias incorporadas en los anexos de la presente investigación.

El autor

ÍNDICE

Página del jurado	ii
Dedicatoria:	iii
Agradecimiento:	iv
Declaratoria de autenticidad.....	v
Presentación	vi
ÍNDICE	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT.....	x
I. INTRODUCCIÓN.....	11
1.1.- Aproximación Temática.....	12
1.2.- Marco Teórico.....	22
1.3.- Formulación Del Problema.....	60
1.4.- Justificación Del Estudio.....	61
1.5.- Supuestos y Objetivos del Trabajo	62
II. MÉTODO	64
2.1.- Diseño de Investigación	65
2.2.- Métodos de Muestreo	66
2.3.- Rigor Científico.....	71
2.4.- Análisis Cualitativo de los Datos	75
2.5.- Aspectos Éticos.....	76
III. RESULTADOS.....	78
IV. DISCUSIÓN.....	92
V. CONCLUSIONES.....	100
VI. RECOMENDACIONES	103
REFERENCIAS	105

ANEXOS	111
Anexo 1: Matriz de Consistencia	112
Anexo 2: Validación de Instrumentos	115
Anexo 3: Guía de Entrevista	121
Anexo 4: Guía de Análisis Documental.....	165
Anexo 5: Confiabilidad de Entrevistados	172
Anexo 6: Convenio de Integración	190
Anexo 7: Acta de Aprobación de Tesis	192
Anexo 9: Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV	194
Anexo 10: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación	195

RESUMEN

La presente tesis tiene como finalidad conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima; y es en base a ello que, en la investigación se desarrollan los conceptos concernientes al convenio de integración o pacto de completamiento, el acto jurídico, la autonomía privada de la voluntad y la prescripción extintiva de los pagarés incompletos no sujetos a protesto.

Para alcanzar nuestros objetivos se entrevistaron a seis abogados con amplia experiencia en materia Civil y Comercial, y cuatro especialistas y/o secretarios judiciales de los Juzgados de Paz Letrado de Lima, quienes explicaron sobre la regulación del convenio de integración y los criterios uniformes adoptados por los juzgados, respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

Los resultados de las entrevistas, al igual que los resultados obtenidos de investigaciones plasmadas en artículos y tesis, se describieron en nuestro análisis documental; concluyendo que las implicancias del convenio de integración son: la desnaturalización de la prescripción extintiva, contraviniendo lo regulado por el artículo 1990° del Código Civil, la afectación patrimonial de los deudores y la recuperación indebida de los créditos por parte de los acreedores de obligaciones cartulares.

PALABRAS CLAVES: Convenio de integración, prescripción extintiva, pagarés incompletos, acto jurídico y autonomía de la voluntad.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to know the implications of the integration agreement in the extinctive prescription of incomplete promissory notes in the Magistrate's Courts of Lima; and it is on this basis that, in the investigation, the concepts concerning the integration agreement or completion pact, the legal act, the private autonomy of the will and the extinctive prescription of incomplete promissory notes not subject to protest will be developed.

To achieve our objectives, five lawyers with extensive experience in Civil and Commercial matters and five magistrate judges from Lima were interviewed, who explained on the regulation of the integration agreement and the uniform criteria adopted by the courts, regarding their implications with the extinctive prescription of incomplete notes.

The results of the interviews, as well as the results obtained from research in articles and theses, were described in our documentary analysis; concluding that the implications of the integration agreement are: the denaturalization of the extinctive prescription, contravening what is regulated by article 1990 of the Civil Code, the patrimonial affectation of the debtors and the improper recovery of the credits by the creditors of contractual obligations.

KEY WORDS: Agreement of integration, extinctive prescription, incomplete promissory notes, legal act and autonomy of the will.

I. INTRODUCCIÓN

1.1.- Aproximación Temática

Realidad Problemática

El aumento de necesidades patrimoniales en las personas y la facilidad de acceder a entidades públicas o privadas que permiten la satisfacción de aquellas, generan un ambiente propicio para la creación de relaciones jurídicas que se ven materializadas en documentos de índole civil y comercial, cuyas obligaciones tendrán que ser cumplidas en un plazo determinado por mutuo acuerdo.

Estos documentos son preparados por las entidades –a quienes llamaremos acreedores– que en la práctica normalmente están representados por contratos, regulados por el Código Civil, y títulos valores, regulados por la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, los cuales tienen determinadas características y especificaciones, cuyo conocimiento, en plenitud, no necesariamente es trasladado a las personas obligadas –a quienes llamaremos deudores–.

La suscripción de estos documentos tiene una razón de ser que protege a los acreedores ante el posible incumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores. Es muy común en la práctica que las obligaciones asumidas normalmente no superen las 100 Unidades de Referencia Procesal, que los deudores suscriban pagarés incompletos acorde con lo regulado por el artículo 10° de la Ley de Títulos Valores, y a la vez suscriban otro documento, un acto jurídico que debe cumplir con los requisitos descritos en el artículo 140° del Código Civil y que para efectos de la presente investigación se denominó “convenio de integración”, el cual contiene las condiciones en las que van a ser llenados estos pagarés (monto, fecha de vencimiento, forma de pago, lugar de pago, etc.).

El objeto de estudio del presente trabajo es la protección de los derechos patrimoniales de los deudores, quienes autorizan al acreedor a través del convenio de integración, para que consigne determinados datos en el pagaré incompleto, hecho que trae consigo una gran desventaja, sobre todo si dicha autorización radica en la fecha de vencimiento de la obligación y el título valor contiene la cláusula de liberación del protesto conforme a lo regulado en el artículo 52° de la Ley de Títulos Valores. En ese sentido, el acreedor, a su discreción, puede colocar como fecha de vencimiento al mes siguiente de celebrado el acto o cuando lo crea necesario, porque tiene plena facultad para ello; por tanto, una vez efectuado

el llenado correspondiente del título valor, puede iniciar las acciones de cobranza permitidas por la ley.

Precisamente, una de las acciones ejercidas por los acreedores son los requerimientos de pago simples (verbal o escrito) y/o notariales, poniendo a conocimiento de los deudores que mantienen una obligación –ahora exigible– cuya satisfacción debe realizarse con prontitud para evitar la generación de intereses y el registro en las centrales de riesgo, así como también el inicio de procedimientos conciliatorios conforme a la Ley N° 26872 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2008-JUS, y/o la suscripción de transacciones extrajudiciales según lo regulado por el artículo 1302° y siguientes del Código Civil. Sin embargo, ello no es óbice para que también puedan iniciar las acciones de cobranza a nivel judicial, ya sea a través de las acciones cambiarias descritas en el artículo 90° de la Ley de Títulos Valores o las que resulten pertinentes en virtud al artículo 1219° del Código Civil. En ese sentido, los acreedores evalúan las alternativas más idóneas para que sus intereses sean satisfechos en el menor tiempo posible. Por tanto, considerando que tienen un título valor, y según el numeral 4 del artículo 688° del Código Procesal Civil, la vía procedimental para su trámite es la del Proceso de Ejecución, optan por colocar los datos (elementos esenciales) en los pagarés incompletos, en virtud a las estipulaciones expresadas en el convenio de integración, y una vez completado (título valor válido y eficaz), presentan la demanda al Juzgado cuya competencia se encuentra descrita en el artículo 690-B del Código Procesal Civil, a efectos de obtener un auto final cuyo mandato importa al Derecho y apertura la posibilidad de ejecutar de manera forzada las obligaciones (medidas cautelares, por ejemplo).

Ahora bien, no existe problema alguno cuando los acreedores colocan la fecha de vencimiento dentro de un plazo razonable; es decir, conforme a los plazos descritos en el artículo 96° de la Ley de Títulos Valores referido a las acciones cambiarias y/o el plazo descrito en el numeral 1 del artículo 2001° del Código Civil referido a la acción personal. No obstante, la autorización otorgada por los deudores a través del convenio de integración, también permite que los acreedores puedan colocar una fecha de vencimiento fuera de los plazos descritos en las normas precedentes. Es decir, al no existir una fecha exacta respecto a la exigibilidad de la obligación, tampoco existe una fecha para el inicio del cómputo del plazo prescriptorio según lo regulado por el artículo 1993° del Código Civil; por tanto, los efectos de la prescripción no pueden aplicarse al caso concreto.

Estos casos, en los cuales la fecha de vencimiento colocada en los pagarés incompletos, son demasiados prolongados respecto a su fecha de emisión, y cuyo cumplimiento de las obligaciones contenidas se exigen a nivel judicial, son la esencia de la presente investigación, toda vez que según lo regulado por el artículo 1990° del Código Civil: todo pacto –incluido los convenios de integración– destinado a impedir los efectos de la prescripción, es nulo.

Por todo lo expuesto, el propósito de la presente investigación es conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, las cuales, según nuestro supuesto jurídico general, son: la desnaturalización de la prescripción extintiva, la recuperación indebida de los créditos, la disminución en la esfera patrimonial y el perjuicio en la información crediticia de los ejecutados; así como también analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en nuestro ordenamiento jurídico e identificar los criterios uniformes adoptados por los Juzgados de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos; contribuyendo de esta manera a una mejora en los conocimientos concernientes a los pagarés incompletos, prescripción extintiva y acto jurídico dentro de los procesos ejecutivos a cargo de los Juzgados de Paz Letrado de Lima, en el año 2017.

Finalmente, la problemática de la presente investigación gira en torno a las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

¿De qué manera se regula el convenio de integración respecto a las implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en nuestro ordenamiento jurídico?

¿Cuáles son los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

Trabajos previos

Los antecedentes son aquellos trabajos realizados con anterioridad y que son la base de la investigación en cuanto a la aclaración e interpretación del planteamiento del problema. Son efectuados por diversos autores, cuyos conocimientos aportados proyectan una perspectiva respecto a la investigación de un tema específico.

Antecedentes nacionales

En cuanto a los trabajos desarrollados a nivel nacional relacionados a la presente investigación, consideramos la investigación realizada por Castillo (2016) titulada: “El arbitrario accionar de las entidades bancarias en los procesos judiciales de ejecución instaurados para el cobro de pagarés incompletos”, que desarrolla lo concerniente a las prácticas abusivas ejercidas por las entidades bancarias al iniciar los procesos de ejecución sustentados en los pagarés incompletos suscritos por los usuarios para la obtención de un crédito bancario.

El autor delimitó espacialmente su investigación en los Juzgados Comerciales de Lima, y temporalmente en los años 2012 y 2013. Asimismo, concluyó que los pagarés incompletos son documentos cuya exigencia no debe ser requerida por las entidades bancarias, toda vez que las obligaciones contenidas en dicho título valor son independientes a aquellas contenidas en los negocios jurídicos. Asimismo, determinó que las entidades bancarias no cumplen con los acuerdos para el llenado de los pagarés incompletos y aumentan las obligaciones cartulares consignando, además del capital, los intereses, comisiones y demás gastos, sin la debida justificación. De igual manera, puntualizó que los pagarés incompletos exigidos como garantía de los negocios jurídicos celebrados por las entidades bancarias, no tienen mérito ejecutivo en virtud de lo regulado por el artículo 1.1 de la Ley N° 27287, al no estar destinados a la circulación. Finalmente, en el aspecto procesal, precisó que los pagarés incompletos no pueden ser admitidos por los juzgados cuando los montos son llenados de manera exagerada sin comunicar a los deudores, puesto que causa un menoscabo en su esfera patrimonial.

A su vez, se tiene la investigación desarrollada por Montesinos (2014) titulada: “Ejecución de títulos valores dados en garantía y el abuso del derecho en el sistema financiero”, en la cual se describieron los perjuicios que ocasionan los títulos valores por el carácter ejecutivo

que la norma les otorga y debido a los altos intereses generados por la deuda adquirida, los cuales acrecientan ante el incumplimiento de pago hasta en tres veces el valor original; así como también la afectación de los derechos fundamentales del honor y la buena reputación de los usuarios.

El autor delimitó espacialmente la investigación en los usuarios o prestatarios, en los jueces y funcionarios del sistema financiero; y temporalmente en el año 2013. A manera de conclusión describe que existe abuso de derecho en detrimento de los usuarios del sistema financiero, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Tal afectación se debe a las normas del sistema financiero que favorecen a las empresas de dicho sector. Asimismo, detalló que el régimen económico respecto a las garantías, privilegia y protege al acreedor, afectando el derecho de los deudores. Es decir, precisó que la arbitrariedad se origina en el Estado, desde que se emiten normas que distan de una igualdad de derechos, las cuales no sólo se verifican en los créditos del sistema financiero, sino también en materia previsional.

Asimismo, se consideró la investigación realizada por Gamboa (2017) titulada: “El secuestro conservativo y el aseguramiento de las obligaciones contenidas en los títulos valores, en vía causal”. En su investigación la autora describió los problemas existentes respecto a la regulación del secuestro conservativo como mecanismo para asegurar las obligaciones pecuniarias en los procesos tramitados en la vía causal. Señaló que dichos problemas se originan por lo preceptuado en el artículo 643° segundo párrafo del Código Procesal Civil, en el sentido que sólo permite conceder dichos secuestros cuando se tramitan los títulos valores en un proceso único de ejecución, dejando sin garantía a las obligaciones de dar suma de dinero cuando se tramitan en una vía diferente.

La citada autora delimitó espacialmente la investigación en los empresarios, comerciantes, jueces especializados en materia civil y abogados especialistas en dicha rama; y temporalmente en el año 2017. Concluyendo que, además de los procesos ejecutivos, es necesario garantizar el cumplimiento de obligaciones y las sentencias judiciales expedidas en la vía causal a través del secuestro conservativo, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la norma procesal para otorgar medidas cautelares. Determinó que la regulación del secuestro conservativo en la vía causal no afectaría a otras instituciones de nuestro ordenamiento jurídico, tampoco existiría oposición de los usuarios que usan los títulos valores ni de los abogados que usan dicha medida cautelar para satisfacer las

obligaciones pendientes de pago. Finalmente, puntualizó que el argumento de lesividad esgrimido por los jueces para no conceder el secuestro conservativo no es suficiente, toda vez que la norma procesal regula la contracautela para evitar cualquier perjuicio que se pueda ocasionar.

De igual manera, en el trabajo de Rodríguez (2004) titulado: “Abuso de derecho por parte de las empresas del sistema financiero en la ejecución de los títulos valores dados en garantía. Puno – 2004”, mediante el cual se investigó sobre los abusos de derecho por parte de las entidades financieras en desmedro de los prestatarios, a través de los títulos valores dados en garantía.

Dicho autor delimitó espacialmente la investigación en las empresas del sistema financiero de Puno, los prestatarios de dichas empresas y los procesos judiciales de ejecución de títulos valores dados en garantía; y temporalmente en el año 2004. En su investigación, concluye que los contratos por adhesión respecto a los préstamos otorgados por las empresas financieras afectan la libertad contractual de los prestatarios, puesto que estos se limitan a aceptar cláusulas unilaterales y ello constituye abuso de derecho. Asimismo, que la Ley del Sistema de Banca y Seguros coadyuva con dicho abuso de derecho por permitir la inaplicación del artículo 1243° del Código Civil en caso de intermediación financiera. Por otra parte, en cuanto a los intereses, comisiones y demás gastos, señala que van a afectar el patrimonio de los prestatarios, toda vez que no tienen conocimiento pleno de los cálculos a realizar por el préstamo otorgado, lo cual genera un empobrecimiento que no tiene tutela por parte del Estado.

Como último antecedente nacional se consideró el artículo desarrollado por Roca y Céspedes (2011) titulado: “La ley y las prácticas de protección al consumidor en el Perú”, en el cual los autores evalúan un panorama real sobre la protección al consumidor en el Perú por parte de las normas legales ante casos de cláusulas abusivas y generales de contratación, los criterios que debe tener un consumidor razonable y los problemas en la ejecución de resoluciones de prácticas informales para evitar el abuso contra el consumidor.

Los autores concluyen que, en el Perú, en la década de 1990 y 2000, la protección al consumidor se fortaleció a través de la promulgación de una Ley de Protección al Consumidor y la creación del Indecopi; así como también de la facultad para que esta entidad pueda ordenar medidas correctivas que eviten el perjuicio en contra de los consumidores.

Sin embargo, dicha protección se vio reducida entre el 2008 y 2009, puesto que se eliminaron las posibilidades de sancionar a empresas que explotaban a los consumidores aprovechando su posición de dominio y de considerar como consumidor final a las microempresas y pequeñas empresas. También concluyen que los criterios utilizados actualmente en materia de protección de derechos de los consumidores no son los correctos y que el sistema centralizado existente sobre complica su gestión y deja sin tutela a las diversas regiones del país. Por otra parte, en cuanto a las normativas, los autores concluyeron que las demás entidades, aparte de Indecopi, Osiptel, Osinergmin, y otros tribunales reguladores; tienen una participación limitada y débil, lo cual no produce seguridad ni eficacia para la protección de los derechos, recomendando la viabilidad de crear un sistema nacional con objetivos estratégicos que fomente la cultura responsable y que incluya al sector público y privado. Finalmente, describen que las políticas de prevención no han evolucionado acorde con la realidad de nuestro país, afectando la fiscalización y monitoreo del mercado.

Antecedentes internacionales

En cuanto a los trabajos desarrollados a nivel internacional que guardan relación con la presente investigación, se tiene a la investigación realizada por Giraldo (2011) titulado: “Problemas comunes que afronta el acreedor en un proceso ejecutivo de título valor en relación con las instrucciones y/o autorizaciones de llenado de espacios en blanco”, en la cual se estudian los aspectos relacionados a las características y especificaciones de los títulos valores emitidos con espacios en blanco y qué tan común suelen ser la suscripción de dichos documentos cartulares, asimismo, verificar las circunstancias respecto a la interposición de las demandas, las contestaciones y excepciones en los órganos jurisdiccionales de la materia.

El autor delimitó espacialmente la investigación en los abogados de la ciudad de Pereira – Colombia; y temporalmente en el año 2011. Asimismo, concluyó que en virtud del artículo 622° del Código del Comercio y a lo sostenido por algunos tratadistas, existe una afectación del título valor al presentarse al órgano jurisdiccional sin haberse llenado los espacios en blanco conforme a la autorización o instrucción efectuada por el emitente. Asimismo, señala que los títulos valores emitidos en blanco, por lo menos deben contener la firma del emitente y el derecho incorporado, y que en la práctica judicial era complicado demostrar que exista un respeto estricto de las autorizaciones otorgadas, más aún si en algunos casos no se

plasmaron de manera escrita. Concluye también que los títulos valores emitidos en blanco por una entidad financiera son pasibles de una mejor verificación por cuanto dichas entidades se encuentran supervisadas por la Superintendencia Financiera, quien limita el llenado de los mismos a la carta de instrucciones dadas por el emitente. Por otra parte, en concordancia con lo descrito por la jurisprudencia, el autor manifestó que no es posible que se invierta la carga de la prueba a cargo del acreedor para que acredite el llenado de los títulos valores en blanco, sino que corresponde al deudor tal demostración. Finalmente concluye que la carta de instrucciones es determinante para la eficacia de los títulos valores en blanco; sin embargo, se presenta un problema a nivel normativo, puesto que no existe exigencia de que se expresen de manera escrita o verbal, lo cual acarrea como consecuencia un escollo durante el desarrollo del proceso judicial; así como también existe un problema si dicho título valor fue puesto en circulación, toda vez que se encuentra ante la figura de un tercero de buena fe.

Además, en el trabajo realizado por Bustamante (2014) titulado: “La utilización de la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, y la necesidad de incorporar disposiciones normativas en la legislación civil y comercial ecuatoriana, con la finalidad de evitar los perjuicios que se ocasionan a las partes”, se desarrolla una investigación en la que se describen situaciones que reflejan la carencia de preceptos legales que regulen de manera clara y específica los efectos de la letra de cambio y el pagaré suscritos en blanco, y la posibilidad de que esa falta de regulación genere un perjuicio en los derechos de las partes al tramitarse un proceso ejecutivo arbitrario, vulnerando la seguridad jurídica que dispone el artículo 82° de la Constitución Política de la República del Ecuador.

El autor delimitó espacialmente su investigación en los profesionales del derecho de las ciudades de Celica y Loja – Ecuador; y temporalmente en el año 2014. Concluye que las letras de cambio y pagarés a la orden emitidos en blanco son títulos valores utilizados frecuentemente para garantizar las obligaciones patrimoniales. Sin embargo, dichos documentos no tienen disposiciones normativas suficientes en el Código de Procedimiento Civil ni en el Código de Comercio ecuatoriano respecto a sus efectos jurídicos, generando inseguridad jurídica entre las partes intervinientes. Así también, concluye que es necesario regular un documento que contenga las condiciones para el llenado de dichos títulos valores emitidos en blanco a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, los cuales deberán ser suscritos ante la presencia de un notario. En esa línea de ideas, puntualiza que se necesita una reforma en la legislación ecuatoriana con la finalidad de regular

eficientemente la emisión y ejecución de letras de cambio y pagarés a la orden emitidas en blanco.

De igual manera, se consideró el trabajo realizado por López (2016) titulado: “Pagaré de consumo”, mediante el cual se investiga sobre los pagarés que tienen una razón de ser en el ámbito del derecho del consumidor (relación de consumo), específicamente en las condiciones que deben tener aquellos títulos ejecutivos para que durante el trámite del proceso judicial, el Juez competente analice e interprete dicha relación cartular desde la perspectiva del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y su modificatoria mediante la Ley 26.361.

El autor delimitó espacialmente la investigación en los órganos jurisdiccionales de la provincia de Jujuy – Argentina; y temporalmente en el año 2016. Concluye que debe preferirse las normas que regulan el derecho del consumidor antes que aquellas que regulan el derecho cambiario, porque la tutela del consumidor se encuentra consagrada en el artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina. Además, en cuanto a los procesos sumarios sobre ejecución de pagarés afirma que es perfectamente aplicable el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor en la medida que exista una relación de consumo y considerando que dichos títulos valores no cumplen con el principio de circulación, siendo utilizados únicamente como instrumentos para acelerar el cobro de sus acreencias. Por tanto, con la aplicación de dicho artículo se concreta un modo de proteger a las personas ante el posible abuso por parte de las entidades financieras. Finalmente, propuso regular los pagarés de consumo a fin de que sean utilizados para determinadas operaciones, delimitando su aplicación y sus condiciones.

Aunado a ello, es preciso mencionar la investigación desarrollada por Gallego (2018) titulado: “Aproximación a la teoría de la integración abusiva del título valor en blanco o con espacios en blanco”, en la que se describen las contradicciones jurisprudenciales y doctrinarias respecto a las reglas que se aplican en los casos basados en títulos valores en blanco; asimismo, en el abuso en cuanto a la firma de dichos documentos en blanco y en las discrepancias respecto a la exigibilidad de las obligaciones. Generando una desnaturalización del acto que da lugar a la obligación cartular y una afectación a los principios recogidos en la Carta Política Colombiana.

El autor concluye que el origen de la integración abusiva de los títulos valores en blanco se encuentra en las teorías del contractualismo del convenio de integración o pacto de llenado, la inoponibilidad respecto a los terceros de buena fe, declaración unilateral de voluntad, la relación primitiva y demás teorías que corresponden a la realidad jurídica colombiana. De la misma forma, señala que no existe paridad conceptual dentro de la jurisprudencia que apoye o rechace dicha integración abusiva; sino que los tratadistas colombianos encuadran tal problema dentro de las denominadas excepciones cambiarias, lo cual no permite una regulación adecuada. En ese sentido, recalca la necesidad de unificar el dogma jurídico en torno a tal problema a fin de generar una teoría que permita verificar el alcance y la finalidad de la integración de los títulos valores incompletos dentro de las relaciones materiales y procesales creadas. Además, el autor concluye que los litigantes, en el ejercicio de su derecho de defensa, alegan como excepciones, en forma general, las que se encuentran reguladas en el numeral 13 del artículo 784 del Código de Comercio y que las autoridades jurisdiccionales resuelven confundiendo el problema de la integración abusiva con la omisión de los requisitos para la exigibilidad de las obligaciones patrimoniales contenidas en el títulos valor en blanco, afectando lo regulado en el artículo 622 de la norma antes citada. Finaliza, expresando que la Corte Suprema de Justicia de Colombia debe sentar un precedente sobre la correcta interpretación y aplicación de la integración abusiva, considerando que el incumplimiento del convenio de integración o pacto del llenado no debe acarrear la inexistencia del título valor, toda vez que ello vulneraría las normas del derecho cambiial.

También, se consideró el artículo desarrollado por Carrasco (2008) titulado: “Comentario jurisprudencial en torno al cómputo del plazo de prescripción en pagarés con cláusula de aceleración”, en el cual hace referencia a la aplicación de la prescripción extintiva convencional y el cómputo de la misma, en aquellas obligaciones cambiarias sujetas a una cláusula de aceleración facultativa considerando el juicio de ejecución de obligación de dar entre el banco Santiago contra Manzano Dagoberto, ventilado en el 19° Juzgado Civil de Santiago bajo rol 5384-1999. En dicho artículo concluye que las obligaciones contenidas en los títulos valores son exigibles desde que se incurre en mora la cuota incumplida, además que la manifestación de la aceleración es semejante al momento en la que se hace exigible el pago de la totalidad de las cuotas y que el cómputo de la prescripción extintiva se contabiliza desde que la obligación deviene en exigible.

Finalmente, se consideró el trabajo realizado por Valdebenito (2010) titulado: “Completamiento de la letra de cambio en blanco en la legislación chilena”. En dicho trabajo el autor concluye que, conforme al artículo 11 de la Ley Cambiaria, la letra de cambio emitida en blanco es válida desde su emisión, bastando que en el documento se exprese la firma del librador o del aceptante; sin embargo, las obligaciones contenidas en ella podrán ser exigibles siempre y cuando se cumpla con llenar los espacios en blanco. Asimismo, señala que los acuerdos al que arriben las partes sobre el llenado de la letra de cambio puede ser manifestada de forma expresa o tácita, y de esta manera de integran los demás requisitos esenciales para la producción de los efectos jurídicos del mencionado título valor. De igual manera, concluye que la letra de cambio no se encuentra limitada para su circulación, puesto que un tercero legitimado tiene la potestad de completarla conforme a los acuerdos adoptados para el pago. Por otra parte, en lo concerniente al pacto de completamiento, describe que tiene una naturaleza extracambiaria y que su incumplimiento no invalida la letra de cambio, no obstante, el deudor no estará obligado a cumplir con dicha obligación, a menos que sea requerida a través de las normas del derecho común. Culmina la descripción de su trabajo señalando que el principio de buena fe es el que gobierna a la letra de cambio en blanco y al pacto de completamiento.

1.2.- Marco Teórico

El marco teórico es una etapa en la cual se recopila toda la información necesaria para la construcción de nuestro diseño metodológico, constituye una exposición de los elementos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación y proporciona el conocimiento profundo de las teorías que giran en torno al objeto de estudio (Balliache, 2009, p. 2). Considerando lo anteriormente expuesto, resulta pertinente comenzar a desarrollar las categorías de la presente investigación. En ese sentido, iniciaremos con la definición del convenio de integración y sus subcategorías, acto jurídico y autonomía de la voluntad; luego, plasmaremos los conceptos correspondientes a la prescripción extintiva de pagarés incompletos y sus subcategorías, el artículo 1990° del Código Civil (nulidad) y pagarés no sujetos a protesto. Asimismo, describiremos los aspectos doctrinarios y jurisprudenciales de ambas categorías, la explicación histórica y los mapas de cada una de ellas.

Convenio de integración

Concepto

El convenio de integración es un concepto que no se encuentra descrito como tal en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, únicas normas del sistema jurídico peruano que hacen referencia a dichos convenios, nada más lo definen como “acuerdos adoptados” los cuales pueden estar expresados en cualquier documento. Sin embargo, consideramos conveniente instituirlos como convenio de integración, puesto que, tiene como finalidad integrar a los títulos valores emitidos de forma incompleta, los datos que hayan sido expresados de común acuerdo por las partes intervinientes, a efectos de lograr la eficacia necesaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones cambiarias asumidas.

Por otra parte, para determinados ordenamientos jurídicos internacionales, como es el caso de Uruguay, la definición de convenio de integración es equivalente a la definición de pacto de completamiento. En ese sentido, para Benglian (s/f), según lo regulado por el Decreto Ley 14.412 y sus modificatorias, el Decreto Ley 14.701 y el Código de Comercio, el pacto de completamiento es un acuerdo de voluntades generador de determinadas obligaciones y debe ser entendido como un acto jurídico distinto del título valor. Es decir, deja claro que ambos títulos tienen naturaleza jurídica distinta, toda vez que el pacto de completamiento forma parte de la creación del título valor (causa inmediata).

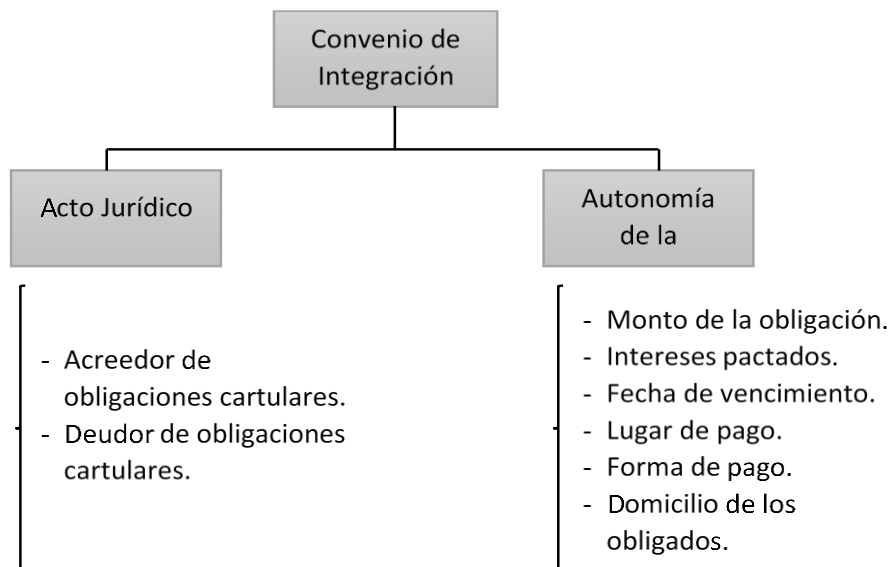
Por su parte, Bado & López, (2016, p. 60-61) señalan que el pacto de completamiento debe contener dos requisitos: que lo haya realizado el legítimo tenedor y que el título valor sea completado antes de solicitar su exigibilidad, según lo regulado por el artículo 4 del DLTV. Asimismo, refiere que tiene naturaleza extracambiaria y vincula al tenedor y al creador del título, puesto que otras personas no pueden tener conocimiento de su existencia. Por tanto, en virtud del artículo 61 de la norma antes descrita, el incumplimiento de los acuerdos plasmados en el pacto de completamiento, no pueden alegarse contra el tenedor que no haya suscrito dicho pacto, a menos que se pruebe la mala fe o culpa grave.

En el caso de Argentina, Paolantonio & Bergel (1997, p. 247) señalan que el pacto de completamiento también puede denominarse acuerdo de integración y lo definen como un

acto jurídico que se origina a partir de la relación inter partes. Agregan que, no se encuentra regulada en la legislación comercial argentina; ergo, sus efectos deberán ser determinados por las normas generales del Derecho Privado, específicamente por los artículos 1017° al 1019° del Código Civil.

Las definiciones antes descritas sobre el convenio de integración o pacto de completamiento hacen referencia a los acuerdos celebrados entre las partes; es decir, actos jurídicos en los que intervienen el acreedor y el deudor de obligaciones patrimoniales que serán exigibles a través de un título valor. Asimismo, a través de la autonomía de la voluntad, las partes van a regular la información concerniente al monto de la obligación, intereses correspondientes, fecha de vencimiento, lugar y forma de pago, dirección actual de los obligados, etc. Es decir, si bien es cierto que, los convenios de integración forman parte de la relación causal, también es cierto que, sus efectos serán necesarios para que pueda ejecutarse las obligaciones de la relación cartular.

Figura 1. Convenio de Integración.



Fuente: Elaboración propia.

En esa línea de ideas y continuando con el desarrollo de nuestro marco teórico respecto al convenio de integración, es pertinente precisar los conceptos relacionados con el acto jurídico y la autonomía de la voluntad, los cuales se describen a continuación.

Acto jurídico

Definición de acto jurídico

El artículo 140º del Código Civil de 1936 regula al acto jurídico como “la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas (...)”. Dicha definición proviene de la doctrina francesa; sin embargo, no refleja lo que ocurre en nuestra realidad. En ese sentido, Taboada (1999, p. 44) señala que la definición antes descrita pudo haberse considerado por tradición jurídica en nuestra normativa, pero no hay impedimento para entender el acto jurídico desde la perspectiva del negocio jurídico, sobre todo si se verifica que la concepción clásica se quedó estancada en el tiempo.

Según Torres (2001, p. 63), el acto jurídico es un instrumento con el que se concreta la autonomía de la voluntad, que a su vez debe ser entendida como la libertad que tienen los sujetos de derecho de gobernar y manejar sus intereses dentro de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico.

Por su parte, Barandiarán (1999, p. 36) define al acto jurídico como un hecho jurídico, voluntario, lícito, con efecto querido por el sujeto, cuya finalidad es crear, modificar, conservar, transferir o extinguir determinados derechos. Asimismo, refiere que, en cuanto al efecto querido, existe una declaración de voluntad cuya eficacia se origina en virtud al ordenamiento jurídico.

En esa misma línea de ideas, Roque (2008, p. 60) señala que el acto jurídico es un acto humano consiente cuya finalidad es crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre las personas y que su aplicación en el mundo exterior se encuentra supeditado a las regulaciones del derecho objetivo; es decir, “pasar de la relación jurídica de estado de posibilidad a estado de existencia”.

Las definiciones antes referidas también se aplican para el convenio de integración, toda vez que, la identifican como una relación entre dos sujetos y/o partes intervinientes, las cuales van a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas que se vinculan directamente con los títulos valores incompletos y que van a otorgarle la eficacia necesaria para la exigibilidad de las obligaciones patrimoniales asumidas.

Marco histórico del acto jurídico

Conforme se ha detallado precedentemente, el convenio de integración debe ser entendido como un acto jurídico celebrado entre dos partes, el acreedor y el deudor. En esa línea de ideas, es menester hacer referencia al marco histórico del acto jurídico, para poder entender los inicios de esta institución jurídica.

En efecto, el acto jurídico está compuesto de fundamentos que tratan de explicar si las intenciones de un sujeto, en un momento determinado, en una sociedad y un ordenamiento jurídico específico, son relevantes (Roque, 2008, p. 56). Es ese sentido, es preciso señalar que en el desarrollo de la teoría del acto jurídico encontramos a las nociones aportadas principalmente por la doctrina francesa y por la doctrina alemana.

La doctrina francesa, cuyas ideas fueron estudiadas y expuestas por Domat y Pothier, refleja el pensamiento conocido como “Iusnaturalismo”, el cual resalta como valor fundamental la “Libertad del Hombre”; es decir el hombre como centro de la sociedad y del ordenamiento jurídico, cuya finalidad debía limitarse a consagrar los propósitos de los sujetos de derecho (Taboada, 1999, p. 42). La concepción francesa del acto jurídico puede ser entendida como individualista, porque deja de lado el aspecto social y normativo, y como artificial, porque coloca a la voluntad del sujeto como esencia del acto jurídico (Roque, 2008, p. 56).

Considerando la concepción Iusnaturalista, es aceptable la definición de acto jurídico como “simples manifestaciones de voluntad dirigidas a la producción de efectos jurídicos, sin tomar en cuenta en absoluto la función organizadora y ordenadora del ordenamiento jurídico” (Taboada, 1999, p. 42).

Por su parte, la doctrina alemana, antes de la promulgación del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB), y con mayor fuerza desde su vigencia en 1900, al igual que la doctrina francesa, en su afán de conceptualizar las acciones humanas relevantes para el derecho, elaboraron el denominado “negocio jurídico”, cuya definición clásica pandectista era similar a la de acto jurídico en cuanto a la “declaración de voluntad que produce efectos jurídicos”; es decir, únicamente se diferenciaba en el término utilizado (Taboada, 1999, p. 43).

Para que se diferencien los conceptos de acto jurídico y negocio jurídico, fue necesario que los juristas alemanes entiendan a este último como un “supuesto de hecho” más que como una “manifestación de voluntad”, cuya característica principal es la intervención del ordenamiento jurídico en las relaciones jurídicas que van a regular los intereses de los sujetos de derecho a efectos de satisfacer sus necesidades.

Es menester dejar claramente establecido que no se va a profundizar en el tema de las diferencias entre las doctrinas antes descritas; sin embargo, se va a considerar la idea respecto al enfoque desarrollado por la teoría general del negocio jurídico, puesto que sus postulados convergen con el desarrollo de la presente investigación.

Estructura del acto jurídico

La estructura del acto jurídico, según la doctrina tradicional se compone únicamente por elementos que se clasifican de la siguiente forma: esenciales o *essentialia negotii*, naturales o *naturalia negotii* y accidentales o *accidentalia negotii*. No obstante, a medida que el acto jurídico fue evolucionando, en la doctrina moderna se plasmó otro criterio respecto a dicha estructura, señalando que el acto jurídico está compuesto por presupuestos, elementos y requisitos (Cusi, 2014), el cual será descrito en la presente investigación, toda vez que permite explicar al convenio de integración como una institución jurídica del derecho contemporáneo.

Presupuestos

Los presupuestos deben ser considerados como los antecedentes necesarios para la construcción del acto jurídico. No componen el aspecto interno del acto jurídico, pero son indispensables para su celebración. Tenemos a los siguientes: sujetos y objeto.

a) Sujetos

Son aquellos que van a intervenir en las relaciones jurídicas creadas, modificadas, reguladas o extinguidas. El artículo 140º del Código Civil hace referencia a “agente capaz”; sin embargo, dicha terminología tiene una apreciación demasiado amplia que no permite explicar de manera correcta este presupuesto. En ese sentido, cuando los sujetos se interrelacionan se convierten en partes del acto jurídico, las cuales deben entenderse como “centros de imputación de situaciones y relaciones jurídicas por

parte del ordenamiento jurídico” (Beltran & Campos, 2009, p. 200). Los mismos autores recomiendan no confundir los términos “sujetos” con “partes”, toda vez que una parte puede estar compuesta por varios sujetos, y también es válido que un sujeto puede formar más de una parte en una misma relación jurídica. Además, señala que los requisitos que debe contener todo sujeto son los siguientes: Legitimación, determinabilidad y capacidad.

Para efectos del convenio de integración, podemos decir que los sujetos son: acreedor, la persona que suscribe el documento y quien tiene la obligación de completar el título valor incompleto antes de exigir el cumplimiento de las obligaciones cartulares, y deudor, persona que suscribe el documento y quien tiene que cumplir con las obligaciones cartulares, siempre y cuando el título valor se haya completado de acuerdo al convenio.

b) Objeto

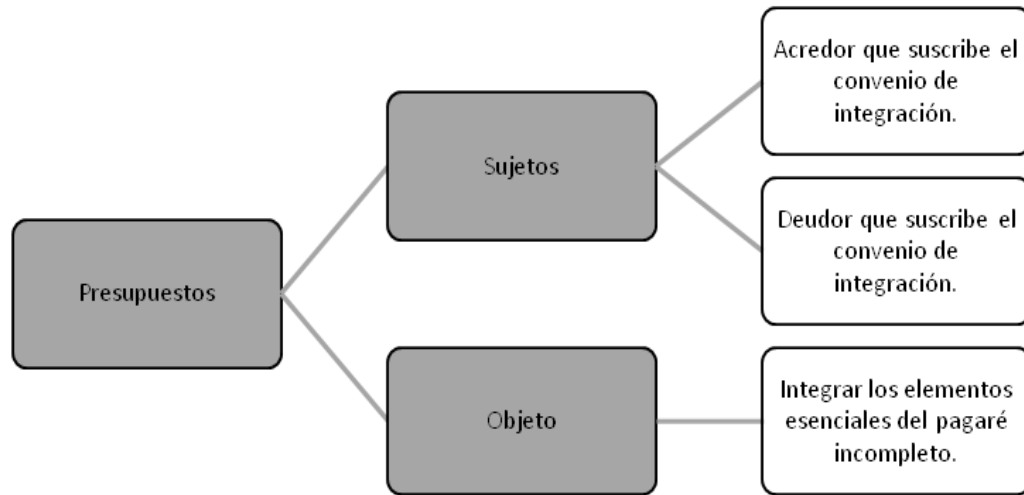
Es un presupuesto que puede ser entendido como el bien jurídico o el medio idóneo para la satisfacción de los intereses de los sujetos; es decir, los valores que pueden ser el punto de referencia para la celebración del acto cuyos efectos se aprecian en las relaciones jurídicas creadas, reguladas, modificadas o extinguidas (Beltran & Campos, 2009, p. 204).

Para Baca (s/f, p. 14) el objeto, como conducta específica en una obligación, puede ser entendida como un comportamiento de dar, hacer o no hacer; es decir, una prestación o una abstención.

Al igual que los sujetos, el objeto también tiene determinados requisitos o características que deben estar presentes para la celebración del acto jurídico, y que a saber son: existir o ser posible de existir, determinabilidad y licitud (Barandiarán, 1999, p. 51).

En lo que respecta al convenio de integración, el objeto es integrar a los títulos valores incompletos los datos necesarios que deberán ser expresados antes de exigir el cumplimiento de las obligaciones cartulares. No obstante, si bien es cierto, los títulos valores tienen autonomía o abstracción respecto de los actos jurídicos que lo originan, también es cierto que cuando se tratan de títulos valores incompletos, su eficacia se encuentran supeditada a que se respeten las instrucciones o condiciones establecidas en el convenio de integración.

Figura 2. Presupuestos del acto jurídico



Fuente: Elaboración propia.

Elementos de validez

Los elementos de validez son aquellas partes integrantes en la celebración del acto jurídico. Es decir, a diferencia de los presupuestos, estos elementos forman el aspecto interno del acto jurídico, los componentes comunes del acto jurídico, y son los siguientes: manifestación de voluntad, la causa y la forma.

a) **Manifestación de voluntad**

Es un elemento cuyo estudio a nivel doctrinario generó la identificación de dos nociones: la manifestación de voluntad propiamente dicha y la declaración de la voluntad. Autores como Barandiarán (1999, p. 64) y Beltran & Campos (2009, p. 2016) coinciden en afirmar que la declaración de voluntad debe ser entendida como la exteriorización consciente de la voluntad interna de un sujeto, que debe ser reconocible o comprendido por quien lo interprete.

A efectos de la expresión de dicha voluntad interior del sujeto, esta puede ser declarada o exteriorizada de manera escrita, verbal o por otros medios de comunicación que sean de comprensión entre los sujetos; por otra parte, puede ser manifestada a través de un comportamiento concluyente sin mediar una expresión

positiva (manifestación tácita), la cual se encuentra limitada a lo dispuesto en la ley, cuando esta señale que necesariamente, para un acto particular, la voluntad deba constar expresamente (Barandiarán, 1999, p. 67).

Los requisitos a cumplir por la manifestación de voluntad son los siguientes: que la voluntad sea formada libre de vicios; es decir una voluntad plena y sin defectos o vicios (error, dolo, violencia e intimidación); y que se encuentre circunscrita a los mecanismos estipulados por las partes o por la ley para su declaración (estructural) (Beltran & Campos, 2009, p. 207).

Por otra parte, merece especial mención al silencio como manifestación de voluntad y a la voluntad presumida por ley (voluntad presunta). En cuanto al primero, se encuentra regulado en el artículo 142° del Código Civil, señalando que el silencio puede ser considerada como una declaración de voluntad siempre que las partes o la ley lo hayan dispuesto, puesto que, como regla general, no constituye declaración de voluntad. Respecto a lo segundo, está referida a una conducta que crea una situación jurídica a la cual se le otorga el carácter de declaración de voluntad (Barandiarán, 1999, p. 68).

En nuestra legislación no existe una referencia directa sobre el modo en el que deben expresarse los acuerdos adoptados por los sujetos para la integración de los datos a los títulos valores. Sin embargo, de lo regulado por el artículo 19° literal e) de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, podemos interpretar que estos deben constar por escrito, toda vez que la norma describe que, en caso de incumplimiento de los acuerdos adoptados, se deberá acompañar el documento en el cual hayan quedado plasmados.

b) Causa o fin

La causa o fin tiene un aspecto subjetivo; es decir, los motivos determinantes que serán la base para la celebración de los actos jurídicos; y un aspecto objetivo; es decir, como una función social y económica para los fines otorgados por el Derecho que justifica la autonomía de la voluntad (Taboada, 2002, p. 338).

Determinar el por qué, la razón para el surgimiento de la obligación; y el para qué, la licitud o ilicitud de la obligación, independientemente de que los actos jurídicos tengan o no contenido patrimonial (onerosos o gratuitos). Es decir, es la que da

sentido a la estructura formal y final del acto jurídico cuya negación implicaría también la negación de la esencia misma del acto. (Barandiarán, 1999, p. 57).

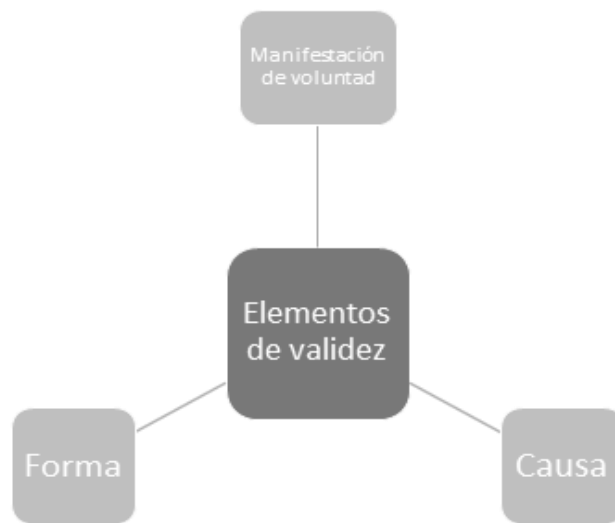
Para el caso del convenio de integración, la causa o fin radica en otorgar eficacia a los títulos valores incompletos, conforme a lo amparado en la Ley de Títulos Valores. El convenio de integración no puede subsistir por sí mismo, sino que depende de un acto jurídico cartular para que produzca sus efectos, ya que su esencia está directamente relacionada con dicha relación jurídica cambiaria.

c) **Forma**

Este elemento puede ser entendido como el modo o técnica para exteriorizar la voluntad del sujeto. En la regulación de este elemento en el Código Civil encontramos dos tipos: libre o facultativa, es decir, son los sujetos quienes determinan el modo adecuado para regular sus intereses (artículo 143°); y la forma impuesta por ley, que a su vez identifica a las siguientes: solemne o ad solemnitatem, cuando su inobservancia se sanciona con nulidad; y, probatoria o ad probationem, cuando su inobservancia no se sanciona con nulidad (Beltran & Campos, 2009, p. 210).

Como ya lo hemos señalado precedentemente, cuando nos referimos a la manifestación de voluntad, el convenio de integración debe expresarse de manera escrita, a fin de hacer valer el derecho del deudor que pretenda cuestionar el título valor incompleto cuando no haya sido completado conforme a las condiciones pactadas. Sin embargo, debemos agregar que la inobservancia de dicha formalidad no se sanciona con nulidad; ergo, la forma del convenio de integración se considera como ad probationem.

Figura 3. Elementos de validez del acto jurídico.



Fuente: Elaboración propia.

Requisitos de validez

Los requisitos pueden ser entendidos como las condiciones que los elementos y los presupuestos deben cumplir para que los efectos del acto jurídico puedan ser válidos y eficaces. Es decir, los elementos y los presupuestos son necesarios para la formación del acto jurídico y los requisitos son necesarios para su validez (Cusi, 2014).

a) Capacidad del sujeto

La capacidad debe ser aplicada en tres aspectos: la capacidad de goce (capacidad jurídica), entendida como aquella aptitud de los sujetos para ser titulares de situaciones jurídicas subjetivas (derechos, obligaciones, facultades, cargas, etc.); capacidad de ejercicio (capacidad de obrar), entendida como aquella aptitud del sujeto para adoptar manifestaciones de voluntad valederas que van a modificar su esfera jurídica; y, capacidad natural, entendida como aquella aptitud del sujeto para conocer y querer realizar los actos jurídicos (Beltran & Campos, 2009, p. 201). Es decir, los sujetos intervinientes en la suscripción del convenio de integración deben ser capaces de asumir las obligaciones que van a ser exigibles cuando su contenido se integre en los títulos valores incompletos.

b) Determinabilidad del sujeto y del objeto

En lo que respecta a la determinabilidad del sujeto se debe diferenciar dos categorías: sujeto determinado, cuando el sujeto del acto jurídico se tiene encuentra plenamente identificado; y, sujeto determinable, cuando la identificación del sujeto se realiza a través de mecanismos indicados por el propio acto jurídico o por la ley (Beltran & Campos, 2009, p. 202). En el caso del convenio de integración, al momento de su celebración, ambos sujetos están claramente determinados, puesto que a través de la autonomía de la voluntad van a pactar respecto a las condiciones en las cuales serán completados los títulos valores incompletos. Sin embargo, cuando se trata de la exigibilidad de las obligaciones cartulares, los sujetos son indeterminables, ya que, por el principio de circulación de los títulos valores, el beneficiario de las obligaciones puede recaer en cualquier persona.

En otra línea de ideas, la determinabilidad del objeto también puede distinguirse en determinadas, cuando el objeto se encuentra individualizado en cuanto a su calidad y cantidad; y determinables, cuando la individualización del objeto se realiza en fecha posterior a la celebración del acto jurídico. Cabe precisar que la determinación del objeto puede ser efectuada por las partes, por la ley o por un tercero debidamente facultado (Beltran & Campos, 2009, p. 204). Al respecto, debemos señalar que el objeto del convenio de integración, de manera general, está plenamente determinado, toda vez que, le dará eficacia a los títulos valores incompletos. No obstante, también es preciso indicar que, de manera específica, es determinable, puesto que el contenido del mismo es variable durante el tiempo; verbigracia: el monto de las obligaciones cartulares, la fecha de vencimiento, etc.

c) Posibilidad del objeto

La posibilidad del objeto debe ser en dos aspectos: física y jurídica. En cuanto a la posibilidad física, tiene que reunir las condiciones para que pueda materializarse en el plano real. En ese sentido, el objeto será físicamente posible cuando exista o tenga la posibilidad de existir, porque los bienes futuros pueden ser objetos en un acto jurídico (Barandiarán, 1999, p. 51). Aplicando dicha definición al convenio de integración, tenemos que el objeto tiene la posibilidad de existir, siempre y cuando

su contenido se plasme en los títulos valores incompletos respetando la voluntad de los sujetos.

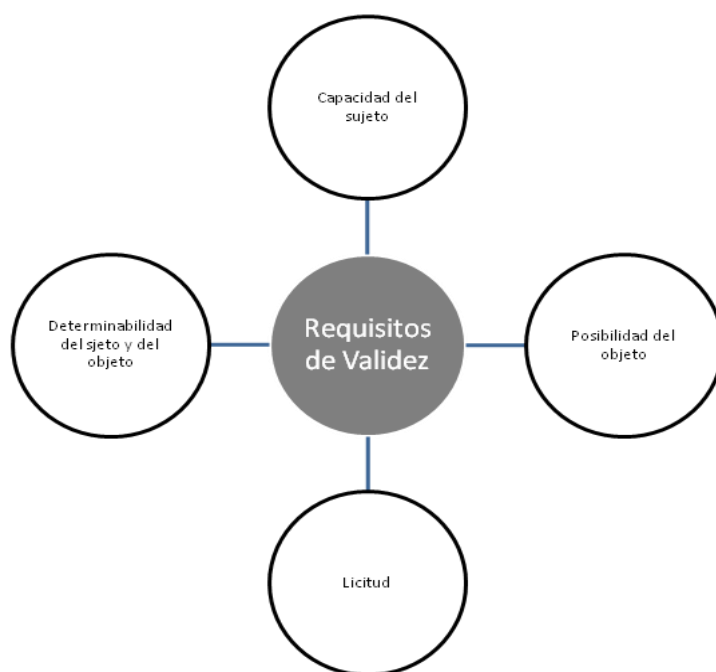
Por otra parte, la posibilidad jurídica, debe entenderse como la protección que le otorga el ordenamiento jurídico para que los efectos del acto puedan ser ejecutados en la práctica. Al respecto, en lo que se refiere al convenio de integración, dicha posibilidad se encuentra amparada por la Ley de Títulos Valores y el Código de Protección y Defensa del Consumidor en cuanto al derecho sustantivo; y, en el Código Procesal Civil en cuanto al derecho adjetivo.

d) **Licitud**

El literal c) del artículo 140° del Código Civil regula lo concerniente a la licitud del fin para la validez del acto jurídico. Asimismo, el numeral 14 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que las personas tenemos derecho a contratar con fines lícitos y que no contravengan el orden público.

La licitud del fin va a depender de la orientación de la manifestación de voluntad. Mientras que los efectos jurídicos de dicha manifestación se encuentren en consonancia con las normas de derecho objetivo, se considerará que el fin es lícito; contrario sensu, si los efectos de la manifestación de voluntad no se encuentran bajo el amparo de dichas normas, se considerará que el fin es ilícito (Vidal, 1990, p. 785).

Figura 4. Requisitos de validez del acto jurídico.



Fuente: Elaboración propia

Vicios de la voluntad

Considerando que el convenio de integración, por su estructura, es considerado como un acto jurídico en la presente investigación, es pertinente hacer referencia a los vicios de la voluntad que se encuentran regulados a partir del artículo 201° hasta el 218° del Código Civil. Estos vicios están referidos a las incompatibilidades entre lo querido y lo declarado por los sujetos. Y a saber son: error, dolo y violencia.

a) Error

Se refiere a la disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad externa del sujeto; es decir, en la esencia del acto jurídico. Cabe precisar que, no todo error puede ser considerado como vicio de voluntad, sino aquel que reviste cierta gravedad.

Se encuentra regulado desde el artículo 201° hasta el 209° del Código Civil, y se pueden identificar tres tipos: error esencial, error en cuenta y error en el motivo.

Existe error esencial, cuando afecta la naturaleza del acto jurídico. Se trata de un vicio que se presenta cuando la declaración de voluntad no concuerda con la voluntad interna del sujeto y afecta las situaciones jurídicas subjetivas (derechos y obligaciones), que son la esencia del acto jurídico. Al respecto, es preciso señalar que no existe concurrencia de voluntades, por tanto, el consentimiento no es adecuado para crear las relaciones jurídicas (Barandiarán, 1999, p. 94). Este error puede presentarse en el objeto principal (especie y cantidad) de la declaración, cuando no hay correspondencia con la voluntad; así como también, en la persona, cuando la declaración se hizo considerando al sujeto y sus cualidades; sin embargo, cuando dicho error se refleje en relación a la identificación del sujeto, del objeto o de su naturaleza, no constituirán vicios al acto jurídico.

También existe el error en cuenta, el cual tiene carácter de accidental, puesto que no influye en la decisión de los sujetos, sino en el cálculo del objeto del acto jurídico, por tanto, no genera la anulación de dicho acto, sino su rectificación, conforme lo estipula el artículo 204° del Código Civil.

Finalmente, nuestra normativa civil establece otro tipo de error cuando se genera en el motivo; es decir, en la causa determinante del acto jurídico en concreto. Merece especial atención al hecho de equiparar al motivo con la causa entendida como un motivo decisivo de la voluntad de obligarse o condición propia del acto, y no con la causa entendida como elemento de validez del acto jurídico.

b) Dolo

Es un vicio que afecta específicamente al sujeto que va manifestar la voluntad de celebrar determinado acto jurídico y debe referirse a un hecho objetivo. La causa por la que se anula el acto jurídico afectado por el dolo, es el error en el sujeto que celebra el acto. En ese sentido, cabe señalar que la diferencia entre el error y el dolo radica esencialmente en su origen; mientras que el error nace en el errante, el dolo es causado por un sujeto diferente al errante; es decir, es intencional. Por tanto, el sujeto diferente debe tener conocimiento que su conducta genera una interpretación errada en el errante, para que opere el dolo, lo cual se puede acreditar con las condiciones del errante (víctima) y las circunstancias del caso (Barandiarán, 1999, p. 114). Debemos precisar que, al hacer referencia a un sujeto diferente, se engloba al otro sujeto que participa en el acto jurídico o a un sujeto ajeno a dicho acto, regulado en el segundo párrafo del artículo 210° del Código Civil.

Por otra parte, nuestra normativa civil regula lo concerniente al dolo incidental y señala que, si el engaño no tiene una naturaleza determinante en la manifestación de voluntad del sujeto para celebrar el acto jurídico, este será válido, pero con ciertas desventajas para el errante (víctima).

Finalmente, el artículo 212° del Código Civil hace referencia a la omisión dolosa, la cual debe ser entendida como la manifestación negativa del dolo expresado precedentemente; y el artículo 213° del mismo cuerpo de leyes regula el dolo recíproco, señalando que no se va a producir la anulación del acto jurídico si el dolo ha sido aplicado por ambos sujetos, toda vez que ambos tienen la misma responsabilidad.

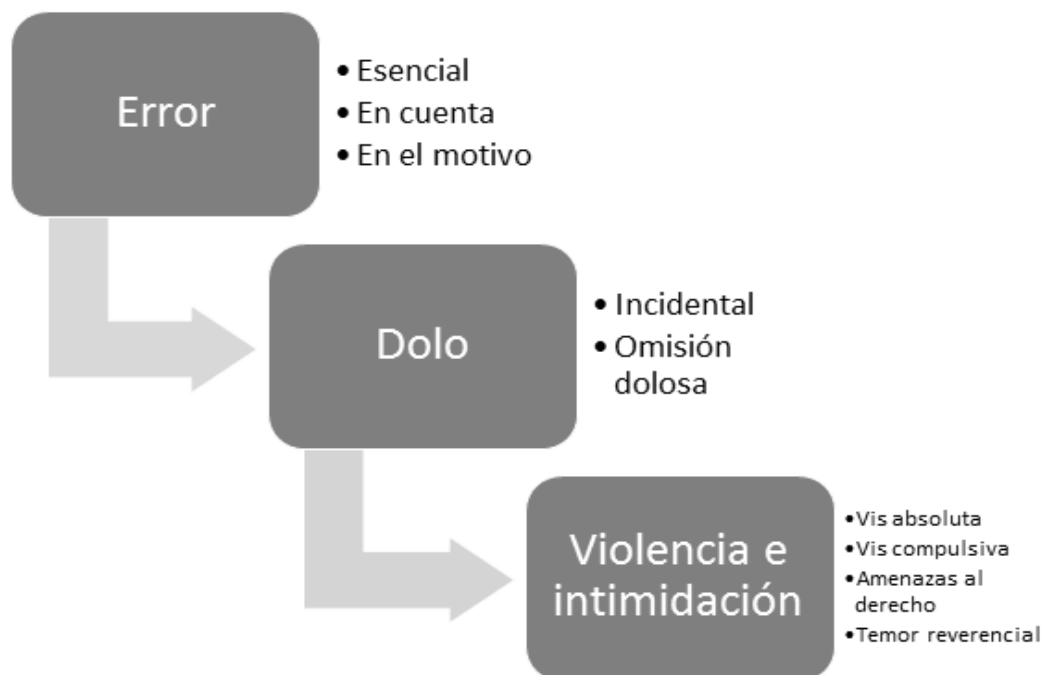
c) Violencia e intimidación

Son vicios que afectan la libertad en la manifestación de la voluntad y son sancionados con la anulación del acto jurídico celebrado entre los sujetos.

En lo que respecta a estos vicios se pueden identificar dos clases: la violencia física (vis absoluta) y la violencia moral (vis compulsiva). La primera ocurre cuando media una fuerza irresistible que obliga a un sujeto a hacer lo que no quiere o se le impide hacer lo que quiere; y la segunda ocurre cuando media el temor o intimidación que afecta la libertad del sujeto en la manifestación de su voluntad, generando un mal inminente y grave (Barandiarán, 1999, p. 124).

La calificación de la violencia e intimidación se encuentra regulado en el artículo 216° del Código Civil y según Barandiarán (1999, p. 131) dichos criterios únicamente pueden ser valorados en la vis compulsiva, puesto que en la violencia física sólo se puede examinar el hecho generador de violencia. Por otra parte, en lo que respecta a los supuestos que constituyen intimidación, la normativa civil señala que son aquellas amenazas en el ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, precisando que para que sanción de este tipo de vicio de la voluntad debe existir injusticia.

Figura 5. Vicios de la voluntad.



Fuente: Elaboración propia.

Nulidad del acto jurídico

El convenio de integración, como acto jurídico, puede verse afectado en diversos supuestos que nuestro Código Civil regula con el nombre de nulidad y anulabilidad. El primero es originado cuando falta un elemento, presupuesto o requisito, por tanto, el acto jurídico debe considerarse inexistente (nulidad absoluta); y el segundo cuando existe un defecto en algún elemento, presupuesto o requisito, por tanto, el acto jurídico puede resultar ineficaz (nulidad relativa).

Antes de continuar con la descripción de los conceptos antes expuestos, resulta necesario precisar que no se va a considerar a la inexistencia como una causal de invalidez diferente a la nulidad; toda vez que, en palabras de Barandiarán (1999, p. 286), considerando lo descrito en la Exposición de Motivos del Código Civil, carece de sentido confundir las instituciones que únicamente logran oscurecer en campo legislativo observando que la inexistencia del acto jurídico se confunde desde la óptica de los efectos de la nulidad.

Las causales de nulidad absoluta se encuentran reguladas en el artículo 219º del Código Civil, que a saber son:

1. Nulidad por falta de manifestación de voluntad del agente

La primera causal que nos presenta la normativa civil está referida a la falta de manifestación de voluntad del sujeto en un determinado supuesto. El legislador al referirse como manifestación de voluntad en realidad hace referencia a la declaración de voluntad como una unidad configurada por la exteriorización de la voluntad que se encuentra plasmada en el contenido del acto jurídico; y la voluntad de declarar, que se compone por la conducta de la propia declaración y el conocimiento declaratorio de dicha conducta (Taboada, 1988, p. 71). En suma, la nulidad referida sancionará la falta de manifestación del sujeto en cuanto a la voluntad declarada y a la voluntad por declarar. Entonces, el convenio de integración incurrirá en esta causal de nulidad, siempre y cuando alguno de los sujetos no haya plasmado su firma en el documento, entendido como algo físico, el cual contiene los acuerdos para el llenado de los títulos valores incompletos.

2. Nulidad por incapacidad absoluta

La segunda causal está referida a la incapacidad absoluta del sujeto que interviene en el acto jurídico, precisando que únicamente se refiere a la incapacidad de ejercicio. Esta causal afecta a la capacidad como requisito del acto jurídico y no como elemento del mismo; sin embargo, la sanción atiende al hecho de que deben coexistir los elementos, presupuestos y requisitos para la configuración del acto jurídico que produzca efectos válidos jurídicamente (Taboada, 1988, p. 72).

3. Nulidad por imposibilidad del objeto

La tercera causal está referida a la afectación de dos requisitos del objeto: la posibilidad y la determinabilidad. Como se ha expresado anteriormente, el artículo 140° del Código Civil exige que el objeto sea física y jurídicamente posible y que sea determinado o determinable en la celebración del acto jurídico. Por tanto, la ausencia de estos requisitos es sancionado con la nulidad por la normativa civil (Taboada, 1988, p. 74). En esa línea de ideas, Barandiarán (1999, p. 288), citando a Espínola, enumera algunas prestaciones que pueden ser sancionadas por nulidad según esta causal: las prohibiciones dispuestas por la ley, las contrarias al orden público y a la seriedad de la vida jurídica, las que no existen ni podrán existir, las que se encuentran fuera del comercio y las litigiosas.

En lo que respecta al convenio de integración, esta causal puede manifestarse cuando los acuerdos no están destinados a integrar determinados datos en un título valor incompleto, apartándose de su propia naturaleza jurídica y equiparándose con otro tipo de acto jurídico que no tiene relación con la obligación cartular.

4. Nulidad por fin ilícito

La cuarta causal está referida a la causa, que en su aspecto subjetivo es ilícito por vulnerar el orden público y las buenas costumbres. Hacemos referencia al aspecto subjetivo, considerando que se ha optado por describir que el acto jurídico requiere de un fin que no se encuentre viciado por algún motivo contrario a las normas antes descritas (Taboada, 1988, p. 75).

5. Nulidad por simulación absoluta

La simulación es entendida como la disconformidad entre la voluntad declarada y la voluntad interna realizada por los sujetos del acto jurídico con el fin de engañar a un tercero. La simulación se divide en dos clases: simulación absoluta, cuando existe un solo acto jurídico simulado; y la simulación relativa, cuando existe un acto jurídico simulado oculta al acto jurídico verdadero (disimulado). En ambos casos el acto jurídico simulado es nulo, mientras que el acto jurídico disimulado es válido en caso cumpla con los elementos, presupuestos y requisitos. Sin embargo, nuestro Código Civil únicamente ha optado por sancionar con nulidad cuando se trate de una simulación absoluta (Taboada, 1988, p. 75).

6. Nulidad por inobservancia de la forma

La sexta causal está referida a la forma únicamente en el aspecto solemne o ad solemnitatem. Conforme se ha expresado en párrafos precedentes, los elementos del acto jurídico son la manifestación de voluntad y la causa o fin; sin embargo, la norma establece determinadas formalidades para ciertos actos jurídicos, por tanto, dicha formalidad también debe ser considerada como un elemento de validez del acto jurídico, cuyo incumplimiento estará sancionado con la nulidad. Al respecto, cabe señalar que el convenio de integración no puede estar sujeto a esta causal de nulidad, puesto que, como lo hemos descrito precedentemente, la formalidad del convenio de integración es ad probationem.

7. Nulidad expresa y nulidad virtual

Las últimas causales de nulidad están referidas a aquellas que se encuentran declaradas expresamente por la ley (expresa) o cuando contravienen una norma imperativa (nulidad virtual). Respecto a la nulidad expresa es necesario señalar que, es la norma la señala que un determinado supuesto debe ser sancionado con nulidad; es decir, es un límite para la autonomía de la voluntad de los sujetos intervinientes en la relación jurídica. Este concepto también será tratado posteriormente, cuando se desarrolle lo concerniente al artículo 1990° del Código Civil. Por otra parte, la nulidad virtual aplica a aquellos actos jurídicos contrarios a lo regulado en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil referente a las normas de orden público y buenas costumbres (Taboada, 1988, p. 76).

Las características de la nulidad absoluta se encuentran reguladas en el artículo 220° del Código Civil, según lo expresado por Barandiarán (1999, p. 295), citando a Planiol y Ripert, son:

- La nulidad no requiere mandato jurisdiccional para su constitución. En caso de controversia entre los sujetos, el Juez, únicamente va a reconocer dicha nulidad (declararla). No obstante, el propio Juez, de oficio puede declarar la nulidad del acto jurídico cuando esta sea manifiesta.
- Cualquiera que tenga interés puede solicitar la nulidad. Al respecto, cabe señalar que la norma no expresa que necesariamente exista un perjuicio para solicitar la nulidad, basta que la situación de una persona haya sido alterada por el acto jurídico celebrado

para que se configure el interés. Por otra parte, la nulidad, al tener razones que podrían afectar el orden público, también puede ser solicitada por el Ministerio Público, o como señalamos precedentemente, ser declarada de oficio.

- El acto no produce efecto alguno. Al carecer de un elemento, presupuesto o requisito, el acto jurídico no puede producir efectos jurídicos válidos.
- La confirmación queda descartada. Si bien es cierto, la confirmación tiene como finalidad que el vicio del acto jurídico desaparezca, esta no puede aplicarse en la nulidad, puesto que, para la ley, dicho acto es inexistente por la falta de un elemento, presupuesto o requisito. Sin embargo, es preciso señalar que los actos jurídicos nulos pueden convertirse en válidos, únicamente si se adecuan a otro acto jurídico que sí presenten los elementos, presupuestos y requisitos que le otorguen dicha validez.

Habiendo desarrollado el contenido de la nulidad absoluta, corresponde ahora hacer lo propio con la nulidad relativa o anulabilidad, la cual, como señalamos anteriormente, se genera por un defecto o vicio en un elemento, presupuesto o requisito del acto jurídico. En esa línea de ideas, el artículo 221° del Código Civil regula las siguientes causales para declarar dicha anulabilidad:

1. Anulabilidad por incapacidad relativa

La regulación de los incapaces relativos se encuentra en el artículo 44° del Código Civil, dentro de los cuales se consideran a los mayores de 16 y menores de 18 años de edad, los retardados mentales, los pródigos, los que sufren de deterioro mental que no puedan expresar su voluntad de manera libre, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos y a los que se haya declarado la interdicción civil. En tales circunstancias, los sujetos que tienen la facultad de celebrar actos jurídicos son sus representantes, quienes también tienen la posibilidad de confirmar dichos actos, en caso hayan sido celebrados por los incapaces. Para Barandiarán (1999, p. 301) la anulación resulta a causa de la falta de deber de no abusar de la debilidad mental del otro sujeto.

Considerando tales circunstancias, es oportuno señalar que el convenio de integración puede estar suscrito por algún sujeto que se encuentre en condición de incapaz relativo. En ese sentido, antes de que su contenido se integre al título valor incompleto, será necesario que se subsane tal observación, ya que, caso contrario, como acto jurídico dentro de la relación causal, carecería de validez. Sin embargo,

debemos evocar que una vez que el título valor incompleto tenga los elementos esenciales descritos en la Ley de Títulos Valores, podrá ser ejecutado por el legítimo tenedor para exigir el cumplimiento de las obligaciones cartulares.

2. Anulabilidad por erro, dolo, violencia o intimidación

Conforme lo describimos cuando desarrollamos la parte concerniente a los vicios de la voluntad, la normativa civil ha regulado que la sanción impuesta sea la de anulabilidad, y no la de nulidad. Sin embargo, algunos autores como Taboada (1988, p. 71), señalan que, al existir discrepancia entre la voluntad declarada y la voluntad interior, la sanción correcta debe ser la nulidad absoluta del acto jurídico.

3. Simulación relativa

Sobre el tema, referimos que existen simulaciones absolutas y simulaciones relativas. Las primeras son sancionadas con la nulidad absoluta. No obstante, en el tema de las simulaciones relativas, Barandiarán (1999, p. 302) describe tres supuestos: i) se simula un acto tras el que existe otro que es real (acto disimulado), ii) el acto disimulado se celebra para perjudicar a un tercero, y iii) el acto disimulado no tiene un fin ilícito ni perjudica a un tercero. En todos los supuestos el acto simulado es nulo; sin embargo, en el primer supuesto, el acto disimulado será nulo si la finalidad es ilícita; en el segundo supuesto, el acto disimulado será anulable puesto que no se incurre en alguna causal de nulidad; y, en el tercer supuesto, el acto es plenamente válido. Por tanto, de lo descrito se infiere que la naturaleza del acto disimulado será relevante para verificar si se sanciona con nulidad absoluta o anulabilidad.

Las características de la nulidad relativa se encuentran reguladas en el artículo 222° del Código Civil y son las siguientes:

- La nulidad relativa o anulabilidad no obra ab initio (desde el inicio). El acto anulable produce efectos jurídicos, mientras no se haya declarado la nulo a través de una sentencia. Sin embargo, una vez declarado nulo, los efectos de la nulidad se retrotraen hasta la celebración del acto jurídico.
- Debe ser solicitada por las personas interesadas en que se anule el acto jurídico. La anulación del acto jurídico, únicamente puede ser solicitado por los sujetos que intervienen en el mismo. No es válido que se declare de oficio.
- El acto jurídico anulable puede ser confirmado.

Es preciso señalar que la nulidad de un acto jurídico puede ser total o parcial, dependiendo de su contenido, conforme se regula en el artículo 224° del Código Civil. Así como también el mismo cuerpo de leyes señala que no debe existir confusión entre el acto jurídico y el documento; mientras que el documento puede no revestir una determinada formalidad para su configuración, el acto jurídico no se ve afectado por tal circunstancia (Barandiarán, 1999, p. 311).

Autonomía de la voluntad

Definición

Etimológicamente, el término autonomía, proviene de los vocablos griegos “autos” que significa “por uno mismo”, y “nómos” que significa “ley”. En esa línea de ideas, Lalaguna, (1972, p. 883) define a la voluntad como el “poder de dictarse uno a sí mismo su propia ley”.

En consonancia a lo antes descrito, De la Puente (2003, p. 197) define a la autonomía de la voluntad como el poder de las personas para autorregular sus intereses y crear sus propias relaciones jurídicas. A su vez, Arias-Schreiber (2000, p. 26) señala que es un principio del derecho contractual que faculta a las personas para crear una situación jurídica que debe ser respetada por el derecho positivo. Y, Kant (1998, pág. 88) la describe como una ley para la propia constitución de la voluntad.

En este punto, merece precisar que doctrinariamente la expresión “autonomía de la voluntad” ha sido refutada por otra denominada “autonomía privada”. El debate sobre el término correcto dentro del ámbito jurídico no será detallado en la presente investigación. Sin embargo creímos conveniente mencionarlo, ya que es parte de sus antecedentes.

Marco histórico de la autonomía de la voluntad

La autonomía de la voluntad tuvo su mayor apogeo con la puesta en vigencia del Código Civil de Francia en 1804, en la cual tenía como límite a la ley y el principio “pacta sunt servanda” regulado en el artículo 1134° de la norma antes señalada. Es decir, según lo antes descrito, ni la propia voluntad podía modificar lo ya pactado. Ahora bien, en lo que respecta a su fundamento, la doctrina civilista señala que la autonomía de la voluntad puede ser explicada desde dos teorías, las cuales se describen a continuación:

Teoría Individualista

Esta teoría señala que debe respetarse el contrato creado por las partes de manera libre y consentida. Es decir, los hombres pueden tener autonomía para regular sus propios intereses y, conforme la definición antes descrita y expuesta por Arias-Schreiber (2000), la norma positivizada debe limitarse en las relaciones jurídicas creadas por la voluntad humana. El mismo autor señala que esta teoría se basa en los siguientes principios: libre albedrío de los sujetos, la libertad de contratar y la fuerza vinculatoria del contrato Arias-Schreiber (2000, p. 27).

Teoría Normativista

Esta teoría sostiene que la voluntad de las partes para autorregular sus conductas proviene del ordenamiento jurídico (De la Puente, 2003, p. 197). Es decir, en contrario sensu a lo descrito por la teoría individualista, es la norma positivizada la que autoriza a las personas para vincularse a través de relaciones jurídicas que decidan iniciar. Díez-Picazo (1999, p. 295) señala que, dejar que los sujetos tengan la facultad de reglamentar sus intereses económicos es una solución justa y conveniente adoptada por el legislador, porque otorga una sensación de inclusión de las decisiones de los sujetos al ordenamiento jurídico estatal.

Libertad de contratar

Es la posibilidad que tienen los sujetos de decidir sobre su patrimonio y en contenido de sus acuerdos. El derecho de estos sujetos de decidir sobre cuándo, dónde y con quién se van a celebrar los contratos, porque así lo desean (Arias-Schreiber, 2000, p. 27). En suma, son las razones que orientan el contrato.

Los principios derivados de esta libertad, son los siguientes:

- Principio de consensualidad, el cual se encuentra presente al momento de la celebración del contrato, donde se evidencia la negociación, y finaliza con el consentimiento, que va a otorgar eficacia a los acuerdos adoptados.
- Principio de supletoriedad de las normas, mediante el cual se dispone la aplicación del ordenamiento jurídico positivizado sólo cuando las partes no hayan considerado una determinada conducta con relevancia jurídica (Gallo, 2006, p. 9).

- Principio de obligatoriedad de los contratos, el cual, como hemos señalado precedentemente, constituye una de las bases de la teoría de los contratos, ya que, parte de una situación en la que los sujetos regulan los efectos de los contratos y, son ellos, quienes van a tener que respetarlos, en virtud a lo regulado por el artículo 1361° del Código Civil.
- Principio de buena fe contractual, lo cual significa la buena voluntad, el respeto y la honestidad de los contratantes para crear relaciones jurídicas contractuales. Dicho principio se encuentra regulado en el artículo 1362° del Código Civil.

Libertad contractual

Se encuentra regulada por el Es la posibilidad de los sujetos para determinar los alcances del contrato: su contenido. Es por ello que De la Puente (2003, p. 200) la define como la “libertad de configuración interna”. No obstante, debemos dejar en claro que los acuerdos deben estar enmarcados dentro de los límites de la la autonomía de la voluntad.

Como función económica, fomenta en las personas la iniciativa de mercado a través de las leyes que gobiernan la oferta y la demanda, permitiendo el traslado de bienes y la prestación de servicios entre distintos sujetos, entendiendo que este traslado incorpora los derechos y obligaciones pactadas.

Como función social, permite que los sujetos que intervienen en los contratos se beneficien de manera general, según sus propios intereses. Los contratos en los cuales se plasman los derechos y obligaciones deben ser entendidos como instrumentos que coadyuvan al bienestar social y evitan las arbitrariedades.

Limites de la libertad contractual

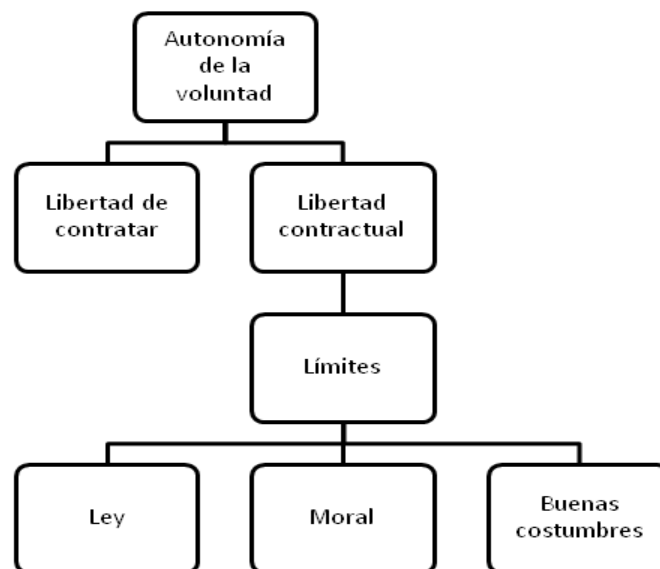
Conforme lo describe Leyva (2010, p. 288), los límites no están referidos a la autonomía de la voluntad, sino a la libertad contractual. En esa línea de ideas, se pueden identificar a los siguientes límites: la ley, la moral y las buenas costumbres. No obstante, como hemos referido en el marco histórico, la propia voluntad también puede ser considerada como un límite, ya que, no va a poder modificar lo ya pactado.

La ley es la fuente que expresa de manera más idónea los límites de la libertad contractual; pero no es la más importante (Lalaguna, 1993). En virtud de ello, el artículo 1354° del

Código Civil prescribe que el contenido de los contratos no pueden ser contrarios a las normas de carácter imperativo. Asimismo, el literal a) del artículo 24 de la Constitución Política del Perú regula literalmente que “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Es decir, la actuación de los sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas necesariamente tienen que estar acorde con el ordenamiento jurídico para que tengan efectos válidos y eficaces.

Por lo que se refiere a la moral y las buenas costumbres, cuando estas se ven vulneradas por los acuerdos de los sujetos, el artículo V del Título Preliminar del Código Civil establece su nulidad.

Figura 6. Autonomía de la voluntad.



Fuente: Elaboración propia.

Prescripción extintiva de pagarés incompletos

Prescripción extintiva

Definición

En el primer considerando de la Casación N° 4424-2007, se define a la prescripción extintiva como una institución jurídica mediante la cual, por el decurso del tiempo, se extingue la acción para que el sujeto pueda exigir el cumplimiento de la obligación. Para Vidal (2009, p. 230) el decurso del tiempo es la principal característica para que la prescripción produzca

efectos jurídicos, y su definición detalla que la prescripción reconoce la posibilidad para el sujeto pasivo pueda oponerse a la acción que pretenda el sujeto activo de la obligación.

La prescripción extintiva puede ser considerada como un mecanismo de seguridad jurídica para el deudor y para los terceros, y como una sanción al acreedor por haber permitido que el tiempo transcurra y no haber solicitado el cumplimiento de la obligación (mecanismos de cobro). Sin embargo, conforme lo regula el artículo 1989° del Código Civil “la prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo”; es decir, la obligación subsiste, aunque no pueda exigirse su cumplimiento. La razón de ser de mantener subsistente la obligación se encuentra en el posible cumplimiento voluntario de la obligación que pueda efectuar el deudor, lo cual no constituiría como un pago indebido (Northcote, 2011, p. 3).

En lo que respecta a sus diferencias con la caducidad, Montoya (2005, p. 17) señala que la caducidad no admite causales de interrupción ni de suspensión como en la prescripción. Además, la caducidad extingue la acción y el derecho, mientras que la prescripción, como se ha señalado precedentemente, únicamente extingue la acción. Asimismo, la caducidad puede ser declarada de oficio por el Juez, mientras que la prescripción necesariamente tiene que ser invocada por la parte interesada.

Irrenunciabilidad de la prescripción

El Código Civil en su artículo 1991° señala que no se puede renunciar al derecho de prescribir, y que todo pacto, entiéndase acto jurídico, que impida los efectos de la prescripción deben ser considerados nulos. No obstante, el artículo 1992° de la norma antes descrita hace referencia a la renuncia de la prescripción ya ganada. Es decir, mientras que, por una parte, queda prohibido pactar en la celebración del acto o en fecha posterior, el impedimento de los efectos de la prescripción; por otra parte, la norma autoriza a que el sujeto pasivo de la obligación pueda renunciar a la prescripción ganada, ya sea de manera expresa o de manera tácita (Northcote, 2011, p. 3).

Invocación de la prescripción extintiva

Como se ha expresado anteriormente al describir las diferencias entre prescripción extintiva y caducidad; una de ellas atendía a los sujetos facultados para invocar dicho derecho. El artículo 1992° del Código Civil prohíbe al Juez declarar de oficio la prescripción; en ese

sentido, las únicas personas que se encuentran facultadas para invocar la prescripción son aquellas que se encuentran como parte pasiva de la obligación, y tiene que hacerlo mediante la excepción de prescripción extintiva a efectos de oponerse a la acción ejercida por el sujeto activo para la satisfacción de la obligación.

Cómputo, suspensión e interrupción del plazo de prescripción

El artículo 1993° del Código Civil señala que el plazo de prescripción se computa desde que puede ejercitarse la acción. Al respecto, (Northcote, 2011) señala que dicho cómputo se efectúa en días calendarios y se culmina el último día del plazo establecido, conforme a lo regulado por artículo 2002° del mismo cuerpo de leyes.

La suspensión del cómputo del plazo de prescripción implica su paralización desde que se incurre en alguna de las causales descritas en el artículo 1994° del Código Civil; una vez desaparecida dicha causal, el cómputo se reanuda considerando el plazo ya transcurrido, conforme lo estipula el artículo 1995° de la norma antes descrita. Por otra parte, la interrupción implica dejar de computar el plazo de prescripción cuando se incurre en alguna de las causales reguladas en el artículo 1996° del Código antes citado, y cuando haya desaparecido dicha causal, se tendrá que iniciar un nuevo cómputo (Northcote, 2011). No obstante, a lo descrito sobre la interrupción, su eficacia queda supeditada a no cumplir alguna de las condiciones expresadas en el artículo 1997° de la normativa civil.

Prescripción de las acciones cambiarias

En la Sección Octava de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores, se regula lo concerniente a la prescripción de las acciones cambiarias, para cuyo efecto se deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 91° de dicha norma, así como también ser exigidos dentro del plazo establecido en el artículo 96°, atendiendo al tipo de acción cambiaria a ejercitar. Al respecto, el artículo 95.2 de la Ley antes descrita especifica que el cumplimiento del plazo de prescripción durante el trámite del proceso judicial o arbitral, no afectará al ejercicio de la acción cambiaria, a menos que el proceso haya sido declarado en abandono.

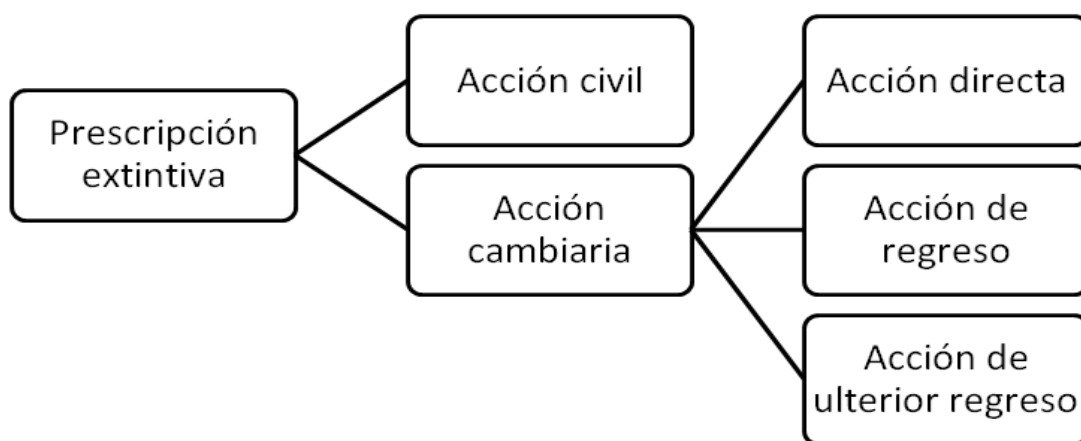
Los plazos de prescripción de las acciones cambiarias son los siguientes:

- 1. Acción directa:** El ejercicio de esta acción prescribe a los tres años, computado desde la fecha de vencimiento de la obligación contenida en el título valor.

2. **Acción de regreso:** El ejercicio de esta acción prescribe al año, computado desde la fecha de vencimiento de la obligación contenida en el título valor.
3. **Acción de ulterior regreso:** El ejercicio de esta acción prescribe a los seis meses, computados desde la fecha de pago de la obligación contenida en el título valor. Plazo en el que también deberá ejercitarse la acción de repetición del pago, en caso el cumplimiento haya sido efectuado por el garante del obligado principal.

Cabe señalar que, tanto para la acción directa, como para la acción de regreso, el cómputo del plazo de prescripción se inicia cuando haya llegado la fecha de vencimiento y no haya sido cumplida la obligación contenida en el título valor.

Figura 7. Prescripción extintiva.



Fuente: Elaboración propia.

El pagaré

Es un título valor que incorpora una promesa de pago por parte del girado (firmante y/o suscriptor) a favor de otra parte denominada beneficiaria (tenedor). Además, en dicho título de crédito es perfectamente válido colocar las tasas de interés compensatorio y moratorio, conforme al artículo 51° de la Ley de Títulos Valores, o en su defecto, se aplicará la tasa de interés legal (Socola, 2010).

Es un título valor formal, toda vez que para sus efectos sean válidos jurídicamente, necesita contener los requisitos establecidos en el artículo 158° de la Ley de Títulos Valores, que son:

- a) La denominación de Pagaré: Este requisito es esencial y tiene como finalidad diferenciarlo de otros títulos valores. La falta de dicho requisito, puede dar lugar al girado para oponerse alegando la omisión de un requisito señalado por la ley, conforme al literal f) del artículo 19° de la norma antes descrita.
- b) Lugar y fecha de emisión: Mediante el cual se pretende verificar si al momento de suscripción del Pagaré, el girador era capaz de asumir las obligaciones contenidas. Asimismo, según la fecha de vencimiento que se exprese, determina el tiempo en el que se vuelven exigibles dichas obligaciones. El obligado puede oponerse alegando el literal c) del artículo 19° de la norma antes descrita.
- c) Promesa incondicional de pago de una cantidad determinada o determinable: El pago puede efectuarse en un único momento o en armadas. Cuando se pacte el pago en armadas el tenedor puede elegir si da por vencidos todos los plazos y exige el cumplimiento total de la obligación, o exige únicamente las prestaciones pendientes hasta la fecha de vencimiento. En contraste con la realidad, la cantidad suele expresarse en números y letras (unidad y signo monetario). Asimismo, conforme a lo regulado en el artículo 5° de la Ley de Títulos Valores, en caso de divergencia entre el importe de números y letras, prevalecerá la suma menor (presunción iuris tantum), y en caso de divergencia entre la unidad monetaria, prevalecerá la moneda nacional, en caso se haya expresado; o, no surtirá efectos cambiarios, en caso no se haya expresado; dejando a salvo la exigibilidad a través de la vía de acción (causal).
- d) Nombre de la persona a quien se realizará el pago: A través de este requisito se infiere que el Pagaré no puede ser considerado como un título valor al portador y que su transmisión está supeditada al endoso. En ese sentido, se debe tener presente lo regulado por el artículo 23° de la Ley de Títulos Valores, concerniente al título valor al portador de pago dinerario y la respectiva multa en caso de su contravención.
- e) Fecha de vencimiento: Conforme al artículo 160° de la Ley de Títulos Valores, las formas de vencimiento del Pagaré son: a la fecha o fecha fija de vencimiento (pago único o en armadas), a la vista (el día de presentación para su pago), o a cierto plazo desde su emisión (pago único o en armadas). En caso no se haya consignado la fecha de vencimiento, se considera que la obligación es pagadera a la vista, conforme a lo

regulado por el artículo 121°, concordante con el artículo 162° de la norma descrita precedentemente.

- f) Lugar y/o forma de pago: El lugar de pago será relevante para identificar la competencia territorial para efectos de exigir el cumplimiento de la obligación cambiaria. A nivel procesal dicha competencia puede ser prorrogada expresamente por las partes, en atención a lo prescrito por el artículo 55° de la Ley de Títulos Valores, concordante con el artículo 25° del Código Procesal Civil. Por otra parte, en lo que respecta a la forma de pago, las partes pueden acordar que se efectúe mediante cargo en cuenta mantenida en una entidad del Sistema Financiero, conforme lo regula el artículo 53° de la Ley de Títulos Valores.
- g) Datos del obligado principal: La firma, el nombre y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del obligado es indispensable en el Pagaré. La firma tiene vital importancia sobre todo en aquellos Pagarés emitidos de manera incompleta. La falta de la firma evita que el pagaré nazca, por tanto, no existe obligación cambiaria que pueda exigirse. La Ley de Títulos Valores en su artículo 6° deja abierta la posibilidad de suplir la firma autógrafa por firmas impresas, digitalizadas u otros mecanismos de seguridad gráficos y electrónicos, según el acuerdo de las partes. Además, señala que el error en el número del DNI no afecta la validez del título valor.

A su vez, es considerado como un título valor causal, puesto que, de conformidad con el artículo 159° de la Ley de Títulos Valores, en el pagaré es válido dejar constancia de la causa que generó su emisión. Sin embargo, es menester precisar que por el principio de autonomía que lo gobierna, no necesita realizarse un mayor análisis sobre dicha causa, y el tenedor puede exigir el cumplimiento de la obligación, siempre que cumpla con los requisitos formales.

Títulos valores incompletos

Los motivos para la emisión de los títulos valores incompletos pueden ser de diversa índole, pero están vinculados con la falta de determinación de alguno de los elementos esenciales (monto, fecha de vencimiento, etc.) (Northcote, 2009).

Desemo, citado por Ramos (2008, p. 30) señala que los títulos valores incompletos son aquellos en los que no concurren algunos requisitos esenciales señalados en la Ley de Títulos Valores; sin embargo, lleva la firma del obligado u obligados y que para el ejercicio de

cualquier derecho debe ser completada por el tomador. A su vez, Beaumont (1973, p. 100) lo define como aquel título en el que el suscriptor únicamente ha plasmado su firma, dejando espacios en forma deliberada para ser llenados por el legítimo tenedor, de acuerdo a las instrucciones dadas. Por su parte, Saavedra (2018) manifiesta que son aquellos títulos empezados que se caracterizan porque el único requisito que no debe omitirse es la firma, asimismo, en concordancia con la práctica judicial es conveniente la inclusión de la huella digital, y llenar los espacios en blanco conforme a los acuerdos pactados antes de solicitar el cumplimiento de la obligación en sede judicial.

Es preciso indicar que la Ley de Títulos Valores no establece alguna limitación en cuanto a la aplicación de los títulos valores incompletos; sin embargo, cabe señalar que en el fondo es válida para la letra de cambio, el cheque y el pagaré, que son títulos de valores que dan origen a una prestación pecuniaria y susceptibles de aceptación (Ramos, 2008, p. 30).

El artículo 10° de la Ley de Títulos Valores establece que para el ejercicio de los derechos contenidos en aquellos títulos valores incompletos, deberá respetarse los acuerdos adoptados, caso contrario, se podrá contradecir en atención a la regulación del artículo 19° inciso e) del mismo cuerpo de leyes, excepto si se trata de terceros de buena fe que no hayan tenido conocimiento de dichos acuerdos. Además, antes de su presentación para el pago o cumplimiento de las obligaciones deberán completarse con los requisitos esenciales establecidos en la ley, dependiendo del título valor al que se haga referencia. Por otra parte, también señala que el emitente o aceptante del título valor incompleto tiene el derecho de solicitar una copia del mismo y no está impedido para limitar su transferencia mediante una cláusula.

No hay una denominación exacta sobre el acuerdo en el cual se establezcan las condiciones según las cuales se llenarán los títulos valores incompletos, algunos, como Asquini lo denominan “la convención de llenado” (Ramos, 2008, p. 31), otros como María Elisa Benglian lo denominan “pacto de completamiento”; sin embargo, la Ley de Títulos Valores únicamente hace referencia a “acuerdos adoptados”. En ese sentido, entendemos que dichos acuerdos hacen referencia a los actos jurídicos, puesto que son celebrados entre los sujetos que intervienen en la relación causal. Al respecto, nos explayaremos más adelante.

Marco histórico de los títulos valores

Habiendo descrito que el pagaré es un título valor, cabe señalar que, la teoría de los títulos valores se construye a partir de la incorporación del derecho al título (conocimiento aportado por *Savigny*), agregando lo concerniente a la literalidad (conocimiento aportado por *Brünner*) y finalmente con la legitimidad (conocimiento aportado por *Jacobi*). (Montoya, 1982, p. 16).

La doctrina alemana de Einert, citada por Ramos (2008, p. 2), señala que las obligaciones contenidas en el título describen una promesa de cumplir determinada obligación pecuniaria respetando las cláusulas contenidas en dicho documento; diferenciándolo de los contratos en el sentido que el título valor asegura al poseedor un derecho autónomo (promesa unilateral) que puede ser transmitido a otros sujetos. Posteriormente, Ramos (2008, p. 3), describiendo la doctrina italiana formulada por Vivante y expresada en la definición de título valor, señala que el derecho contenido en el título es literal, autónomo y necesario para ejercitar el derecho; generando una teoría que fija lo concerniente a los títulos al portador, a la orden y nominativos.

No existe uniformidad en cuanto a la terminología moderna del derecho cambiario; sin embargo, es pertinente considerar como género a los “valores negociables”, dentro de la cual se encuentra el título valor como especie; ello a efectos de identificar aquellos títulos desmaterializados (Ramos, 2008, p. 8). No obstante, no se hará mayor análisis del caso, toda vez que la presente investigación abordará únicamente a los títulos valores contenidos en soporte físico (papel).

Naturaleza jurídica de los títulos valores

Existe una doble relación jurídica entre los sujetos de derecho que intervienen en los títulos valores: una relación causal o fundamental, es decir, un acto jurídico mediante el cual se origina la relación entre los sujetos; y una relación cartular, es decir, una declaración autónoma e independiente de la relación fundamental en cuanto a la exigibilidad o transmisión de los derechos y obligaciones. En esa línea de ideas, conforme a lo descrito en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 272827 y de acuerdo a lo expresado por Montoya (1982, p. 18), la falta de un requisito formal esencial impedirá que el documento tenga el

carácter de título valor, pero no invalida los actos jurídicos originados por su emisión o transferencia.

Teoría contractualista: En un primer momento se consideró que el título valor se originaba por el acto jurídico celebrado entre el emitente y el tomador; sin embargo, teniendo en cuenta el principio circulatorio, se precisó que dicho acto jurídico era celebrado entre el emitente y un sujeto indeterminado. Posteriormente, esta teoría fue cuestionada porque no explica que el acreedor de la obligación contenida en el título valor puede ser un tercer poseedor con derecho a exigir el cumplimiento de la prestación cartular sin existir relación contractual con el emisor del título; además porque la teoría da lugar a que los vicios de la relación causal puedan ser cuestionadas en la relación cartular (Ramos, 2008, p. 17).

Teoría del acto jurídico unilateral: Considera que la obligación cartular se origina como una promesa unilateral, que, para algunos se perfecciona al momento de emitir el título valor, y para otros, al momento de la declaración no recepticia. La característica que destaca en esta teoría es la garantía que se otorga al acreedor a través de una posición autónoma respecto a las relaciones precedentes, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por la ley (Ramos, 2008, p. 18).

Teoría mixta: Montoya (1982, p. 30) considera que el acto de emisión constituye un acto jurídico de promesa unilateral que produce efectos jurídicos en relación al tercero poseedor de buena fe; independientemente de las relaciones jurídicas existentes entre el emitente y tomador del título valor, las cuales se rigen por el acto jurídico que genera dicho título.

Principios de los títulos valores

La incorporación: El primer párrafo del artículo 1º de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores regula lo siguiente: “Los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad y los efectos de título valor, cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales que, por imperio de la ley, les corresponda según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado no afectan su calidad de título valor”; en ese contexto, Ramos (2008, p. 19) explica que existe una cosa corporal que es el título (soporte

físico), y una cosa incorporal que es el derecho patrimonial. La unión de ambos genera el “título valor”; es decir, un documento que tiene la facultad de ser transferido entre varios sujetos de derecho. La consecuencia directa del principio de incorporación es que el tenedor del documento podrá exigir y transmitir el derecho contenido.

La literalidad: El artículo 4° de la Ley 27287, Ley de Títulos Valores señala que los derechos y las obligaciones a cargo de los intervinientes en la relación cambiaria deben encontrarse plasmadas expresamente en el documento y/u hoja adherida a él con la finalidad de determinar el alcance de los efectos jurídicos. Al respecto, Ramos (2008, p. 21) refiere que la materialización de dicho principio se ve reflejada cuando el tenedor pretende ejercitar el derecho patrimonial contenido en el título. El aspecto escritural es relevante y es necesario entender que la literalidad tiene mayor relevancia en aquellos títulos completos o perfectos, a diferencia de los títulos valores incompletos, puesto que en estos últimos su contenido se sustenta en los acuerdos (actos jurídicos) celebrados entre las partes que intervienen en la relación causal (derechos preexistentes). En ese sentido, citando a Montoya (1982, p. 21), debemos considerar que el principio de literalidad se encuentra debilitada en los títulos valores incompletos, pero no se encuentra ausente.

La autonomía: A través de este principio el tenedor de buena fe puede ejercitar un derecho propio que no se encuentra supeditado a relaciones existentes con anterioridad (Vivante, 1936, p. 137). Es decir, cada sujeto de derecho acreedor que interviene en la relación cambiaria es único y originario respecto del sujeto de derecho deudor. En ese sentido, cuando el título valor circula, la situación de acreedor renace de nuevo en cada adquirente, por tanto, el último tenedor y/o beneficiario tiene la facultad de exigir el cumplimiento del derecho patrimonial en él contenido (Gonzales, 1992, p. 837). En suma, las relaciones cartulares generadas durante la circulación del título valor son independientes entre sí respecto de la situación jurídica de las partes intervinientes.

Legitimación activa: Este principio supone que el titular del derecho contenido en el título valor tiene la facultad de exigir su cumplimiento al obligado, o la facultad de transferirlo a otro sujeto, haciendo efectiva la circulación. En el primer caso, será necesaria la concurrencia de los requisitos señalados en la Ley de Títulos Valores para poder solicitar el cumplimiento de la obligación (Saavedra, 2018) y en el segundo caso, la verificación de los requisitos para su transferencia, según se refieran a títulos valores a la orden, al portador o nominativos. La

característica principal de este principio es la posesión, tanto del título como del derecho, puesto que su verificación será relevante para los efectos jurídicos contra el deudor, tal como se regula en el artículo 16° de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores que expresa: “El título valor debe ser presentado para exigir las prestaciones que en él se expresan, por quien según las reglas de su circulación resulte ser su tenedor legítimo, que además tiene la obligación de identificarse (...)”, concordante con el artículo 12° del mismo cuerpo de leyes que regula: “Los títulos valores confieren a su legítimo tenedor el derecho exclusivo a disponer o, de ser el caso, gravar o afectar los bienes que en ellos se mencionan; sin perjuicio de las excepciones que señale la ley.”

Legitimación pasiva: Consiste en la liberación del deudor respecto a la obligación contenida en el título valor, al cumplir de buena fe con la prestación contenida en él (Ramos, 2008, p. 26). Al igual que en la legitimación activa, la posesión del título valor es la característica principal de este principio, en la medida que el deudor queda liberado de la obligación en caso de cumplir la prestación, aunque se haya efectuado a favor del titular aparente (quien posee el título valor), siempre que no medie dolo o negligencia en el referido cumplimiento, conforme a lo regulado en el artículo 16° de la Ley de Títulos Valores: “(...) El deudor de buena fe que cumpla con la prestación queda liberado, aunque dicho tenedor no resultase el titular del derecho”. En esa línea de ideas, para que no se configure una doble exigibilidad en cuanto al cumplimiento de la prestación por parte del deudor, el tenedor del título valor tiene la obligación de devolverlo, conforme a lo regulado en el artículo 17° de la norma antes descrita.

Buena fe: La buena fe debe primar en todas las relaciones jurídicas y significa que el sujeto que pretenda ejercitar las acciones correspondientes para satisfacer la obligación, no haya actuado con culpa al momento de adquirir el título. La posesión material del título no traslada la propiedad del mismo, ni la titularidad del derecho contenido; sin embargo, posibilita para que dicho título pueda ponerse en circulación y llegar a un tercero de buena fe (Ramos, 2008, p. 27). La regulación de este principio se encuentra en el artículo 15° de la Ley de Títulos Valores.

Circulación: Los títulos valores han sido creados para circular o transmitirse entre distintos sujetos mediante la entrega cuando nos referimos a títulos valores al portador, mediante el endoso cuando nos referimos a títulos valores a la orden o mediante cesión de derechos

cuando nos referimos a títulos valores nominativos (Calderón, 2016). A su vez, Pino Carpio, citado por Montoya (1982, p. 17) considera que el hecho de que el título no circule y se quede en posesión del girador primigenio no atenta contra su destino; “pues la esencia del título valor es que pueda circular; más no que en realidad circule”.

Clasificación de los títulos valores según su circulación

La sección segunda de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores hace referencia a los títulos valores al portador (Título Primero), títulos valores a la orden (Título Segundo) y a los títulos valores nominativos (Título Tercero). Por tal motivo, se hará referencia a ellos en los siguientes párrafos.

Títulos valores al portador: Son aquellos en los cuales no se hace referencia a una persona determinada como titular de los derechos contenidos en el título. La designación se hace a través de una cláusula “al portador” y para su transmisión solo es necesaria la entrega o tradición del título (físico), es decir, basta la posesión para adquirir el derecho y su exhibición al deudor para su exigibilidad. “La legitimación viene conferida por el hecho de la posesión” (Moreno, 2015, p. 97). Estos títulos valores facilitan la negociación de derechos y obligaciones patrimoniales, ya que aplican íntegramente el principio de circulación y la noción de incorporación del derecho al título (Garrigues, 1981, p. 719). El artículo 23° de la Ley de Títulos Valores limita esta clase de títulos valores cuando se refieren a obligaciones de dar una determinada suma de dinero.

Títulos valores a la orden: A diferencia de los títulos valores al portador, son aquellos en los cuales se hace referencia a una persona determinada como titular de los derechos contenidos en el título. Tiene inserta la cláusula “a la orden” y para su transmisión es necesario que sea endosado y luego entregado físicamente, salvo pacto de truncamiento (forma sustitutoria de entrega del título endosado que es efectuado por los bancos). La legitimación en esta clase de títulos opera con la relación entre el portador del título (endosatario) y la persona designada como titular de la cláusula a la orden (endosante) en la entrega del título. (Moreno, 2015, p. 99).

Títulos valores nominativos: Son aquellos títulos en los cuales se hace referencia a una persona determinada y su transmisión, a diferencia de los títulos a la orden, se realiza mediante cesión de derechos, conforme se establece en el artículo 29° de la Ley de Títulos Valores, cuyos efectos van a oponerse frente a terceros (cesionario) y frente al emisor (cedido), cuando sea comunicado a este último. La legitimación en esta clase de títulos opera con la constancia de transmisión o registro de la transferencia en la Institución de Compensación y Liquidación de Valores y la posterior entrega del título (Moreno, 2015, p. 101).

Títulos valores no sujetos a protesto

El artículo 48° de la Ley de Títulos Valores señala que en los títulos valores pueden incluirse determinadas cláusulas especiales, las cuales deberán expresarse en cualquier lugar del documento o en hoja adherida al mismo para que produzcan efectos respecto a los obligados.

Una de estas cláusulas especiales es la liberación del protesto, la cual se encuentra regulada en el artículo 52° de la norma descrita anteriormente. Esta cláusula deberá estar impresa en el documento para su validez y tiene como finalidad liberar al tenedor de la formalidad del protesto; es decir, el tenedor ya no estará obligado a recurrir a un fedatario público (notario) para que deje constancia que el título no ha sido aceptado o pagado. En ese sentido, basta que se cumpla el vencimiento del plazo para que el tenedor pueda ejercitar las acciones cambiarias derivadas del título valor. Es preciso señalar que esta liberación no es óbice para que el tenedor pueda solicitar el protesto, en caso desee efectuarlo.

En esa línea de ideas, es pertinente remitirnos al artículo 87° de la Ley de Títulos Valores, en lo concerniente a la publicidad del incumplimiento de las obligaciones de títulos valores no sujetos a protesto. Al respecto, es preciso señalar que dichos títulos valores –no sujetos a protesto, ni formalidad sustitutoria– deberán ser comunicados a la Cámara de Comercio Provincial a efectos de que procedan a remitirlos a la Cámara de Comercio de Lima, la cual procederá con la anotación en el Registro Nacional de Protestos y Moras, cuya vigencia será de cinco (5) años, computados desde el 1 de enero del año siguiente a su anotación; salvo que la obligación haya sido satisfecha en su totalidad, cuyo plazo será de tres (3) años. Dicha comunicación puede ser efectuada por la persona que ejercite las acciones cambiarias derivadas del título valor, por el Juez o Tribunal Arbitral al que se recurra.

Las acciones cambiarias

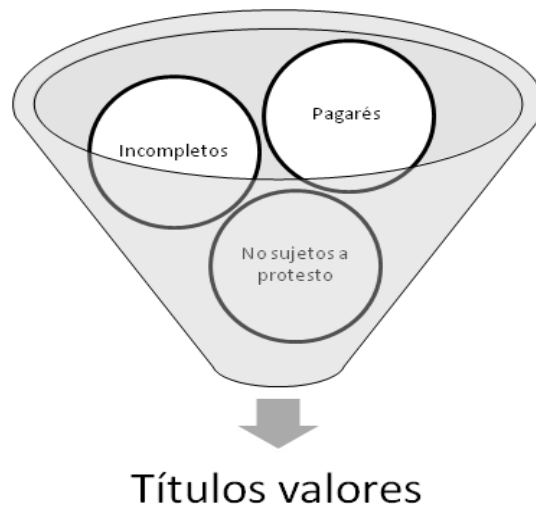
En las relaciones cartulares pueden intervenir distintos sujetos obligados a cumplir las prestaciones contenidas en los títulos valores, los cuales aparecen ante la existencia de diversas formas de transferencia (tradición, endoso o cesión de derechos). En esa relación de ideas, la sección sétima de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores regula lo concerniente a las acciones cambiarias o acciones de cobro derivadas de los títulos valores, dependiendo del sujeto a quien se pretende exigir el cumplimiento de dichas obligaciones (Northcote, 2015). Tal es así que el artículo 90° describe las siguientes:

1. **Acción directa:** Mediante la cual, el acreedor (tenedor del título valor) puede exigir el cumplimiento de la obligación al obligado principal y/o sus garantes
2. **Acción de regreso:** Mediante la cual, el acreedor (tenedor del título valor) puede exigir el cumplimiento de la obligación a los endosantes, sus garantes y demás obligados que no sean semejantes al obligado principal y/o sus garantes.
3. **Acción de ulterior regreso:** Mediante la cual, el sujeto que cumple con la obligación puede “repetir el pago” contra los obligados que hayan intervenido en el título valor precedente a aquel.

En todos los casos descritos anteriormente, el sujeto que exige el cumplimiento de la obligación, además, puede solicitar el pago de los intereses moratorios, compensatorios y/o legales, computados desde el vencimiento para dicho cumplimiento; los gastos del protesto o formalidad sustitutoria, dependiendo del caso, y los gastos judiciales y/o arbitrales.

Asimismo, el artículo 91° de la Ley de Títulos Valores señala que, para el ejercicio de las acciones cambiarias o acciones de cobro, el sujeto tendrá que cumplir con determinados requisitos ligados al protesto o la formalidad sustitutoria del mismo –cuando se trate de títulos valores sujetos a dicha formalidad–, y a la tenencia del título valor o la constancia en caso de títulos valores desmaterializados –cuando se trate de títulos valores no sujetos a protesto–. Señalando también, que cuando se trate de títulos sujetos a formalidad, los defectos pueden ser subsanados si se obtiene reconocimiento judicial respecto al contenido y firma de los obligados dentro del plazo de prescripción.

Figura 8. Pagaré como título valor.



Fuente: Elaboración propia.

1.3.- Formulación Del Problema

Para el planteamiento del problema se debe tener en cuenta un eje sincrónico, es decir contemplar que se están realizando investigaciones similares, y un eje diacrónico, es decir contemplar que hay investigaciones precedentes que debe conocerse (Silvina, 2011, p.2). En tal sentido, respecto al convenio de integración de integración y prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima, se plantea la siguiente problemática:

Problema general

¿Cuáles son las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

Problema específico 1

¿De qué manera se regula el convenio de integración respecto a las implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en nuestro ordenamiento jurídico?

Problema específico 2

¿Cuáles son los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

1.4.- Justificación Del Estudio

La justificación es la parte de la investigación en la cual se deben señalar las razones o motivos por las cuales se realiza, y los posibles aportes teóricos o prácticos (Arias, 1999, p.13).

Teórico

La presente investigación se justifica de manera teórica, puesto que, ha desarrollado la definición del convenio de integración, entendido desde la perspectiva de los actos jurídicos, así como también la definición de la prescripción extintiva y de los pagarés incompletos. Además, se ha desarrollado lo concerniente a la regulación de dichas instituciones jurídicas en nuestro sistema jurídico y la vinculación de las mismas, cuando se pretenden ejercitar las acciones cambiarias para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores, a través de los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

Práctico

La presente investigación, en un sentido pragmático, pondrá en evidencia que las implicancias de los convenios de integración tienden a entrapar los efectos de la prescripción extintiva en las obligaciones contenidas en los pagarés incompletos y generar determinadas consecuencias en los acreedores y deudores intervinientes. Asimismo, permitirá que la información proporcionada pueda ser considerada por los abogados y los órganos jurisdiccionales correspondientes, ante futuras relaciones jurídicas procesales de similar contenido, a fin de generar un ambiente socialmente más justo en nuestro país.

Metodológico

Desde el enfoque metodológico, la presente investigación es trascendente, toda vez que, aplica correctamente lo concerniente al enfoque cualitativo, al diseño y tipo de investigación, con la finalidad de realizar un correcto estudio de nuestra problemática. Asimismo, se

considera el uso de una serie de documentos, tales como: artículos, libros, revistas, entrevistas, jurisprudencia, derecho comparado y toda la normativa vigente en el Perú, para dar respuesta a nuestros objetivos planteados.

Relevancia

La presente investigación tiene una gran importancia a nivel social, económico y jurídico, ya que permite apreciar la problemática existente en cuanto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos, dentro de los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero, estableciendo determinadas ventajas arbitrarias para los acreedores y desventajas, también arbitrarias, para los deudores.

Contribución

Considerando que las personas tienden a suscribir pagarés incompletos, a efectos de acceder a un crédito o satisfacer sus necesidades, y que las obligaciones contenidas en dicho título valor no podrán verse satisfechos en los plazos establecidos; la presente investigación contribuye a informar sobre de las implicancias que trae consigo suscribir convenios de integración y pagarés incompletos, de igual manera, la relación que existe entre estos títulos con el tiempo que tiene el acreedor para solicitar que se haga efectivo el pago en la vía judicial, evitando que se genere la vulneración de derechos de los deudores y el abuso por parte de los acreedores.

1.5.- Supuestos y Objetivos del Trabajo

Objetivos

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

Supuestos jurídicos

Supuesto jurídico general

Las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima son: la desnaturalización de la prescripción extintiva, la recuperación indebida de los créditos, la disminución en la esfera patrimonial de los ejecutados y el perjuicio en la información crediticia de los ejecutados.

Supuesto jurídico específico 1

No existe regulación del convenio de integración sobre sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente el convenio de integración se regula de manera genérica en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.

Supuesto jurídico específico 2

No existen criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos. Los Jueces se limitan a resolver con los recaudos que las partes procesales presentan en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

II. MÉTODO

2.1.- Diseño de Investigación

La presente investigación tiene un enfoque **Cualitativo**; toda vez que se estudia el contexto real y natural de los convenios de integración y la prescripción extintiva pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima, y se recolecta información sobre conforme se encuentran en su contexto real y natural que servirá para describir el presente estudio.

En ese sentido, tal como lo señalan Denzin & Lincoln (2005, p. 3), la investigación cualitativa es aquella que interpreta el mundo del observador; es decir, se estudian los fenómenos en su contexto natural, otorgándoles un sentido en función a la interacción con los sujetos que intervienen.

Asimismo, conforme lo describen Gómez & Roquet (2001, p. 47), la metodología cualitativa está orientada al entendimiento de fenómenos particulares y se enfoca en buscar su interrelación con los sujetos que intervienen; esto es, en las experiencias entre los sujetos y los fenómenos investigados.

El diseño de la presente investigación es la **Teoría Fundamental**, puesto que la investigación podrá ser utilizada para entender mejor un determinado fenómeno y continuar su estudio con mayor profundidad; asimismo, favorece a la obtención de respuestas respecto a lo que ocurre y la razón por la cual ocurre el fenómeno estudiado (Cuñat, 2007, p. 2). O en términos de Strauss, Corbin, & Simmerman (2002, p. 21), está referida a los datos recolectados y analizados, los cuales tienen estrecha relación entre sí, dando lugar a la posibilidad de un aumento en la comprensión de conocimientos, siendo la característica principal la fundamentación de conceptos en dichos datos.

Tipo de Investigación

Para la presente investigación corresponde el tipo de investigación **Básica**, también conocida como fundamental o pura, puesto que tiene como finalidad aumentar el conocimiento científico para acrecentar las teorías sobre el objeto de estudio, sin interesarse en la aplicación práctica o inmediata a un hecho concreto, si no desarrollar teorías basadas en principios (Carrasco, 2009, p. 49).

Nivel de Investigación

El nivel de investigación es **Descriptiva**, puesto que lo que se pretende es presentar el tema investigado tal y como se describe en la realidad; es decir, su situación al momento de investigar, para posteriormente efectuar las correspondientes evaluaciones e interpretaciones (Fernández (1984, p. 7). En ese sentido, tal como lo describen Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p. 88), se buscan especificar las características de los sujetos, objetos o entorno que sean posibles de análisis; es decir se recolecta la información de manera independiente o conjunta únicamente de dichas categorías a efectos de indicar su relación.

2.2.- Métodos de Muestreo

Conforme lo describe Mejía (2000, p. 166), lo relevante para una muestra cualitativa es el conocimiento del objeto a investigar, siendo útil y conveniente su aplicación cuando no es viable efectuar la investigación desde una óptica probabilística.

A su vez, Salamanca & Crespo (2007) señalan que la mejor alternativa para obtener los datos en una investigación cualitativa es a través de los puntos de vista de los sujetos que participan en el fenómeno; es decir, de sus conceptos plasmados en el campo.

Por otra parte, respecto a la población, Pineda, De Alvarado, & De Canales (1994, p. 108) la definen como el universo que puede estar constituido por personas, animales, objetos, artículos, entre otros; de los que se desea conocer algo a través de una determinada investigación. Mientras que la muestra, según Carrasco (2009) es una parte o subconjunto de la población, sobre la cual desarrollará la investigación, toda vez que de aquella se obtendrá la información necesaria para su desarrollo.

En ese sentido, en la presente investigación la muestra será **NO PROBABILÍSTICA** y está conformada por seis abogados especializados en Derecho Civil y Comercial, así como también por cuatro especialistas legales o secretarios judiciales de los Juzgados de Paz Letrado de Lima; toda vez que, son los sujetos quienes poseen los conocimientos idóneos para analizar los convenios de integración y la prescripción extintiva de pagarés incompletos.

2.2.1. Escenario de Estudio

Tal como lo refieren Salamanca & Crespo (2007) en cuanto al escenario de estudio, es importante no confundir el lugar con el contexto. En ese sentido, respecto a los lugares en los cuales se aplicaron las entrevistas a los abogados especializados en Derecho Civil y Comercial, tenemos que considerar lo descrito en el siguiente cuadro:

Tabla 1. *Lugares en los que se aplicaron las entrevistas a abogados especializados.*

Abogado especializado en Derecho Civil y Comercial	Lugar de entrevista
Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales	Directorio del Estudio Jurídico Sosaya, Matta & Shimabukuro Abogados S.A.C.
Walter Miguel Chumpitaz Alfaro	Oficina del Director del Centro de Conciliación “Soluciones Mas Sabías”.
Claudia Paola Varas Ruiz	Oficina de la Gerencia General de la empresa Becla Business Cargo Express E.I.R.L.
Benito Villanueva Aro	Oficina de la Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional de la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Nery Victoria León Hachani	Oficina de asesoría externa de la Financiera Proempresa S.A.
Christian Eduardo Hammer Arata	Oficina de la Gerencia General del Estudio Jurídico Hammer Abogados S.A.C.

Respecto a los especialistas legales o secretarios judiciales de los Juzgados de Paz Letrado de Lima, los lugares en los cuales se aplicaron las entrevistas se describen a continuación:

Tabla 2. *Lugares en la que se aplicaron las entrevistas a especialistas y/o secretarios judiciales.*

Juez(a) de Paz Letrado	Lugar de Entrevista
Rocío Maribel Callahui Rojas	Oficina de especialistas judiciales del Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres y Los Olivos.
Isabel Carrasco Villa	Oficina de especialistas judiciales del Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres y Los Olivos.
Ana Abad Levano	Oficina de especialistas judiciales del Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres y Los Olivos.
Angel Ernesto Mauricio Minaya	Oficina de especialistas judiciales del Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres.

En lo referente al contexto, la presente investigación se circunscribe únicamente en los procesos de obligación de dar suma de dinero, tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima, en la vía del Proceso Único de Ejecución, cuando la cuantía no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal, conforme a lo regulado por el artículo 690-B del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. Específicamente en aquellos procesos en los cuales se adjuntan como medios probatorios los pagarés incompletos suscritos por los ejecutados, según lo normado por el artículo 10° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, o se hace referencia a la suscripción de convenios de integración en los cuales se describen las instrucciones para el llenado de dichos títulos valores, incluido la fecha de vencimiento, que a la vez, es la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo prescriptorio para exigir, en vía judicial, el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales, de acuerdo a lo regulado por el artículo 1993° del Código Civil y el artículo 96 de la Ley N° 27287 antes mencionada.

2.2.2. Caracterización de los sujetos

Para elegir a los sujetos a través de los cuales se realizará la observación y análisis de la investigación, Martínez (2012, p. 616) citando a Patton, señala que, es relevante que la elección debe proporcionar la mayor información posible para indagar y profundizar sobre la pregunta a investigar.

Según lo antes expresado, debemos indicar que los sujetos que participaron en la presente investigación, tienen la experiencia necesaria para trasladar sus conocimientos en el trámite de procesos judiciales ejecutivos de obligación de dar suma de dinero sustentados en págares incompletos no sujetos a protesto, por ende, en la suscripción del convenio de integración y la prescripción extintiva de las obligaciones patrimoniales contenidos en dichos títulos valores.

En esa línea de ideas, la lista de personas entrevistadas es la que se pasa a detallar:

Tabla 3. *Lista de personas entrevistadas.*

ENTREVISTADO	CARGO	ENTIDAD EN LA QUE LABORA	ÁREA
Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales	Abogado	Sosaya, Matta y Shimabukuro Abogados S.A.C.	Gerencia General
Walter Miguel Chumpitaz Alfaro	Abogado – Conciliador	Centro de Conciliación Soluciones Más Sabias	Dirección
Claudia Paola Varas Ruiz	Maestría en Derecho con mención en Aduanas.	Becla Business Cargo Express E.I.R.L.	Gerencia General
Benito Villanueva Aro	Doctor en Derecho	Municipalidad Metropolitana de Lima	Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional de la Gerencia de Planificación

Nery Victoria León Hachani	Abogada	Financiera Proempresa S.A.	Legal Externo
Christian Eduardo Hammer Arata	Abogado	Estudio Hammer Abogados S.A.C.	Gerente General
Rocío Maribel Callahui Rojas	Secretaría Judicial	Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres y Los Olivos.	Despacho del Juzgado
Isabel Carrasco Villa	Especialista Legal	Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres y Los Olivos.	Despacho del Juzgado
Ana Abad Levano	Secretaría Judicial	Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres y Los Olivos.	Despacho del Juzgado
Angel Ernesto Mauricio Minaya	Especialista Legal	Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres.	Despacho del Juzgado

2.2.3. Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica

Tal como lo señala Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p. 418-419), el análisis en un proceso sistemático, no rígido, en el cual se integran diversas posturas. Se desarrolla de manera contextual que consiste en el estudio de cada uno de los datos y la relación que tiene con los demás.

Entonces, el plan de análisis debe ser entendido como el proceso idóneo para desarrollarlo en la presente investigación, la cual tiene un enfoque cualitativo con un diseño basado en la teoría fundamentada. Ello, debido a que a través de dicho proceso, se van a extraer los datos necesarios para efectuar la correcta interpretación del fenómeno estudiado.

2.3.- Rigor Científico

La calidad de las investigaciones en las ciencias jurídicas se encuentra determinada por el rigor científico, y se mide a través de criterios determinados como la credibilidad, la confirmabilidad y la transferibilidad (Castillo & Vásquez, 2003, p. 165).

Credibilidad

Está referido a la autenticidad que los sujetos estudiados tienen de los resultados de la investigación, la cual se logra a través de las observaciones y recolección de información realizadas a los propios sujetos (Castillo & Vásquez, 2003, p. 165). Asimismo, la autenticidad de la investigación cualitativa debe ser juzgada por un proceso sistemático denominado dependabilidad o fiabilidad (Lincoln & Guba, 1985, p. 289).

Confirmabilidad

Este criterio está referido a la evaluación que realiza otro investigador respecto a la investigación original completa, tanto en los procedimientos, como en los resultados intermedios y finales, a fin de seguir la ruta del investigador primigenio (Guba & Lincoln, 1981, p. 103).

Transferibilidad

Referido a la eventualidad de que los resultados de la investigación puedan extrapolarse a otros contextos. El nivel de la transferibilidad está relacionado directamente con la similitud de los contextos con el de la investigación. En ese sentido, será necesario que se describan las características de los sujetos y del fenómeno estudiado. (Castillo & Vásquez, 2003, p. 166).

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos son utilizadas para obtener la información desarrollada en los documentos y que guarda relación con nuestro problema y objetivo de investigación (Carrasco, 2009, p. 275). En esa misma línea, la recolección de datos encuentra sustento en métodos que no se encuentran predeterminados en su totalidad, ya que, lo que se pretende es obtener los datos de personas determinadas en una situación específica. Posteriormente, dichos datos se transformarán en información y se analizarán de manera que puedan

responder a las preguntas de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 397).

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos:

- **Entrevista**

Los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p. 239) señalan que las entrevistas deben ser aplicadas por personas debidamente calificadas a personas con los conocimientos necesarios para dar respuesta a las preguntas diseñadas. Asimismo, sobre la manera de aplicarse, señala que, el entrevistador hace la pregunta y apunta la respuesta, actuando como un filtro.

Guía de entrevista

Los mismos autores señalan que la guía de entrevista es un instrumento que tiene como finalidad la obtención de información adecuada para conocer correctamente y a profundidad nuestro fenómeno estudiado. Precisa que no existe una forma única para su diseño, no obstante, es necesario que su desarrollo se oriente a la finalidad antes descrita (p. 24).

En la presente investigación, dicho instrumento de recolección de datos está conformado por 9 preguntas, las cuales se diseñaron en base al problema general y los problemas específicos, teniendo como base los supuestos jurídicos. Dichas preguntas serán trasladadas a nuestra muestra de manera correlativa, a efectos de que manifiesten sus ideas y se plasmen en el soporte físico.

- **Análisis documental**

El análisis documental es una técnica de recolección de datos por medio del cual se obtiene la información necesaria para nuestra investigación, a partir de los libros, jurisprudencia, informes, artículos, revistas, etc.

Ficha de análisis de fuente documental

A través de la ficha de análisis de fuente documental se analizó el convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima,

considerando la jurisprudencia respecto a los procesos de ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

Cabe señalar que los instrumentos de recolección de datos reúnen el requisito esencial de **VALIDEZ**; es decir, una adecuada representación de las expresiones de los participantes respecto a la investigación por parte del investigador (Cortés, 1997, p. 78). Así como también por la **CONFIABILIDAD**; es decir, la credibilidad en base a la interpretación y demostración de los datos desde su fuente. En ese sentido, la validez de los instrumentos de recolección de datos antes descritos fueron legitimados por tres asesores expertos en el objeto de estudio, conforme se detalla a continuación:

Tabla 4. *Validación de instrumentos.*

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Guía de entrevista y Análisis Documental)		
Datos del asesor	Cargo	Porcentaje
Rodriguez Figueroa, Jose Jorge	Docente de la Universidad César Vallejo – Lima Norte	96%
Santisteban Llontop, Pedro Pablo	Docente de la Universidad César Vallejo – Lima Norte	95%
Wenzel Miranda, Eliseo Segundo	Docente de la Universidad César Vallejo – Lima Norte	95%
PROMEDIO	95%	
CONFIABILIDAD		
Según las entrevistas aplicadas a los abogados especializados en Derecho Civil y Comercial, así como también a los especialistas legales o secretarios judiciales de los Juzgados de Paz Letrado de Lima; el entrevistado con mayor relevancia, en cuanto a experiencia dogmática y pragmática respecto a la presente investigación y que se utiliza como base de confiabilidad para los resultados obtenidos, es aquel que a continuación se detalla:		

DATOS	CARGO	EXPERIENCIA SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales	Gerente General de Sosaya, Matta y Shimabukuro Abogados S.A.C.	Abogado con 15 años de experiencia en materia Civil y Comercial. Tiene a su cargo una amplia cartera de clientes para recuperación de créditos a nivel judicial. Especialista en procesos de obligación de dar suma de dinero en la vía del Proceso Único de Ejecución, conforme a los Capítulos I y II del Título V de la Sección Quinta del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores y el Código Civil.
<p>El abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales es el entrevistado que acredita la confiabilidad de los resultados obtenidos en la presente investigación, toda vez que, por su amplia experiencia, conoce los procesos de obligación de dar suma de dinero que se tramitan en la vía del proceso único de ejecución, especialmente, en aquellos que se sustentan en pagarés incompletos suscritos por los deudores. Cabe señalar que, también tiene conocimiento sobre los convenios de integración suscritos por los acreedores y deudores, debido a que, tiene la obligación de completar dichos títulos valores, integrando la información autorizada por los sujetos intervinientes en la relación causal, antes de exigir el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales en sede judicial. Es decir, conoce a la perfección el tema de investigación.</p>		

2.4.- Análisis Cualitativo de los Datos

Según Spradley, citado por Rodríguez, Lorenzo, & Herrera (2005, p. 135), el análisis cualitativo se caracteriza por su forma cíclica y circular; y debe entenderse como un proceso a través del cual se organizan los datos recolectados a fin de interpretar y obtener las conclusiones. Es decir, el investigador descifrá que las categorías contienen aspectos que anteriormente no fueron comprendidos pero que son relevantes.

El mismo autor señala que existen tres etapas dentro del proceso de análisis de datos cualitativos. Estas son: reducción de datos, disposición y transformación de los datos, y obtención de resultados y verificación de conclusiones.

En lo que respecta a la reducción de datos, en la presente investigación se realizó una separación de las unidades de contenido considerando los criterios espaciales, temporales, temáticos, gramaticales y sociales. Asimismo, se identificaron y clasificaron las unidades, para posteriormente realizar una síntesis (Rodríguez, Lorenzo, & Herrera, 2005, p. 139).

En cuanto a la disposición y transformación de datos de la presente investigación, se desarrollaron procedimientos para facilitar la comprensión de la investigación, verbigracia: uso de gráficos, diagramas, matrices, tablas, etc. (Rodríguez, Lorenzo, & Herrera, 2005, p. 146).

La obtención de resultados requirió de procedimientos relacionados con la descripción, comparación e interpretación, mientras que la verificación de conclusiones requirió de procedimientos relacionados con el contraste con otras teorías, analogías y síntesis de otros investigadores (Rodríguez, Lorenzo, & Herrera, 2005, p. 147).

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014, p. 418) el análisis y la recolección de los datos cualitativos se efectúan de manera paralela y se necesita un esquema diferente para cada investigación. Asimismo, señala que tiene como propósito explorar los datos, estructurarlos, conceptualizarlos o categorizarlos, comprender el contexto en los que se presentan, vincular sus resultados con otros conocimientos y obtener una teoría fundamentada.

En la presente investigación se realiza un análisis de los datos cualitativos a través de un proceso básico; es decir, realizando las codificaciones, categorizaciones, transcripciones y

comparacion de los datos recolectados para evidenciar sus semejanzas o divergencias. Para dicho fin se utilizaron matrices, mapas, diagramas, tablas y demás esquemas.

El análisis se trabajó a partir del estudio individual de cada dato obtenido, realizando evaluaciones iniciales y profundas, y posteriormente se realizará un análisis grupal para la comprensión general del fenómeno estudiado.

Cabe señalar que en la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos de análisis cualitativo de datos, a fin de procesar los datos obtenidos durante el desarrollo del estudio y validar nuestros supuestos jurídicos:

Análisis Interpretativo: Consiste en estudiar la realidad de manera general, esto es, las categorías y sus interpretaciones se crean a partir de los datos estudiados, a fin de lograr una mejor fundamentación de lo que se ha obtenido con los instrumentos de recolección de datos.

Análisis Hermenéutico: Consiste en emitir una opinión con base en lo que se ha analizado. Se trata de obtener un criterio más adecuado de lo que se encuentra plasmado en los instrumentos de recolección de datos, considerando lo que se encuentra descrito en las normas legales que se invocan en la presente investigación.

Análisis de la Integración: Consiste en agrupar los trabajos previos citados en la parte introductoria de la presente investigación, así como también la información plasmada en nuestro marco teórico y los resultados que se obtienen de los instrumentos de recolección de datos.

2.5.- Aspectos Éticos

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina de Investigación de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo – Lima Norte, para el periodo 2018-II. Incluido la guía de productos observables de las experiencias curriculares de investigación de fin de carrera.

En ese sentido, es preciso señalar que es factible la investigación del fenómeno estudiado, toda vez que se encuentra dentro de las líneas de investigación establecidas por la Oficina

de Investigación antes descrita. Asimismo, se cuenta con los recursos necesarios para la obtener los resultados.

Por otra parte, en el contenido de los conceptos descritos en el marco teórico, se ha cumplido con respetar los derechos de autor de cada persona citada, conforme a la normativa APA, así como también la descripción en las referencias bibliográficas respectivas.

III. RESULTADOS

3.1.- Descripción de resultados

3.1.1. Descripción de resultados de la entrevista

Respecto a la descripción de resultados, Bernal (2010, p. 220) señala que, tiene como finalidad interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos descritos precedentemente, a la muestra especificada, en relación al problema de investigación, objetivos y supuestos jurídicos. Por tal motivo, señala que es el aspecto más relevante de la investigación.

Considerando lo antes expuesto, se procederá a plasmar y analizar la información obtenida de las entrevistas aplicadas a los abogados especializados en Derecho Civil y Comercial especialistas legales o secretarios judiciales de los Juzgados de Paz Letrado de Lima, precisando que cada una de ellas consta de 3 preguntas por cada objetivo general y específico, es decir, 9 preguntas en total, cuyas respuestas serán la fuente esencial que deberán ser contrastadas con nuestros supuestos jurídicos:

- ✓ **Entrevista dirigida a abogados especializados en Derecho Civil y Comercial, especialistas legales o secretarios judiciales de los Juzgados de Paz Letrado de Lima.**

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

En cuanto al objetivo general, se plantearon las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

Al respecto, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) manifestó que el convenio de integración atenta contra la naturaleza propia de la prescripción extintiva de la acción, precisando que existe una afectación no sólo a nivel de las acciones cambiarias reguladas en la Ley de Títulos Valores, sino también en la prescripción extintiva de la acción regulada de manera general. Sostiene su postura argumentando que dicho convenio de integración evita

que se pueda iniciar el cómputo del plazo para que los efectos de la prescripción extintiva de la acción puedan aplicarse.

En esa misma línea de ideas, el abogado Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018) refirió que el convenio de integración impide que se produzcan los efectos de la prescripción extintiva, pero únicamente en cuanto a las acciones cambiarias, dado que no admite el inicio del cómputo del plazo prescriptorio. Dicha opinión es compartida por la abogada Claudia Paola Varas Ruiz (2018), quien hizo referencia a un entrampamiento de los efectos de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias; de igual manera, por el abogado Benito Villanueva Aro (2018), al mencionar que se afecta el cómputo de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias; así como también, por el abogado Christian Eduardo Hammer Arata (2018), cuando señaló que el convenio de integración no permite el normal desarrollo de los efectos de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias descritas en la Ley de Títulos Valores. De modo análogo, la Secretaria Judicial Rocío Maribel Callahui Rojas (2018) expresó que el convenio de integración afecta la naturaleza jurídica de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias al impedir el cómputo del plazo prescriptorio; idea que concuerda con lo expresado por la Especialista Legal Isabel Carrasco Villa (2018) y la Secretaria Judicial Ana Abad Levano (2018), al señalar que la naturaleza jurídica de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias se ve afectada cuando el convenio de integración no permite que exista un término inicial para que los efectos de la prescripción extintiva de la acción se produzcan.

Por otra parte, la abogada Nery Victoria León Huachani y el Especialista Legal Ángel Ernesto Mauricio Minaya coincidieron al señalar que el convenio de integración no puede tener implicancias positivas o negativas en la prescripción extintiva de pagarés incompletos, ya que tienen distinta naturaleza jurídica.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

Sobre el particular, el Especialista Legal Ángel Ernesto Mauricio Minaya (2018) y la abogada Nery Victoria León Huachani (2018) manifestó que no es posible que el convenio de integración, entendido como los acuerdos privados para el llenado de los pagarés

incompletos, puedan colisionar con lo regulado por el artículo 1990° del Código Civil sobre la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva de la acción.

Sin embargo, en una línea distinta de ideas, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) expresó que, el convenio de integración de los pagarés incompletos podría colisionar con lo previsto por el artículo 1990° del Código Civil, porque los acreedores aprovechan la autorización efectuada por los deudores, para que puedan colocar, de manera unilateral, la fecha de vencimiento de las obligaciones cambiarias asumidas. Ergo, la producción de los efectos de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias están supeditadas a tal decisión, y no al decurso del tiempo en sí mismo.

De manera similar, la abogada Claudia Paola Varas Ruiz (2018) señaló que el convenio de integración suscrito por el deudor, permite que el acreedor señale la fecha de vencimiento en el pagaré incompleto y, con ello, evite el inicio del decurso de tiempo para que los efectos de la prescripción extintiva de la acción se produzcan, colisionando con lo regulado por el artículo 1990° del Código Civil. A su vez, el abogado Benito Villanueva Aro (2018) agregó que es la autonomía de la voluntad del acreedor la que permite colocar la fecha de vencimiento en los pagarés incompletos, previa autorización por parte del deudor en el convenio de integración.

En el mismo sentido, abogado Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018), la Secretaria Judicial Rocío Maribel Callahui Rojas (2018), el abogado Christian Eduardo Hammer Arata (2018), la Especialista Legal Isabel Carrasco Villa (2018) y la Secretaria Judicial Ana Abad Levano (2018), manifestaron que el convenio de integración, documento que contiene el acuerdo del acreedor y del deudor, permite que el acreedor tenga libre albedrío para colocar la fecha de vencimiento en el pagaré incompleto, dejando a la potestad del acreedor que los efectos jurídicos de la prescripción extintiva se produzcan, colisionando de esta manera con lo normado en el artículo 1990° del Código Civil.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

Respecto a dicha interrogante, todos los entrevistados concordaron en que uno de los efectos es la disminución de la esfera patrimonial del ejecutado (deudor). No obstante, el abogado

Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018) agregó que también puede efectuarse la inscripción en el Registro de Deudores Judiciales Morosos. Postura que coincide con la señalada por la Secretaria Judicial Rocío Maribel Callahui Rojas (2018), el abogado Benito Villanueva Aro (2018) y la Secretaria Judicial Ana Abad Levano (2018) quienes, a su vez, añadieron que puede realizarse la inscripción en el Registro Nacional de Protestos y Moras de la Cámara de comercio de Lima.

Además de los efectos antes descritos, el abogado Christian Eduardo Hammer Arata (2018), la abogada Nery Victoria León Huachani (2018), los Especialistas Legales, Isabel Carrasco Villa (2018) y Ángel Ernesto Mauricio Minaya (2018), precisaron que pueden ejecutarse las medidas cautelares reguladas en la norma procesal, siempre y cuando exista una sentencia que resuelve en contra de los ejecutados (deudores).

Aunado a ello, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) y la abogada Claudia Paola Varas Ruiz (2018), refirieron que, otro efecto de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los ejecutados (deudores) es la afectación en su record crediticio ante las centrales de riesgo.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil?

Los entrevistados, en su totalidad, afirmaron que los convenios de integración, como tal, no se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, todos manifestaron que deben ser entendidos como los acuerdos entre acreedores y deudores para el llenado de pagarés y demás títulos valores incompletos.

En ese sentido, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) manifestó que la escasa información sobre los convenios de integración en nuestro ordenamiento jurídico no

es suficiente para resolver las controversias suscitadas entre los sujetos que intervienen en las relaciones cambiarias. Asimismo, la abogada Claudia Paola Varas Ruiz (2018), el abogado Benito Villanueva Aro (2018) y el abogado Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018), coincidieron al referir que la regulación actual se limita a señalar que las partes intervinientes deben cumplir con las cláusulas pactadas, pero no se describen sus características ni la manera de usarse para la ejecución de los pagarés incompletos. Dicha posición también es compartida por las Secretarías Judiciales, Rocío Maribel Callahui Rojas (2018) y Ana Abad Levano (2018), quienes agregaron que dichas normas tampoco recogen lo concerniente a los límites para su aplicación.

De modo semejante, el abogado Christian Eduardo Hammer Arata (2018) y los Especialistas Legales, Isabel Carrasco Villa (2018) y Ángel Ernesto Mauricio Minaya (2018), compartieron la postura de que la regulación actual de los convenios de integración es deficiente, puesto que sólo hacen referencia al respecto de su contenido para que la ejecución de los pagarés incompletos en sede judicial sea legal.

Por otra parte, la abogada Nery Victoria León Huachani (2018), señaló que, al entenderse los convenios de integración como los acuerdos adoptados para el llenado de los pagarés incompletos, estos deben interpretarse desde la perspectiva de los actos jurídicos.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

En cuanto a dicha pregunta, todos los abogados especializados en Derecho Civil y Comercial, así como los Secretarías Judiciales y Especialistas Legales que fueron entrevistados, manifestaron que los artículos en mención, tal como se encuentran redactados en cada una de las normas, no pueden ser aplicadas en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

Sobre dicha interrogante, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) manifestó que, la definición, características, implicancias y límites para la aplicación del convenio de integración deberían estar regulados en la Sección Segunda del Libro primero de la Ley de Títulos Valores. Asimismo, en la Sección Octava del mismo libro, debería plasmarse lo concerniente al cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones contenidas en un título valor incompleto.

Por su parte, el abogado Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018) señaló que la definición y características generales del convenio de integración deberían regularse en el artículo 10° de la Ley de Títulos Valores. No obstante, sus implicancias y características específicas, deberían estar descritas en el Segundo Libro, referido a los títulos valores específicos. Y, lo concerniente al cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones, en la sección octava del Libro Primero de dicha norma.

A su vez, la abogada Claudia Paola Varas Ruiz (2018) propuso que el convenio de integración debe estar regulado en la Ley de Títulos Valores de la siguiente manera: En la sección segunda del Primer Libro, todo lo concerniente a los aspectos generales, incluido sus implicancias. En la Sección Octava del Primer Libro, el cómputo del plazo de prescripción de las obligaciones. Y, en cada título valor descrito en el Libro Segundo, sus características específicas.

Ahora, el abogado Benito Villanueva Aro (2018) refirió que la definición, características o requisitos, los límites y los efectos del convenio de integración, incluida sus implicancias, deberían estar regulados en un título aparte, dentro de la Sección Segunda del Libro Primero de la Ley de Títulos Valores, referido a la circulación de títulos valores. Asimismo, debería precisarse lo concerniente al cómputo del plazo prescriptorio de las obligaciones contenidas en un título valor, en la Sección Octava del mismo libro.

A propósito, el abogado Christian Eduardo Hammer Arata (2018) manifestó que las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los títulos valores,

en general, deberían estar regulados en la Sección Octava del Libro Primero de la Ley de Títulos Valores.

Sobre la interrogante en cuestión, la Secretaria Judicial Rocío Maribel Callahui Rojas (2018) precisó que, si se ciñen estrictamente las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, debería estar regulado en la Sección Segunda del Libro Segundo de la Ley de Títulos Valores.

A su vez, la Especialista Legal Isabel Carrasco Villa (2018) señaló que las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, deberían estar reguladas en la Sección Octava del Primer Libro de la Ley de Títulos Valores y en la Sección Segunda del Libro Segundo de la misma norma.

Por su parte, la Secretaria Judicial Ana Abad Levano (2018) expresó que todas las generalidades del convenio de integración, incluida sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, deberían estar reguladas en la Sección Segunda del Libro Primero de la Ley de Títulos Valores.

Finalmente, en sentido contrario a los entrevistados antes mencionados, la abogada Nery Victoria León Huachani (2018) y el Especialista Legal Ángel Ernesto Mauricio Minaya (2018) señalaron que el convenio de integración debe ser entendido como los acuerdos adoptados, es decir, actos jurídicos. Por consiguiente, no deberían estar regulados en otras normas del sistema jurídico vigente.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

Los entrevistados, en su totalidad, manifestaron que no existen criterios uniformes sobre las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero. No obstante, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) y la abogada Claudia Paola Varas Ruiz (2018), señalaron que, en los procesos ejecutivos, los jueces únicamente resolvían según los medios probatorios ingresados al proceso.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

Al respecto, la Secretaria Judicial Ana Abad Levano (2018), la Especialista Legal Isabel Carrasco Villa (2018) y los abogados, Nery Victoria León Huachani (2018), Claudia Paola Varas Ruiz (2018) y Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018), expresaron que formularían la contradicción correspondiente, invocando el numeral 2 del artículo 690-D del Código Procesal Civil, respecto a la nulidad del pagaré incompleto; asimismo plantearían la excepción de prescripción extintiva de la acción.

Además de lo anteriormente mencionado, el Especialista Legal Angel Ernesto Mauricio Minaya (2018), la Secretaria Judicial Rocío Maribel Callahui Rojas (2018) y los abogados, Christian Eduardo Hammer Arata (2018) y Benito Villanueva Aro (2018) expresaron que promoverían la tacha del convenio de integración por causal de nulidad.

Por su parte, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) precisó que, además de lo señalado en los párrafos precedentes, de manera paralela, en vía de acción, interpondría una demanda de nulidad del convenio de integración, según lo previsto por el artículo 1990° del Código Civil, sobre la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

Sobre la pregunta en cuestión, el Especialista Legal Angel Ernesto Mauricio Minaya (2018) y la abogada Nery Victoria León Huachani (2018) manifestaron que no es relevante la adopción de criterios uniformes por parte de los Jueces de Paz Letrado para establecer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos, ya que, entre dichas figuras jurídicas no existe alguna relación.

Por otra parte, el abogado Walter Miguel Chumpitaz Alfaro (2018) precisó que es importante porque sería un modelo jurídico que serviría como base para la igualdad en la resolución de las controversias, evitando distintas interpretaciones sobre la figura jurídica del convenio de integración y sus implicancias en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

Asimismo, el abogado Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales (2018) indicó que permitiría resolver las controversias que versan sobre las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos sin dilaciones indebidas, lo que a su vez genera un descongestionamiento laboral de los juzgados competentes para tramitar los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero. Además, añadió que se establece un ambiente de justicia, conforme a lo previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

De manera análoga, los abogados Benito Villanueva Aro (2018), Claudia Paola Varas Ruiz (2018) y Christian Eduardo Hammer Arata (2018) señalaron que serviría como una herramienta de apoyo para la coherencia en el orden jurídico y en la aplicación de los principios legales del derecho por parte de los órganos jurisdiccionales, ante el vacío legal sobre las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos.

A su vez, la Secretaria Judicial Rocío Maribel Callahui Rojas (2018) expresó que se evitarían las decisiones contradictorias emitidas por los juzgados de paz letrado respecto a las

implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos.

En el mismo sentido, la Especialista Legal Isabel Carrasco Villa (2018) refirió que a través de dichos criterios se concretaría el principio de economía procesal contemplada en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en beneficio de las partes que intervienen en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero, sustentados en los convenios de integración y los pagarés incompletos.

Finalmente, la Secretaria Judicial Ana Abad Levano (2018) expresó que se generaría mayor seguridad jurídica y confianza para las partes procesales de que el proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero va a seguir por un trámite justo, en razón a las decisiones que fueron emitidas con anterioridad por los juzgados sobre dicha controversia.

3.1.2. Descripción de los resultados del análisis documental

A continuación, se describirán y analizarán los documentos que contienen información relacionada con nuestro objetivo general y objetivos específicos.

“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL”

- **Proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero recaído en el Expediente N° 00358-2017-0-1801-JP-CI-03 ventilado ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima.**

Para efectos de la presente investigación es imperativo analizar los fundamentos de la demanda presentada el 13 de enero del 2017, asimismo, los fundamentos de la excepción de prescripción ingresada al proceso con fecha 08 de marzo del 2017 y los considerandos del Auto Final expedido el 31 de octubre del 2017. En ese sentido, procedemos a describir cada uno de los argumentos antes descritos:

La ejecutante solicita tutela jurídica con base en el Pagaré S/N emitido el 07 de octubre del 2005, que contiene una obligación patrimonial a cargo del ejecutado por la suma de US\$ 3,282.77 (Tres mil doscientos ochenta y dos y 77/100 Soles), con una fecha de vencimiento al 16 de enero del 2015. Además, sostiene que, dicho título valor tiene mérito ejecutivo y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 689° del Código Procesal Civil, para promover la ejecución de una obligación patrimonial.

Por su parte, la ejecutada, en el ejercicio de su derecho de defensa, formula la excepción de prescripción extintiva de la acción, argumentando que la obligación, cuyo pago se exige en el proceso, fue asumido el 07 de octubre del 2005, por tanto, en virtud a lo regulado por el numeral 1 del artículo 2001° del Código Procesal Civil, no es exigible a nivel judicial.

El Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima, al momento de resolver la causa, en su considerando quinto, expresa que el artículo 96° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores dispone que las acciones cambiarias prescriben a los 3 años, computados desde su vencimiento; sin embargo, la ejecutada pretende hacer valer su derecho señalando efectuando el cómputo del plazo de prescripción desde la fecha de emisión del Pagaré S/N antes descrito. Por consiguiente, declara infundada la excepción de prescripción extintiva y ordena llevar adelante la ejecución, hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la obligación puesta a cobro.

De todo lo expuesto, podemos concluir que el órgano jurisdiccional resuelve el caso aplicando los artículos correspondientes al cómputo del plazo de prescripción de las acciones cambiarias. Sin embargo, no se pronuncia sobre el tiempo transcurrido entre la fecha de emisión del pagaré incompleto y su fecha de vencimiento. Pese a que el ejecutado, de manera deficiente, únicamente señala la existencia de una obligación causal. Cabe precisar que, por una parte, el ejecutante omite señalar que la ejecución es de un pagaré incompleto, y por la otra, el ejecutado no hace mención al convenio de integración o acuerdos adoptados para su llenado.

- **Proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero recaído en el Expediente N° 02405-2016-0-3208-JP-CI-02 ventilado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita.**

De manera análoga al proceso señalado precedentemente, se analizarán los fundamentos de la demanda presentada el 03 de mayo del 2016, así como también, los fundamentos de la contradicción presentada con fecha 07 de junio del 2016 y los considerandos del auto final expedido el 08 de mayo del 2017.

La parte ejecutante sustenta su demanda en el Pagaré S/N emitido el 28 de febrero del 2017, mediante la cual el ejecutado se obliga a pagar la suma de S/ 23,517.00 (Veintitrés mil quinientos treinta y siete y 00/100 Soles), con fecha de vencimiento al 04 de abril del 2016. Asimismo, señala que según el artículo 688° numeral 4 del Código Procesal Civil, el referido

título valor tiene mérito ejecutivo al contener una cláusula especial de no estar sujeto a protesto y una obligación cierta, expresa, exigible y líquida.

En otro sentido, la parte ejecutada, sustenta su contradicción de demanda en un error en monto de la deuda puesta a cobro. Además, hace mención a los artículos pertinentes sobre los títulos valores incompletos y la forma del llenado.

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita, emite el auto final N° 116-2017 declarando infundada la contradicción y ordenando llevar adelante la ejecución, hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la obligación demandada. En el tercer considerando de dicha resolución, el órgano jurisdiccional expresa que la parte ejecutada no ha cumplido con acreditar que el monto demandado sea menor, además, señala que en el trámite del proceso no es necesario acreditar el origen de la obligación contenida en el pagaré, atendiendo al principio de literalidad de los títulos valores.

Con lo antes mencionado, podemos concluir que el juzgado a cargo del proceso no valora lo expuesto por el ejecutado sobre el convenio de integración que contiene cláusulas que deben ser cumplidas para la ejecución del pagaré incompleto, y que es utilizado como medio probatorio para acreditar la obligación pendiente de pago. Es decir, se limita a expresar que por tratarse de un título valor, únicamente debe verificarse el cumplimiento de pago, sin entrar a analizar si la obligación asumida ha prescrito o si el documento ha cumplido con los acuerdos adoptados para su llenado.

- **Fallo: 5.054-2006 emitido por la Primera Sala de la Corte Suprema de Chile, respecto al proceso ejecutivo de dar entre el Banco Santiago y Manzano Dagoberto ventilado ante el 19° Juzgado Civil de Santiago mediante rol 5384-1999.**

En el presente caso, relacionado con el pagaré incompleto y el cómputo de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias, el ejecutado presenta el recurso de Casación en el fondo contra la sentencia emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante la cual se revoca la Resolución N° 28 expedida el 28 de junio del 2001, que acoge la excepción 17 del artículo 464° del Código de Procedimientos Civiles, declarando la prescripción de las acciones cambiarias de las cuotas correspondientes de mayo a noviembre de 1999 señaladas en el pagaré, las cuales tenían una antigüedad mayor a 1 año desde la fecha de notificación de la demanda.

En el cuarto fundamento del fallo, la Primera Sala de la Corte Suprema de Chile señala que el cómputo para la exigibilidad de las acciones cambiarias respecto al pagaré comienza desde que se presenta la demanda, toda vez que, con ello se expresa la voluntad de utilizar la cláusula de aceleración pactada entre las partes. Además, en el fundamento siguiente, la Sala menciona que es contrario a derecho, el hecho de hacer depender de la voluntad del acreedor la prescripción de las obligaciones cambiarias, pues tal circunstancia, la volvería inaplicable.

De lo expuesto, podemos concluir que la Corte Suprema de Chile realiza una evaluación de las normas referidas a los pagarés incompletos y al cómputo para el inicio de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias, para fallar a favor del deudor, manifestando que no puede dejarse a la voluntad del acreedor, la exigibilidad de las acciones cambiarias, toda vez que ello implicaría dejar inservible la institución jurídica de la prescripción extintiva. Por tales argumentos, deja sin efecto el cobro de las cuotas pendientes de pago a favor de la ejecutante.

IV. DISCUSIÓN

En el presente capítulo se describen los conocimientos y hallazgos que tienen relación con el objeto de estudio. Para tal efecto, se procederá a contrastar la información descrita en los trabajos previos, los conceptos contenidos en el marco teórico, las entrevistas aplicadas y el análisis jurisprudencial que forman parte de la presente investigación, conforme a continuación se describe:

OBJETIVO GENERAL: Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

En lo que respecta a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima, considerando los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se tiene que ocho de los diez entrevistados, concuerdan al señalar que el convenio de integración puede afectar o impedir que se produzcan los efectos de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias respecto a los pagarés incompletos, porque el acreedor tiene la posibilidad de utilizar la autorización concedida por el deudor, para colocar la fecha de vencimiento de las obligaciones cuando lo crea conveniente, sin importar la fecha de emisión del título valor, por consiguiente, incurrir en la causal de nulidad descrita en el artículo 1990° del Código Civil.

Asimismo, señalan que la afectación patrimonial a causa de una sentencia que declara fundada la demanda de ejecución, el reporte negativo en las centrales de riesgo, la inscripción en el Registro de Deudores Judiciales Morosos y en el Registro Nacional de Protestos y Moras, así como también, la posibilidad de trabar las medidas cautelares sobre el patrimonio personal; son las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, respecto a los ejecutados (deudores) dentro de un proceso de obligación de dar suma de dinero. Conocimientos semejantes a los descritos en nuestro supuesto general.

En una línea similar de ideas, las cuales compartimos, en nuestros antecedentes nacionales se describe que el incumplimiento de los convenios de integración, como acuerdos para el llenado de pagarés incompletos, constituye una práctica abusiva por parte de las entidades bancarias para el trámite de los procesos de ejecución de obligación de dar suma de dinero, que causa un menoscabo patrimonial en los deudores al incrementar las obligaciones cartulares sin justificación sustentada. De igual manera, existe un abuso de derecho en los

contratos por adhesión suscritos por los deudores para los préstamos otorgados por las entidades financieras, los cuales afectan la libertad contractual y origina un menoscabo patrimonial para los deudores. Cabe precisar que, sobre la libertad contractual, De la Puente (2003, p. 200) señala que es la “libertad de configuración interna” jurídicamente amparada si se encuentra dentro de los límites establecidos por la ley, la moral y las buenas costumbres.

Por su parte, respecto a la realidad jurídica internacional, en Colombia, se describe la existencia de un perjuicio en el título valor que se ejecuta de manera judicial sin haberse completado conforme a las instrucciones otorgadas por el deudor, además la complejidad para acreditar a nivel judicial que no se ha cumplido con las instrucciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que estas no necesariamente se plasman de manera escrita; además, existe un abuso en el llenado de los pagarés incompletos para la ejecución de las obligaciones cambiarias, cuyo origen se encuentra en las teorías contractuales del convenio de integración, en la buena fe de los terceros quienes hacen uso del principio de circulación, en la relación causal o primitiva y la propia autorización efectuada por el deudor. Precizando que el incumplimiento pacto de completamiento o convenio de integración no extingue la obligación contenida en el título valor, no obstante, su cumplimiento deberá ser exigido en un proceso tramitado en vía de acción, entiéndase: proceso sumarísimo, abreviado o de conocimiento; según la cuantía en nuestro ordenamiento jurídico.

A su vez, la regulación chilena señala que la exigibilidad de las obligaciones patrimoniales cambiarias nace al momento en el que debe efectuarse el pago, fecha en la que debe iniciar el cómputo del plazo de prescripción, sin embargo, como lo manifiestan los ocho entrevistados antes referidos, los acreedores, de manera unilateral y estando autorizados por los deudores a través del convenio de integración, pueden decidir sobre la fecha de pago; es decir, depende de aquellos titulares del crédito, la producción de los efectos jurídicos de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias correspondientes a los pagarés incompletos.

Por otra parte, discrepamos con las ideas de dos de los diez entrevistados, quienes consideran que el convenio de integración no tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, basándose, únicamente, en que ambos conceptos tienen distinta naturaleza jurídica. Dicha afirmación queda superada por lo manifestado por los demás entrevistados, quienes exponen diversas implicancias del mencionado convenio de integración. Asimismo, por lo descrito en el análisis jurisprudencial del Fallo 5.054-2006,

mediante el cual, la Primera Sala de la Corte Suprema de Chile resuelve el caso seguido por el Banco Santiago contra Manzano Dagoberto, señalando que no puede dejarse que el acreedor decida sobre la exigibilidad de las obligaciones cambiarias, toda vez que, dicha situación impediría la aplicación de la prescripción extintiva de las acciones cambiarias.

Por lo tanto, considerando que nuestro objetivo general es conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima, se advierte que el convenio de integración genera las siguientes implicancias en la prescripción extintiva de los mencionados títulos valores: afectación en el cómputo del plazo de prescripción de las acciones cambiarias de los pagarés incompletos, menoscabo en la esfera patrimonial de los deudores ante una sentencia que declara fundada la demanda y ordena la ejecución forzada a través de las medidas cautelares correspondientes, la inscripción en el Registro de Deudores Judiciales Morosos, en el Registro Nacional de Protestos y Moras y el reporte con calificación negativa en las centrales de riesgo; lo cual se encuentra corroborado y debidamente sustentado en los resultados obtenidos por los entrevistados, los trabajos previos nacionales de Castillo (2016) y Rodríguez (2004) e internacionales de Giraldo (2011), Gallego (2018), Carrasco (2008) y Valdebenito (2010), así como también, el análisis jurisprudencial del Fallo 5.054-2006. Es preciso señalar que las implicancias antes mencionadas son semejantes a las descritas en nuestro supuesto jurídico general.

Ahora bien, habiendo corroborado nuestro supuesto general y obtenido nuestro objetivo general, pasamos a describir la discusión correspondiente a nuestro objetivo específico 1, de la siguiente manera:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

Sobre la regulación del convenio de integración y sus implicancias en la prescripción extintiva de pagarés incompletos, es preciso señalar todos los entrevistados manifestaron que el convenio de integración, como institución jurídica, no se encuentra definido en nuestro ordenamiento jurídico y tampoco se precisan sus características o los límites para su aplicación, como se expresa en nuestro supuesto jurídico específico 1; pero, vale decir que estos convenios de integración deben ser entendidos como los acuerdos adoptados por acreedor y deudor para el llenado de los títulos valores incompletos. No obstante, en el

derecho comparado descrito en nuestro marco teórico se ha manifestado que dicho convenio es equiparable al pacto de completamiento, así, en virtud a lo regulado por el Código de Comercio de Uruguay, el Decreto Ley 14.701 (DLTV), Decreto Ley 14.412 y sus modificatorias, se define como un acuerdo de voluntades que va a generar obligaciones entre las partes que intervienen y debe ser entendido como un acto jurídico independiente al título valor. En esa misma línea de ideas, cabe expresar que dichos pactos de completamiento deben estar suscritos por el legítimo tenedor y el título valor debe ser completado según los acuerdos arribados, antes de ser ejecutados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4° del DLTV. Por otra parte, en nuestro marco teórico también se ha señalado que, al convenio de integración o pacto de completamiento, puede denominarse acuerdo de integración, cuya definición, en la normativa argentina, es similar a la mencionada precedentemente, agregando que, al no existir regulación expresa, sus efectos están supeditados a las normas del Derecho Civil.

En nuestro ordenamiento jurídico, las normas que regulan los acuerdos adoptados para el llenado de pagarés incompletos son: La Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, específicamente en los artículos 10° y 19° literal e); en La Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 56° literal d) y en el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, en su artículo 690-D numeral 2. Sin embargo, como lo han mencionado todos los entrevistados, ninguno de los artículos en mención hace referencia a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos; es decir, nuestra regulación actual no es adecuada para resolver las controversias que versan sobre lo antes descrito.

Según lo referido en nuestros antecedentes nacionales, a nivel administrativo y judicial, existe una afectación patrimonial para los usuarios, debido a la deficiente regulación de las normas del sistema financiero, privilegiando al acreedor por encima del deudor. Precizando que esta desigualdad de derechos entre ambas partes nace por parte del Estado desde el preciso instante de poner en vigencia las normas sobre el régimen económico. A su vez, en el derecho comparado colombiano, se manifiesta que las instrucciones descritas en el convenio de integración presenta problemas en cuanto a su regulación, debido a que no existe alguna formalidad a tener presente por órganos jurisdiccionales durante el desarrollo de los procesos judiciales, de igual manera, expresa que existe deficiencias cuando el título valor incompleto ha sido puesto en circulación, puesto que se genera la figura del tercero de buena

fe. Del mismo modo, en la legislación civil y comercial ecuatoriana se detalla que existen situaciones en las cuales se percibe la precaria regulación de los efectos de los títulos valores incompletos, lo que a su vez hace evidente que se originen perjuicios durante el desarrollo de los procesos ejecutivos, vulnerando de esta manera la seguridad jurídica.

Por su parte, debemos poner en manifiesto que no debe existir preferencia en la aplicación de las normas que regulan el derecho del consumidor sobre las normas del derecho cambiario; ya que, como lo han expresado los entrevistados, tanto las nociones generales, como las nociones específicas, deben estar regulados en La Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, específicamente en la Sección Segunda y Sección Octava del Primer Libro; por ende, su aplicación debe primar antes que cualquier otra norma, sin que ello implique la afectación de las disposiciones procesales respecto al proceso único de ejecución regulado en los Capítulos I y II del Título V de la Sección Quinta del TUO del Código Procesal Civil. Además, también discrepamos con lo manifestado por dos de los diez entrevistados, quienes manifiestan la innecesaria regulación del convenio de integración y sus implicancias en la prescripción extintiva de pagarés incompletos, debido a que se dejaría un vacío legal que seguiría siendo aprovechado los acreedores en desmedro de los deudores sobre las obligaciones cambiarias asumidas mediante dichos pagarés incompletos, tal como se verifica en el análisis jurisprudencial del Expediente N° 00358-2017-0-1801-JP-CI-03, en el cual el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima declara infundada la excepción de prescripción extintiva formulada por la ejecutada, la cual se sustenta en el artículo 2001° numeral 1 del Código Civil, expresando en el quinto considerando del auto final que el artículo 96° de la Ley de Títulos Valores dispone un plazo de 3 años para hacer valer la acción cambiaria directa.

En suma, respecto a nuestro objetivo específico 1 que es analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, se advierte que en nuestro ordenamiento jurídico no existe regulación expresa sobre el convenio de integración, no obstante, dicho documento debe ser entendido como los acuerdos adoptados por el acreedor y el deudor para el llenado de los pagarés incompletos. Ahora bien, considerando los resultados obtenidos por los entrevistados, el análisis jurisprudencial del Expediente N° 00358-2017-0-1801-JP-CI-03, la interpretación de las definiciones de Benglian (s/f), Bado & López (2016, p. 60-61) y Paolantonio & Bergel (1997, p.247), así como también, el trabajo previo nacional de Montesinos (2014) y trabajos

previos internacionales de Giraldo (2011), Bustamante (2014) y López (2016), se corrobora nuestro supuesto jurídico 1, habiendo obtenido que lo normado sobre dichos acuerdos en la Ley de Títulos Valores, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y en el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil no es suficiente para resolver las controversias suscitadas respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de dichos títulos valores.

Finalmente, luego de haber corroborado nuestro supuesto específico 1 y alcanzado nuestro objetivo específico 1, pasamos a describir la discusión correspondiente a nuestro objetivo específico 2, de la siguiente manera:

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

Al respecto, todos los entrevistados manifestaron que no existen criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, además, dos de ellos, precisaron que, en la práctica jurídica, los órganos jurisdiccionales resuelven los casos según los medios probatorios ofrecidos en la etapa correspondiente de cada proceso. En ese sentido, es pertinente señalar que en derecho comparado colombiano, aplicado perfectamente para efectos de nuestra investigación, existen contradicciones jurisprudenciales y doctrinarias en los casos de títulos valores incompletos presentes puestos a ejecución, los cuales deben ser considerados en nuestra realidad jurídica, a fin de evitar futuros conflictos entre las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes para conocer los procesos de obligación de dar suma de dinero incoados por la falta de pago de los pagarés incompletos. Asimismo, resulta imperativo tratar de uniformizar los criterios adoptados por los juzgados sobre las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, a fin de causar seguridad jurídica entre las partes procesales, tal como lo han referido nuestros entrevistados.

Cabe precisar que, según lo descrito en el proceso de obligación de dar suma de dinero recaído en el Expediente N° 02405-2016-0-3208-JP-CI-02, el Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita, pese a que la parte ejecutada hace mención a los artículos sobre los pagarés incompletos, dichos argumentos jurídicos no fueron tomados en cuenta por el juzgado al

momento de resolver, por el contrario, señaló que en el proceso de ejecución no era necesario acreditar el origen de la obligación contenida en el pagaré incompleto, en atención al principio de literalidad. Es decir, al no existir una norma que regule adecuadamente lo concerniente al convenio de integración, ni jurisprudencia sobre sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, el juzgado resuelve, únicamente, con los medios probatorios que las partes ingresan al proceso y se tramita de manera célere, sin revisión del título valor de manera que pueda advertir el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el acreedor y el deudor.

Estamos de acuerdo con lo expresado por los entrevistados sobre la necesidad de establecer criterios uniformes en los Juzgados de Paz Letrado a fin de resolver las controversias suscitadas por el convenio de integración cuando afecta a la prescripción extintiva de los pagarés incompletos. Cada uno de ellos menciona que debe buscarse resolver las causas en el menor tiempo posible, con base en el principio de economía procesal, que exista la igualdad entre las partes durante el trámite del proceso, la seguridad jurídica y la confianza en el Poder Judicial para una correcta administración de justicia.

En consecuencia, sobre nuestro objetivo específico 2 que es identificar los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero, considerando los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos, a saber, las entrevistas y el análisis jurisprudencial del Expediente N° 02405-2016-0-3208-JP-CI-02, así como también el trabajo previo internacional de Gallego (2018), se tiene que, no existen criterios uniformes por parte de los Juzgados de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos judiciales de obligación de dar suma de dinero que se tramitan en la vía del Proceso Único de Ejecución. No obstante, los órganos jurisdiccionales resuelven las causas conforme a los medios probatorios ofrecidos por las partes procesales, corroborando de dicha manera lo que se describe en nuestro supuesto jurídico específico 2.

V. CONCLUSIONES

Primero: Se concluye que se ha conocido, con base en nuestras entrevistas aplicadas, la revisión de nuestros antecedentes, la interpretación de nuestro marco teórico, el análisis jurisprudencial y la metodología utilizada en la presente investigación, que las implicancias del convenio de integración, desde una perspectiva pragmática, tienden a entrapar los efectos de la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en cuanto a la fecha de vencimiento, afectando lo regulado por el artículo 1990° del Código Civil, a saber: “El derecho de prescribir es irrenunciable. Es nulo todo pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción”. Asimismo, generan un menoscabo en la esfera patrimonial de los ejecutados a través del registro de las obligaciones insolutas en las centrales de riesgo, Cámara de Comercio de Lima y Registro de Deudores Judiciales Morosos. Es decir, tal como se ha descrito en la discusión sobre nuestro supuesto jurídico general, según las entrevistas efectuadas a los especialistas en la materia y el análisis de los expedientes sobre cobro indebido de pagarés incompletos, se genera situaciones arbitrarias para los deudores.

Segundo: Se concluye que se ha analizado, con base en nuestras entrevistas aplicadas, la interpretación de nuestro marco teórico, en el análisis jurisprudencial, la revisión de nuestros antecedentes, y la metodología utilizada en la presente investigación, que la actual regulación del convenio de integración, a saber, los artículos 10° y 19° la Ley N° 27287, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del TUO del Código Procesal Civil, no contemplan lo concerniente a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos. Tampoco existe una definición expresa, características o límites para su aplicación; únicamente señalan que son acuerdos adoptados para el llenado de los pagarés incompletos, conforme se ha señalado al detalle en el punto de las discusiones y que ha corroborado el supuesto jurídico específico 1.

Tercero: Se concluye que se ha identificado, con base en nuestras entrevistas aplicadas, en el análisis jurisprudencial, la revisión de nuestros antecedentes, la interpretación de nuestro marco teórico y la metodología utilizada en la presente investigación, que en nuestro sistema jurídico nacional no existen criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos, porque, en la práctica judicial, los jueces resuelven las controversias en atención a los recaudos obtenidos de ambas partes procesales, motivando los mandatos de ejecución en los artículos 96° de la Ley de Títulos Valores y el artículo 688° del Código

Procesal Civil, conforme se desarrolló en la discusión correspondiente a nuestro supuesto jurídico específico 2.

VI. RECOMENDACIONES

Luego de haber expresado nuestras conclusiones y como parte final de la presente investigación, existe la imperiosa necesidad de proponer nuestras recomendaciones, a fin de dar solución a la problemática suscitada que es materia de nuestra investigación, tal como se describen a continuación:

Primero: Se recomienda evitar la vulneración del artículo 1990° del Código Civil, al verificarse el entrampamiento de los efectos de la prescripción extintiva de los pagarés incompletos a través del convenio de integración; así como también, evitar el menoscabo en la esfera patrimonial de los ejecutados ocasionado por las inscripciones en las entidades de riesgo e instituciones que registran las obligaciones cambiarias insolutas, a través de la aplicación de los mecanismos procesales regulados por el Código Procesal Civil.

Segundo: Se recomienda regular el convenio de integración en el artículo 10° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, estableciendo su definición, las características para su validez o los límites para su aplicación. Además, modificar el numeral 4 del artículo en mención, de tal manera que los requisitos y obligaciones contenidas en los títulos valores incompletos, incluidos los pagarés, puedan completarse hasta los 3 años computados desde su fecha de emisión o según el cronograma de pagos establecido por los acreedores.

Tercero: Se recomienda la adopción de criterios uniformes sobre las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos, los cuales serán adoptados por los Juzgados de Paz Letrado al momento de resolver los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero que se sustentan en los mencionados títulos valores.

REFERENCIAS

- Alpiniano, J. (2008). *Títulos Valores. Régimen Global*. Bogotá: Editorial Temis.
- Arias, F. G. (1999). *El Proyecto de Investigación: Guía para su elaboración (3ra. Edición)*. Caracas: Editorial Episteme C.A. / Orial Ediciones Caracas - Venezuela.
- Arias-Schreiber, M. (2000). *Exégesis del Código Civil 1984*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Baca, M. (s.f.). *Requisitos del objeto en el acto jurídico y las consecuencias de su inobservancia*. Obtenido de Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/27841/25160>
- Bado, V. S., & López, C. E. (2016). *Manual Básico de Derecho Comercial Derecho Cambiario y concursal*. Montevideo: Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
- Balliache, D. (2009). *Guía Unidad II: Marco Teórico*. Obtenido de Universidad Nacional de San Juan: http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/comunicacion/seminarionuevastecnologias/wp-content/uploads/2015/06/02_Marco-teorico.pdf
- Barandiarán, J. L. (1999). *Acto Jurídico*. Lima: Gaceta Jurídica Editores S.R.L.
- Beaumont, R. (1973). *El Aval y la Fianza en los Títulos Valores*. Obtenido de Revista Jurídica.
- Beaumont, R. (2000). *Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores*. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- Beltran, J. A., & Campos, H. A. (2009). Breves apuntes sobre los presupuestos y elementos del negocio jurídico. *Derecho & Sociedad Asociación Civil*, 198-211.
- Benglian, M. E. (s/f). *Pacto de Completamiento*. Obtenido de <https://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.derechocomercial.edu.uy//PubMB.htm&ved=2ahUKEwj6n8PKvobeAhVEjZAKHVjbBAsQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3HsfFXHJDVxj8e-tEnq8RF>
- Bernal, C. (2010). *Métodos de la Investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Bogotá: Pearson Educación.
- Bustamante, M. M. (2014). La utilización de la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, y la necesidad de incorporar disposiciones normativas en la legislación civil y comercial ecuatoriana, con la finalidad de evitar los perjuicios que se ocasionan a las partes. Loja, Ecuador: Carreca de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.
- Calderón, A. (17 de junio de 2016). *Los principios que rigen los Títulos Valores*. Obtenido de Gaceta Laboral. Capacitaciones al día.: <http://gacetalaboral.com/los-principios-que-rigen-los-titulos-valores/>
- Cárdenas, T. O. (2017). Los títulos valores. *Jurídica Suplemento de análisis legal de El Peruano*, 8.

- Carrasco, H. (2008). Comentario jurisprudencial en torno al cómputo del plazo de prescripción en pagarés con cláusula de aceleración. *Revista de Derecho-Universidad Católica del Norte* 15(1), 205-218.
- Carrasco, S. (2009). *Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. Lima: San Marcos.
- Castillo, C. M. (2016). El arbitrario accionar de las entidades bancarias en los procesos judiciales de ejecución instaurados para el cobro de pagarés emitidos incompletos. Lima, Perú: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco.
- Castillo, E., & Vásquez, M. L. (2003). El rigor metodológico en la investigación cualitativa. *Colombia médica*, 164-167.
- Cortés, G. (1997). Confiabilidad y Validez en estudios cualitativos. *Educación y Ciencia Nueva época Vol. 1 No. 1 (15)*, 77-82.
- Cuñat, R. J. (2007). *Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al estudio del proceso de creación de empresas*. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2499458.pdf>
- Cusi, A. E. (24 de mayo de 2014). *Estructura del Acto Jurídico*. Obtenido de Blogger: <http://andrescusi.blogspot.com/2014/05/estructura-del-acto-juridico-andres.html?m=1>
- Cuzco, I. S. (Junio de 2010). *Aplicación de Documentos Mercantiles: Letra de Cambio, Pagaré y Cheque*. Obtenido de Actualidad Empresarial N° 209: http://aempresarial.com/web/revitem/9_11150_29086.pdf
- De la Puente, M. (2003). *El contrato en general. Tomo I*. Lima: Palestra Editores.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Londres: Sage.
- Díez-Picazo, L. (1999). *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I*. Madrid: Editorial Civitas S.A.
- Escuti, I. (2013). *Títulos de Crédito, Letra de cambio, Pagaré y Cheque*. Buenos Aires: Astea. Segunda Edición.
- Fernández, G. (1984). *Metodología de la Investigación*. Obtenido de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45455784/metodologia_investigacion.pdf
- Gallego, H. A. (2018). Aproximación a la teoría de la integración abusiva del título valor en blanco o con espacios en blanco. Medellín, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias jurídicas de la Universidad Pontificia Bolivariana.
- Gallo, P. (2006). *Diritti privato*. Torino: Giappichelli Editore.
- Gamboa, M. Y. (2017). El secuestro conservativo y el aseguramiento de las obligaciones contenidas en los títulos valores, en vía causal. Trujillo, Perú: Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego.

- Garrigues, J. (1981). *Curso de Derecho Mercantil. Tomo I*. México: Editorial Porrúa.
- Giraldo, R. D. (2011). Problemas comunes que afronta el acreedor en un proceso ejecutivo de título valor en relación con las instrucciones y/o autorizaciones de llenado de espacios en blanco. Pereira, Colombia: Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira.
- Gómez, D. R., & Roquet, J. V. (2001). *Metodología de la investigación*. Cataluña: Universitat Oberta de Catalunya.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). *Effective evaluation: improving the usefulness of evaluation result drought responsive and naturalist approach*. Hoboken: Jossey-Bass Publishers.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación 6ª Edición*. México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Kant, I. (1998). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Buenos Aires: Editorial Eudeba.
- Lalaguna, E. (1972). La libertad contractual. *Revista de Derecho Privado Vol. II*, 883.
- Lama, H. (2013). *Garantías en los Títulos Valores*. Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6-7, N° 8 y N° 9.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Londres: Sage.
- López, N. R. (2016). *Pagaré de Consumo*. San Salvador de Jujuy, Argentina: Universidad Empresarial Siglo Veintiuno.
- Martínez, C. (2012). *El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias*. Obtenido de Scielo - Scientific Electronic Library Online: https://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf&ved=2ahUKEwie1Ind_czbAhWKhJAKHa_hCiUQFjABegQIBhAB&usg=AOvVaw3GttzWtt5U6h7cVj4t0V_U
- Mejía, J. (2000). *El Muestreo en la Investigación Cualitativa*. Obtenido de Revistas Investigación UNMSM: <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/viewFile/6851/6062>
- Mellardo, M. (1995). *La fianza en el Derecho foral español. El derecho interregional. Tratado de Garantías en la Contratación Mercantil. Tomo I*. Editorial Civitas S.A., Primera Edición.
- Montesinos, J. (2014). Ejecución de títulos valores dados en garantía y el abuso del derecho en el sistema financiero. Puno, Perú: Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano.
- Montoya, U. (1982). *Comentarios a la Ley de Títulos Valores*. Lima: Editorial Desarrollo.
- Montoya, U. (2005). La prescripción y caducidad en la Ley de Títulos Valores. *Revista Jurídica "Docentia et Investigatio" Facultad de Derecho y Ciencia Política U.N.M.S.M. Vol. 7, N° 2*, 17-24.

- Northcote, C. (2009). *Reglas aplicables para la emisión de títulos valores incompletos*. Obtenido de Actualidad Empresarial N° 181: http://aempresarial.com/web/revitem/41_9466_50176.pdf
- Northcote, C. (2011). *La Prescripción y la Caducidad*. Obtenido de Actualidad Empresarial N° 225: http://aempresarial.com/servicios/revista/225_41_AUKQLRVCQPWUZWSCLSN OQHOAFHKAJCKWKWHHAHZVKPLHJKEBNPUB.pdf
- Northcote, C. (setiembre de 2015). *¿Cómo funciona el cobro de los títulos*. Obtenido de Actualidad Empresarial N° 334: http://www.aempresarial.com/web/revitem/41_18099_78053.pdf
- Paolantonio, M., & Bergel, S. (1997). Cuestiones probatorias en derecho cambiario. *Revista de Derecho Privado y Comunitario N° 14 de la Universidad de Buenos Aires*, 236-271.
- Pineda, B., De Alvarado, E. L., & De Canales, F. (1994). *Metodología de la investigación, manual para el desarrollo de personal de salud*. Washington: Organización Panamericana de la Salud.
- Ramos, C. E. (25 de junio de 2008). *Teoría General de los Títulos Valores*. Obtenido de Boletín Virtual de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista: http://boletinderecho.upsjb.edu.pe/articulos/Titulos_Valores.doc
- Roca, S., & Céspedes, E. (2011). La Ley y las Prácticas de Protección al Consumidor en el Perú. *Gestión y Política Pública*, 20(2), 485-522.
- Rodríguez, C., Lorenzo, O., & Herrera, L. (2005). Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades*, 133-154.
- Rodríguez, H. (2015). Apuntes Básicos en materia de títulos valores (notas relacionadas con el Modelo Legal Costarricense). *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*, 67-109.
- Rodríguez, M. (2005). Abuso de derecho por parte de las empresas del sistema financiero en la ejecución de títulos valores dados en garantía Puno-2004. Puno, Perú: Escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional del Altiplano.
- Roque, L. G. (2008). Teoría del Acto Jurídico y Concepto del Negocio Jurídico. *Revista Oficial del Poder Judicial*, 55-72.
- Saavedra, R. (10 de enero de 2018). *Títulos valores incompletos. ¿Qué hacer?* Obtenido de legis.pe: <http://legis.pe/titulos-valores-incompletos-que-hacer/>
- Salamanca, A. B., & Crespo, C. M. (2007). *El muestreo en la Investigación Cualitativa*. Obtenido de CEPPIA S.A.S.: https://ceppia.com.co/Documentos-tematicos/INVESTIGACION-SOCIAL/MUESTREO-INV-CUALITATIVA.pdf&ved=2ahUKEwie1Ind_czbAhWKhJAKHa_hCiUQFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw2uBX3BvGluTYQq8kyUkzRL

- Sánchez, F. (1969). *Instituciones de derecho mercantil. Tomo II*. Editorial Clares. Valladolid.
- Silvina, M. (04 de abril de 2011). *La formulación del problema de investigación: preguntas, origen y fundamento*. Obtenido de Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata: <http://perio.enlp.edu.ar/seminario/bibliografía/Silvina-Souza11.pdf>
- Strauss, A. L., Corbin, J., & Simmerman, E. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Taboada, L. (1988). Causales de nulidad del acto jurídico. *Themis* 11, 71-76.
- Taboada, L. (1999). *La teoría del acto jurídico y el concepto del negocio jurídico dentro del Código Civil Peruano*. Obtenido de Academia de la Magistratura: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_civil_proce_civil/modu_dere_civil/41-85.pdf
- Taboada, L. (2002). *Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato*. Lima: Editora Jurídica Grijley.
- Torres, A. (2001). *Acto Jurídico 2da. Edición*. Lima: Ideosa.
- Uría, R. (1992). *Derecho Mercantil. Décimonovena Edición*. Madrid: Ediciones Jurídicas S.A.
- Valdebenito, J. H. (2010). Compeltamiento de la letra de cambio en blanco en la legislación chilna. Valdivia, Chile: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.
- Vargas, Z. (2009). La investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Revista de Educación* 33(1), 155-165.
- Vicent, F. (1995). *Introducción al estudio de las garantías personales en el ordenamiento español*. En: Tratado de garantías en la contratación mercantil. Tomo I. Editorial Civitas S.A., Primera Edición.
- Vidal, F. (1990). *Tratado del Derecho Civil. Tomo I*. Lima: Universidad de Lima.
- Vidal, F. (2009). Entorno a la Prescripción Extintiva. *Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, N° 5*, 229-236.
- Vivante, C. (1936). *Tratado de Derecho Mercantil. Volumen III*. Madrid: Editorial Reus.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA	
Título del Trabajo de Investigación	Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017.
Problema General	¿Cuáles son las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?
Problema Específico 1	¿De qué manera se regula el convenio de integración respecto a las implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en nuestro ordenamiento jurídico?
Problema Específico 2	¿Cuáles son los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?
Supuesto Jurídico General	Las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima son: la desnaturalización de la prescripción extintiva, la recuperación indebida de los créditos, la disminución en la esfera patrimonial de los ejecutados y el perjuicio en la información crediticia de los ejecutados.
Supuesto Jurídico Específico 1	No existe regulación del convenio de integración sobre sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente el convenio de integración se regula de manera genérica en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos

	Valores, el artículo 56° literal d) de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.
Supuesto Jurídico Específico 2	No existen criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos. Los Jueces se limitan a resolver con los recaudos que las partes procesales presentan en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.
Objetivo General	Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.
Objetivo Específico 1	Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.
Objetivo Específico 2	Identificar los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.
Enfoque	Cualitativo
Diseño de Investigación	Teoría fundamentada.

Muestra	<p>La muestra de la presente investigación está conformada por la comunidad jurídica que a continuación se describe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 abogados especializados en Derecho Civil y Comercial. • 5 Jueces de Paz Letrado de Lima.
Categorías	<p>C1: Convenio de integración.</p> <p>C2: Prescripción extintiva de pagarés incompletos.</p>

Categorías	Definición Conceptual	Subcategorización
Convenio de Integración	Es aquel documento en el cual se van a plasmar los acuerdos para el llenado del pagaré incompleto, los cuales deberán ser respetados para exigir el cumplimiento de la obligación contenida en dicho título valor.	<ul style="list-style-type: none"> - Acto jurídico. - Autonomía de la voluntad.
Prescripción Extintiva de Pagarés Incompletos	Es la institución jurídica mediante la cual se extinguen las acciones cambiarias derivadas del pagaré incompleto.	<ul style="list-style-type: none"> - Artículo 1990° del Código Civil (nulidad). - Pagarés no sujetos a protesto.

Técnica de recolección de datos	<p>Entrevistas – Guía de entrevista.</p> <p>Análisis documental – Guía de análisis documental.</p>
--	--

Anexo 2: Validación de Instrumentos



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop, Pedro Pablo
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Damián Acuña, Johan Alberto

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

S/

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 29 de Noviembre del 2018

PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 CAL 17951
 ABOGADO
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. Telf.: 98232657
09803311

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop, Pedro Pablo
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Damián Acuña, Johan Alberto

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. PRESENTACIÓN	Responde a la formalidad de la investigación.													✓
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													✓
3. ACTUALIDAD	Considera información actualizada, acorde a las necesidades reales de la investigación.													✓
4. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.													✓
5. COHERENCIA	Existe coherencia entre los objetivos y supuestos jurídicos.													✓
6. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.													✓
7. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													✓

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

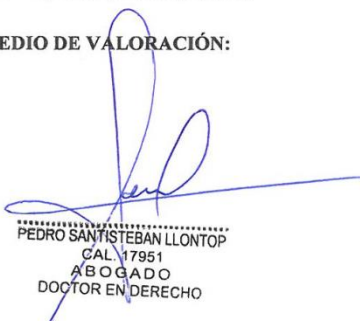
- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

55 %

Lima, 29, Nov. de 2018


 PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 CAL. 17951
 ABOGADO
 DOCTOR EN DERECHO

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No..... Telf.: 98327863
09803311

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: WENDEL MIRANDA ELLER PEQUENO
 1.2. Cargo e institución donde labora: ACADEMICO
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Damián Acuña, John Alberto

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 30 de Noviembre del 2018


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09940210 Telf. 992303480

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: WENZEL MINANDA ELISEO S.
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV.
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Damián Acuña, Johan Alberto

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. PRESENTACIÓN	Responde a la formalidad de la investigación.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Considera información actualizada, acorde a las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												✓	
5. COHERENCIA	Existe coherencia entre los objetivos y supuestos jurídicos.												✓	
6. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
7. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95 %

Lima, 30 de Nov. de 2018


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09940210 Telf. 992307480

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Rodriguez, Figueroa, Jose Jorge
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente Univ
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Johan Alberto Domínguez Acuña

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Se

96 %

Lima, 27 de Nov del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 5727162 Telf.: 972285638

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Rodriguez Figueroa, Jose Jorge
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Johan Alberto Domian Acevedo

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. PRESENTACIÓN	Responde a la formalidad de la investigación.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Considera información actualizada, acorde a las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												✓	
5. COHERENCIA	Existe coherencia entre los objetivos y supuestos jurídicos.												✓	
6. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
7. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

96 %

 Lima, 29 de Nov de 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

 DNI No. 10729462 Telf.: 992 225638

Anexo 3: Guía de Entrevista

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Entrevistado:

Cargo/Profesión/Grado Académico:

Institución:

Lugar: **Fecha:** **Duración:**

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo

690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

Objetivo específico 2

Identificar los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

Firma del entrevistador

Firma del entrevistado

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Entrevistado: ALFREDO EXEQUIEL SOSAYA GONZALES

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADO

Institución: SOSAYA, NATTA & SHINABUKURO ABOGADOS SAC

Lugar: MIRAFLORES Fecha: 07/01/18 Duración: 30 MINUTOS

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

ATENTA CONTRA LA NATURALEZA PROPIA DE LA PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE LA ACCIÓN, NO SÓLO A NIVEL DE LAS ACCIONES CARGARIAS,
SINO TAMBIÉN A NIVEL GENERAL. PUESTO QUE NO EXISTE UN PUNTO DE
PARADA PARA EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, POR LO QUE, PARA LA PRODUCCIÓN
DE SUS EFECTOS.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PORQUE LOS ACREEDORES APROVECHAN LA AUTORIZACIÓN EFECTUADA POR LOS
DEUDORES, PARA QUE PUEDAN COLOCAR, DE MANERA ILÍCITA, LA FECHA

DE VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS. ERGO, LA PRODUCCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS OBLIGACIONES PATRIARCALES ESTÁN SUJETAS A TAL DECISIÓN, Y NO AL DECURSO DEL TIEMPO PASADO.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA AFECTACIÓN PATRIARCALE ANTE UNA SENTENCIA QUE DECIDE EN CONTRA DE LOS DEUDORES, LA DECLARACIÓN DE DEUDOR JUDICIAL POR LOS, LA AFECTACIÓN DE SU RENDIMIENTO CREDITICIO Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PAGOS Y PAGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN NO ESTÁ REGULADA EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO. ÚNICAMENTE SE DESCRIBEN COMO ACUERDOS ADOPTADOS PARA EL LLENADO DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS. POR TANTO, LA INFORMACIÓN ES ESCASA SOBRE DICHOS ACUERDOS E INSUFICIENTE PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS ENTRE LOS SUJETOS DE LAS RELACIONES PATRIARCALES.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

LAS NOTAS DESCRITAS SOBRE EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN, TAL COMO ESTÁN REDACTADAS, NO PUEDE SER APLICADAS EN LA PRESCRIPCIÓN DE LOS PAGARÉ INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

LA DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, IMPLICANCIAS Y LÍMITES PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN DEBERÍA ESTAR REGULADO EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL LIBRO PRIMERO DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES. ASIMISMO, EN LA SECCIÓN QUINTA DEL MISMO LIBRO, DEBERÍA REGULARSE EL CÁLCULO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN UN PAGARÉ INCOMPLETO.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

A NIVEL PRÁCTICO, LOS JUECES RESUELVEN SEGÚN LOS MEDIOS PROBATORIOS INTERCADOS AL PROCESO. NO EXISTEN CRITERIOS UNIFORMES SOBRE LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉ INCOMPLETOS.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

EN LA VÍA EJECUTIVA, FORMULARÍA LA CONTRADICCIÓN SOBRE EL PAGARÉ INCOMPLETO Y LA TALHA DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN POR LA ALIENACIÓN. ASIMISMO, DE MANERA PARALELA Y EN VÍA DE ACCIÓN, INTERPONDRIÁ UNA DEMANDA DE ANULACIÓN DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN, SEGÚN LO PRECISADO POR EL ARTÍCULO 1970° DEL CÓDIGO CIVIL.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

PERQUE PERMITIRÍA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE VERSEAN SOBRE DICHA MATERIA, SIN DILACIONES INDEBIDAS, LO QUE A SU VEZ GENERA UN DESARROLLO LABORAL DE LOS JUZGADOS COMPETENTES PARA TRATAR LOS PROCESOS. ADICIONALMENTE, ESTABLECE UN AMBIENTE DE JUSTICIA, CONFORME AL ARTÍCULO III DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CPC.



Firma del entrevistador



Alfredo Sosa Gonzales
ABOGADO
C.A.L. N° 31802

Firma del entrevistado

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: "Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017".

Entrevistado:ANGEL ERNESTO MAURICIO MINAYA.....

Cargo/Profesión/Grado Académico:ABOGADO.....

Institución: 10° JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SMP.....

Lugar:SMP..... Fecha: 01/11/18..... Duración: 30 minutos.....

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

NO EXISTEN IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CON
RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS,
TODA VEZ QUE SON INSTITUCIONES JURÍDICAS DISTINTAS.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN NO PUEDE COLISIONAR
CON EL ARTÍCULO 1990° DEL CÓDIGO CIVIL.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRETESTOS Y NOTAS
Y EN EL REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES PROSOCOS.
ASIMISMO, EL RIESGO DE VER AFECTADAS SUS CUENTAS,
PROPIEDADES MUEBLES O INMUEBLES A TRAVÉS DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES SOLICITADAS POR EL ACREEDOR.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

DICHAS NOTAS HACEN REFERENCIA A LOS ACUERDOS ADOPTADOS
PARA EL LLENADO DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS, NO COMO CONVENIOS
DE INTEGRACIÓN. SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SEÑALA QUE DEBEN
SER RESPETADOS PARA LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS
PAGARÉS INCOMPLETOS EN SEDE JUDICIAL.



5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

DICHA REGULACIÓN NO PERMITE APLICAR EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN DEBE SER ENTENDIDO COMO LOS ACUERDOS ADOPTADOS, ES DECIR, ACTOS JURÍDICOS. POR CONSIGUIENTE, NO TIENE UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO HAY CRITERIOS UNIFORMES ADOPTADOS POR LOS JUECES DE PAZ LETRADO.



8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

TENDRÍA QUE FORMULAR LA CONTRADICCIÓN RESPECTIVA SOBRE EL PAGARÉ INCOMPLETO, LA TACHA POR NULIDAD O FALSIDAD DEL INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN Y LAS EXCEPCIONES PERTINENTES

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

SI BIEN ES CIERTO, LOS CRITERIOS UNIFORMES DE LOS JUZGADOS SON RELEVANTES POR MUCHAS RAZONES, COMO POR LA Celeridad EN LOS PROCESOS. SOBRE LA CONTROVERSIDAD EN TRAMITACIÓN NO ES NECESARIO ESTABLECER ESTOS CRITERIOS UNIFORMES

Firma del entrevistador

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
ANGEL ERNESTO MAURICIO MINAYA
ESPECIALISTA LEGAL
DECIMO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SMP
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Firma del entrevistado

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Entrevistado: BENITO ROBERTO VILLANUEVA KARO.....

Cargo/Profesión/Grado Académico: DOCTORADO EN DERECHO.....

Institución: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.....

Lugar: LIMA..... Fecha: 12/11/18..... Duración: 40 MINUTOS.....

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA AFECTACIÓN DEL CÁLCULO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CAMBIARIAS, YA QUE SE IMPIDE QUE LOS EFECTOS JURÍDICOS SE PRODUZCAN DENTRO DEL PLAZO DE LEY.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PORQUE EL DEUDOR AUMENTA AL ACREEDOR, PARA QUE ÉSTE, EN EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PUEDE COLECTAR LA FECHA DE

VENIMIENTO EN LOS PAGARÉS INCOMPLETOS ENTIDOS, IMPIDIENDO QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CARRIARIAS.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA AFECTACIÓN EN LA ESFERA PATRIMONIAL DE LOS DEUDORES CUANDO EL FALLO ES EN SU CONTRA Y QUEDA EJECUTORIA; ASÍ COMO TAMBIÉN, LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROTESTAS Y NOTAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil?

ES INCOMPLETA, INSUFICIENTE Y NO SE ADOPTA A NUESTRA REALIDAD NACIONAL. HAY QUE PARTIR PORQUE NI SIQUIERA SE ENCUENTRA DEFINIDA POR NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO, TAMPOCO DESCRIBE SUS LÍMITES O LA MANERA EN LA QUE DEBE USARSE AL INTENTO DE EJECUTAR LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

LOS ARTÍCULOS EN MENCIÓN NO ESTÁN DESARROLLADOS COMO PARA SER APLICADOS EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

LA DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS O REQUISITOS, LOS LÍMITES Y LOS EFECTOS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN, INCLUIDA SUS IMPLICANCIAS, DEBERÍAN ESTAR REGULADOS EN UN TÍTULO APARTE, DENTRO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL LIBRO PRIMERO DE LA LEY 27227. ASIMISMO, DEBE PREVERSE EL CÓRPO DE PLAZO PRESCRIPTIVO EN LA SECCIÓN OCTAVA DEL MISMO LIBRO EN DICHA NORMA.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO EXISTEN CRITERIOS UNIFORMES EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO SOBRE LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA

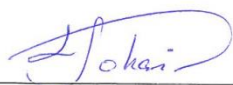
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

EN EL PROCESO EJECUTIVO, PRESENTARÍA UNA CONTRADICCIÓN SOBRE EL PAGARE
INCOMPLETO Y LA TACHA DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN POR CAUSAL DE NULIDAD.
ADemás, PRESENTARÍA UNA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE
LA ACCIÓN.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

POQUE SERVIRÍA COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA COHERENCIA
EN EL ORDEN JURÍDICO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SOBRE LAS
IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS.



Firma del entrevistador


BENITO R. VILLANUEVA HARG
ABOGADO
REG. EN ALABAMA

Firma del entrevistado

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: "Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017".

Entrevistado:ANA ABAD LEVANO.....

Cargo/Profesión/Grado Académico:ABOGADA.....

Institución:10° JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SLP.....

Lugar:SLP..... Fecha:01/11/18..... Duración:20 MINUTOS.....

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

IMPIDE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA
PRESCRIPCIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS
QUE LA REGULAN.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PORQUE LOS ACREEDORES SE ENCUENTRAN FACULTADOS POR LOS
DEUDORES, PARA PODER CONSIGNAR LA FECHA DE VENCIMIENTO EN

LOS PAGARÉS INCOMPLETOS, POR ENDE, CONSIDERANDO QUE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CATASTRARIAS SE CONTATA DESDE QUE LA OBLIGACIÓN SE VUEVE EXIGIBLE, SUS EFECTOS SE SUPEDITAN A LA DECISIÓN DEL ACREEDOR.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROTESTOS Y NOTAS, LA DISTRIBUCIÓN PATRIMONIAL DEL DEUDOR ANTE UNA SENTENCIA QUE EN CONTRA, Y LA DECLARACIÓN DE DEUDOR JUDICIAL NOTARIO.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

DEBE ENTENDERSE AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN COMO ACUERDOS DE LAS PARTES PARA EL LLENADO DE TÍTULOS VALORES INCOMPLETOS. EN DISE SENTIDO, SU REGULACIÓN EN LAS NOTAS DESCRITAS, SE LIMITA A SEÑALAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA CLÁUSULA, PERO NO SEÑALA SUS CARACTERÍSTICAS O LOS LÍMITES PARA SU APLICACIÓN.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

TAL COMO SE ENCUENTRAN REDACTADOS, NO PUEDE APLICARSE EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

TODAS LAS GENERALIDADES DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN, INCLUIDAS SUS IMPLICANCIAS EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS, DEBERÍAN ESTAR REGULADAS EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL LIBRO PRIMERO DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO EXISTEN CRITERIOS UNIFORMES POR PARTE DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

PRESENTARÍA UNA CONTRADICCIÓN BASADA EN LA INCIERTA DEL CONVENIO
DE INTEGRACIÓN Y DEL PAGARÉ INCOMPLETO, Y FORMULARÍA LA
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

PORQUE GENERA MAYOR SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA LAS PARTES PROCESALES
DE QUE EL PROCESO VA A SEGUIR UN TRÁMITE JUSTO, EN RAZÓN A LAS
DECISIONES QUE TIENEN EFECTOS CON ANTERIORIDAD POR LOS JUEGADOS
SOBRE DICHA CONTROVERSIA.



Firma del entrevistador


PODER JUDICIAL DEL PERU
ANA ALBAID DE VIANO
SECRETARIA JUDICIAL
JUEGO JUSADO DE PAZ LETRADO DE SUMA Y LOS DIUNOS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Firma del entrevistado

**FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES**

Título: "Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017".

Entrevistado: NEELY VICTORIA LEON HUACHANI

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADA

Institución: FINANCIERA PROEMPRESA S.A.

Lugar: SAN BORJA **Fecha:** 28/11/2018 **Duración:** 20 minutos

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN NO PUEDE TENER IMPLICANCIAS POSITIVAS O NEGATIVAS EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS, YA QUE TIENE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

NO ES POSIBLE QUE EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN, COMO ACUERDOS PRIVADOS, PUEDA COLISIONAR CON LO REGULAR

EN EL ARTÍCULO 1990° DEL CÓDIGO CIVIL.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROTESTOS Y NOTAS DESDE QUE SE INICIA LA DEMANDA, ADemás, LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES MOROSOS Y LA ORDEN DE TRASAR MEDIDAS CAUTELARES QUE AFECTEN SU ESPERA PATRIMONIAL.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN NO ESTÁ DEFINIDO POR NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO TAL. NO OBTANTE, SE MANTIENE COMO LOS ACUERDOS ADOPTADOS PARA EL LLEVADO DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS. EN ESTE SENTIDO, SE INTERPRETA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTOS JURÍDICOS.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

NO HAY MANERA DE INVOCAR DICHOS ARTÍCULOS PARA LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

LOS ACUERDOS ADOPTADOS PARA EL LLENADO DE LOS PAGARÉS
INCOMPLETOS, SE INTERPRETAN COMO SI FUERAN ACTOS JURÍDICOS,
POR LO QUE, NO DEBERÍAN SER REQUERIDOS EN OTRAS NORMAS
DEL SISTEMA JURÍDICO ACTUAL.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

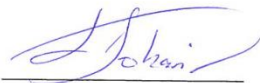
NO HAY CRITERIOS UNIFORMES DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO EN
CUANTO A LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

Como abogado de un sujeto deudor, presentaría una
contradicción basada en la causal correspondiente del artículo
670.º del Código Procesal Civil, y de ser el caso, presentaría
una excepción de prescripción extintiva de la acción.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

No es importante tener criterios uniformes sobre las implicancias
del convenio de integración en la prescripción extintiva de
pagarés incompletos en los procesos ejecutivos, ya que no
existe relación entre ambas figuras jurídicas.



Firma del entrevistador


Nery V. Leon Huachani
ABOGADA
Reg CAL 56864

Firma del entrevistado

**FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES**

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Entrevistado: ISABEL CARRASCO NIÑA

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADA

Institución: 10° JUZGADO DE PAZ LETRADO DE JRP

Lugar: STP **Fecha:** 02/11/18 **Duración:** 20 minutos

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

SE DESVIARÍA LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CARRERAS, TODA VEZ QUE NO EXISTE UN TÉRMINO INICIAL PARA SU CÓMPUTO.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PORQUE LOS DEUDORES FACILITAN A LOS ACREEDORES PARA QUE PUEDAN CUMPLIR DETERMINADOS EFECTOS, COMO LA FECHA DE VENCIMIENTO.

DE LOS PAGARÉS INCORRECTOS, PERMITIENDO QUE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CARRIARIAS, DEPENDAN DE LA VOLUNTAD DE DICHOS ACREEDORES.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA DECLARACIÓN DE SUEÑO JUDICIAL POROSO, EL RIESGO DE TRABAJO LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE EL ACREEDOR CONSIDERE, Y EL REGISTRO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROTESTAS Y FOLIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

LA REGULACIÓN DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN COMO ACUERDO PARA EL LLENADO DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS, ES DEFICIENTE Y NO PERMITE UNA APLICACIÓN CORRECTA DENTRO DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS CUANDO SON INVOCADOS POR LOS DEUDORES.



5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

NO SE PUEDEN APLICAR A LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE
LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA
DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS, DEBERÍAN ESTAR REGULADAS EN LA SECCIÓN
OCTAVA DEL PRIMER LIBRO DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES Y EN LA
SECCIÓN SEGUNDA DEL LIBRO SEGUNDO DE LA MISMA LEY.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO HAY CRITERIOS UNIFORMES PARA RESOLVER LAS IMPLICANCIAS DEL
CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE
PAGARÉS INCOMPLETOS.



8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

FORMULARÍA LA CONTRADICCIÓN SEGUN EL NUMERAL 9 DEL ARTICULO 230-D DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y UNA EXCEPCION DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA ACCION.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

POQUE SE CONCRETARIA EL PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL CONTEMPLADA EN EL ARTICULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, EN BENEFICIO DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, SUSTENTADOS EN LOS CONVENIOS DE INTEGRACION Y LOS PAGARES INCOMPLETOS.

Firma del entrevistador

ISABEL CARRASCO VILLA
ESPECIALISTA LEGAL
DECIMO JUZGADO DE PAZ URBANO DE SAN Y LOS OLIVOS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Firma del entrevistado

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: "Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017".

Entrevistado: CHRISTIAN E. HAMMER ARATA

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADO

Institución: ESTUDIO HAMMER ABOGADOS SAC

Lugar: MIRAFLORES Fecha: 15 NOV 18 Duración: 40 MINUTOS

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

NO PERMITE EL TOTAL DESARROLLO DE LOS EFECTOS DE LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CAMBIARIAS DESCRITAS
EN LA LEY DE TÍTULOS VALORES.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PORQUE EL ACREEDOR TIENE TODA LA POTESTAD DE DECIDIR SOBRE
LA EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CAMBIARIAS, POR TANTO DEBE

INICIO DEL DECURSO DE TIEMPO NECESARIO PARA QUE PRODUZCAN
LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SEÑALADAS EN LA
ORDEN PROCESAL, ANTE UNA SENTENCIA QUE RESUELVE EN CONTRA
DE LOS DEUDORES, LO CUAL AFECTARÍA SU ESFERA PATRIMONIAL. ADemás,
EL REPORTE NEGATIVO OTORGADO POR LAS CONTRACES DE RIESGO.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil?

LA: NORMAS DE NUESTRO SISTEMA JURÍDICO REGULAR LOS CONVENIOS DE
INTEGRACIÓN COMO ACUERDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGARÉS INCOMPLETOS, SIN
EMBARGO, NO DESCRIBEN LOS EFECTOS DE SU APLICACIÓN. SÓLO SEÑALAN QUE
DEBEN SER RESPECTADOS POR LOS ACREEDORES AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TÍTULOS VALORES EN SEDI JUDICIAL.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

DICHOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN APLICAR A LA PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE LOS TÍTULOS VÁLIDOS, EN GENERAL, DEBIRÍAN ESTAR
REGULADOS EN LA SECCIÓN OCTAVA DEL LIBRO PRIMERO DE LA
LEY DE TÍTULOS VÁLIDOS.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

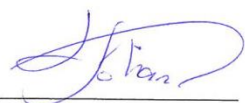
LOS JUÉCES DE PAZ LETRADO NO TIENEN CRITERIOS UNIFORMES
PARA RESOLVER SOBRE LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN
EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

FORMULARÍA LA CONTRADICCIÓN SEGÚN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 670-D
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL CONTRA EL PAGARÉ INCOMPLETO, LA TACHA
POR NOVIDAD DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN Y PRESENTARÍA UNA EXCEPCIÓN
DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

PORQUE EXISTIRÍA COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
LEGALES DEL DERECHO, ANTE EL VARIÓ LEGAL SOBRE LAS IMPLICANCIAS
DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE
PAGARÉS INCOMPLETOS EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS



Firma del entrevistador



Firma del entrevistado
ABOGADO
Reg. C.A.L. 27027

Christian E. Hernández Aranda
ABOGADO
Reg. C.A.L. 27027

**FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES**

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Entrevistado: ROCIO MARISOL CALLAKUI ROJAS

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADA

Institución: 10° JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SNP.

Lugar: SNP. **Fecha:** 02/11/18 **Duración:** 30 MINUTOS

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

ABRIDE EL CORTAPISO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS
ACCIONES OBLIGATORIAS. PORTANTO, AFECTA SU NATURALEZA JURÍDICA
.....
.....
.....

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PARQUE EXISTE UN ACUERDO ENTRE EL DEUDOR Y EL ACREDOR, PARA QUE
ESTE ÍTEM PUEDA COLGAR, CUANDO LO OREA CONVENCIONAL, LA FECHA DE

REGISTRAR EN EL PAGARÉ INCOMPLETO, A PARTIR DEL CUAL SE PUEDE
COMPUTAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CARRIARIAS, EN
CONSECUENCIA, SUS PROPIOS EFECTOS.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROTESTOS Y NOTAS Y
LA DECLARACIÓN DE DEUDER JUDICIAL FOROSO.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

NINGUNA DE LAS NOTAS DECRETAS DEFINE EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN.
TODAS SE REFIEREN A LOS ACUERDOS ADOPTADOS PARA EL LLEVADO DE LOS PAGARÉS
Y DE LOS TÍTULOS VALORES INCOMPLETOS, PERO NO DESCRIBEN LA MANERA
EN LA QUE DEBE SER APLICADA, TAMPOCO SUS LÍMITES O CARACTERÍSTICAS.



5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

LOS ARTÍCULOS NO TIENEN POSIBILIDAD DE SER APLICADAS A LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

SI NOS CEÑIMOS ERICTAMENTE A LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE
INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS,
DEBERÍA ESTAR REGULADO EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL LIBRO SEGUNDO
DE LA LEY 27282.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO EXISTEN CRITERIOS UNIFORMES EN LOS JUEGADOS DE PAZ
LETRADO.



8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

UNA CONTRADICCIÓN CON BASE EN LA MODALIDAD DEL PAGARÉ INCOMPLETO,
UNA TACHA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN POR LA MISMA CAUSAL Y UNA
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

PORQUE SE EVITARÍAN LAS DECISIONES CONTRADICTORIAS EMITIDAS POR
LOS JUECES DE PAZ LETRADO RESPECTO A LAS IMPLICANCIAS DEL
CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉ
INCOMPLETOS.

Firma del entrevistador

Firma del entrevistado

**FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES**

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Entrevistado: CLAUDIA PAOLA VARAS RUIZ

Cargo/Profesión/Grado Académico: MAESTRÍA EN DERECHO

Institución: BECLA BUSINESS CARGO EXPRESS E.I.R.L.

Lugar: CALLAO **Fecha:** 15/11/13 **Duración:** 30 MINUTOS

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

GENERA EL EXTINGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CARRIARAS DESCRITAS EN LA LUY DE TÍTULOS VALORES, YA QUE NO PERMITE EL INICIO DEL DECURSO DE TIEMPO.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

PORQUE EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN SUSCRITO POR EL DEUDOR, PERMITE QUE EL ACREEDOR SEÑALE CUALQUIER FECHA PARA QUE LAS

DELICACIONES CARTULARES SE VUELVAN EXIGIBLES, ES DECIR, EVITA EL INICIO DEL DECURSO DEL TIEMPO PARA QUE LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN SE PRODUCAN.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA DERIVACIÓN DE LA ESFERA PATRIMONIAL DE LOS DEUDORES A CAUSA DE UNA SENTENCIA EN CONTRA, UN REPORTE DE LAS PRÁCTICAS DE REGISTRO NEGATIVO PARA SOLICITAR CRÉDITOS Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES FLORES.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN DEBE SER ENTENDIDO COMO LOS ACUERDOS ADOPTADOS PARA EL LLENADO DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS. ENTONCES, LA ACTUAL REGULACIÓN DE DICHOS ACUERDOS EN LAS BORDAS DESCRITAS NO PRECISA SUS CARACTERÍSTICAS O LÍMITES, ES DECIR, ES INSUFICIENTE PARA TRATAR LAS CONTROVERSIAS GENERADAS ENTRE LOS ACREEDORES Y DEUDORES DE OBLIGACIONES PATRIMONIALES CARTULARES.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

NO PUEDEN SER APLICADAS EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE
LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

EL CONVENIO DE INTEGRACIÓN DEBE REGULARSE EN LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE
LA SIGUIENTE MANERA: EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL PRIMER LIBRO, TODO LO REFERENTE
A LOS ASPECTOS GENERALES, INCLUIDO SUS IMPLICANCIAS. EN LA SECCIÓN OCTAVA DEL
PRIMER LIBRO, EL CONCEPTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA. Y, EN CADA
TÍTULO VALOR DESCRITO EN EL SEGUNDO LIBRO, SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO EXISTEN CRITERIOS UNIFORMES DE LOS JUECES DE PAZ LETRADO, LAS
SENTENCIAS SE MOTIVAN SEGÚN LOS HECHOS PROBATORIOS QUE LAS PARTES

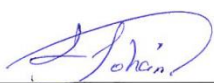
PUEDEN INGRESAR DURANTE EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

FORTIFICARÍA UNA CONTRADICCIÓN ALEGANDO LA NECESIDAD DEL CONVENIO
DE INTEGRACIÓN Y DEL PAGARÉ INCOMPLETO. ASIMISMO PRESENTARÍA UNA
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

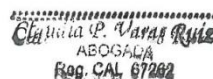
PERQUE SOLUCIONARÍA LA FUENTE INERTA DE UN VACÍO LEGAL SOBRE LAS
IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA
DE PAGARÉS INCOMPLETOS EN LOS PROCESOS DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA
DE DINERO QUE SE TRAMITA EN LA VÍA EJECUTIVA.



Firma del entrevistador



Firma del entrevistado


Claudia P. Vargas Ruiz
ABOGADA
Reg. CAL 67282

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y
ESPECIALISTAS LEGALES O SECRETARIOS JUDICIALES

Título: "Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017".

Entrevistado: WALTER FIGUEROA CHURPIAR ALFARO

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADO - CONCILIADOR

Institución: CENTRO DE CONCILIACIÓN "SOLUCIONES MAS SABIAS"

Lugar: MIRAFLORES **Fecha:** 07/11/18 **Duración:** 20 MINUTOS

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

1. ¿Cuáles considera usted que son las implicancias que genera el convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

IMPIDE QUE LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS ACCIONES CARBARIAS SE PRODUZCAN CON NATURALEZA, DADO QUE NO PERIODE EL INICIO DE SU COMPUTO.

2. ¿Por qué podría colisionar el convenio de integración de pagarés incompletos con la nulidad de los pactos que impidan los efectos de la prescripción extintiva establecida en el artículo 1990° del Código Civil?

POQUE SE DEJA AL LIBRE ALBEDRIO DEL ACREEDOR DECIDIR LA FECHA EN LA QUE SE VUELVEN EXERCICIOS LAS OBLIGACIONES CARBARIAS, POR TANTO

SE IMPIDE QUE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN SURTA EFECTOS.

3. ¿Cuáles son los efectos de las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos, en aquellos ejecutados (deudores) que son parte de los procesos tramitados en los Juzgados de Paz Letrado de Lima?

LA DISTINCIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS DEUDORES ANTE UNA SENTENCIA QUE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA, ADOTAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES MORTUOS.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

4. ¿Qué opina usted respecto a la actual regulación del convenio de integración de pagarés incompletos estipulados en los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil ?

NO HAY REGULACIÓN EXPRESA DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. COMO ACUERDOS ADOPTADOS, LA REGULACIÓN ES TÍPICA Y NO SE ACOPLA A LOS CONSUMIDORES QUE PUEDAN GENERARSE EN LA ACTUALIDAD ENTRE LOS ACREEDORES Y DEUDORES DE LAS OBLIGACIONES PATRIMONIALES.

5. ¿Cómo deberían aplicarse los artículos 10° y 19° literal e) de la Ley de Títulos Valores, el artículo 56° literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el artículo 690-D numeral 2 del Código Procesal Civil respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos?

NINGUNO DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS PUEDEN SER
APLICADOS A LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS
INCOMPLETOS.

6. ¿Cómo y en qué normas de nuestro ordenamiento jurídico deberían regularse las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos?

LA DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN
DEBERÍAN REGULARSE EN EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY DE TÍTULOS VALIDOS. NO
OBSTANTE, SUS IMPLICANCIAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, DEBERÍAN ESTAR
DESCRITAS EN EL SEGUNDO LIBRO, REFERIDO A TÍTULOS VALIDOS ESPECÍFICOS.
LO CONVENIENTE A LA PRESCRIPCIÓN, DEBE REGULARSE EN LA SECCIÓN OCTAVA DEL
LIBRO PRIMERO.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

7. ¿Cuáles son los criterios uniformes que los Jueces de Paz Letrado han adoptado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero, que usted conoce?

NO HAY CRITERIOS UNIFORMES DE LOS JUECES DE PAZ LETRADO SOBRE
LAS IMPLICANCIAS DEL CONVENIO DE INTEGRACIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE LOS PAGARÉS INCOMPLETOS.

8. ¿Qué medidas adoptaría usted cuando advierta que el convenio de integración tiene implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos de obligación de dar suma de dinero?

FORMULARIA LA CONTRADICCIÓN CON BASE EN EL NUMERAL 2 DEL
ARTÍCULO 690-D DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y PRESENTARÍA
UNA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN.

9. ¿Por qué sería importante que los Jueces de Paz Letrado establezcan criterios uniformes respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero?

PORQUE SERÍA UN MODELO JURÍDICO QUE SERVIRÍA COMO BASE PARA
LA IGUALDAD EN LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS, EVITANDO
DISTINTAS INTERPRETACIONES SOBRE LA FIGURA JURÍDICA DEL CONVENIO
DE INTEGRACIÓN Y SUS IMPLICANCIAS EN LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE
PAGARÉS INCOMPLETOS EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS DE ODSO.



Firma del entrevistador



WALTER M. HUMAYAN ALFARO
#606400
PPE C.A.C. N° 7540

Firma del entrevistado

Anexo 4: Guía de Análisis Documental

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Objetivo general

.....
.....

“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL”

DATOS DE LA FUENTE		OBJETO DE ANÁLISIS
Expediente		
Tipo de Proceso		
Resolución		
Órgano Jurisdiccional		
Demandante		
Demandado		
Actuados:		

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Objetivo general

Conocer las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima.

“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL – DERECHO COMPARADO”

DATOS DE LA FUENTE		OBJETO DE ANÁLISIS
Expediente	5384-1999	QUINTO: Que cualquiera sea el tenor, sentido y alcance que pueda o deba darse a la cláusula de aceleración en comentario, lo cierto es que de la forma razonada en la sentencia recurrida evidente resulta que se ha incurrido en el error de derecho que se reclama al apartarse los jueces de la instancia de lo prescrito por el legislador en el artículo 2514 inciso segundo del Código Civil, que ordena contar el plazo de prescripción extintiva a partir de que la obligación se hace exigible, cuestión de hecho que ocurre independientemente del acto de notificación de la demanda en que se persigue aceleradamente la obligación pactada en cuotas. En efecto, hacer pender el inicio del plazo de la prescripción a partir de tal circunstancia fáctica – exclusivamente dependiente de la sola
Tipo de Proceso	Proceso Ejecutivo	
Resolución	5.054-2006	
Órgano Jurisdiccional	Primera Sala de la Corte Suprema de Chile	
Demandante	Banco Santiago	

Demandado	Manzano Dagoberto	voluntad del acreedor – transforma en los hechos, y contrariamente a derecho, en inaplicable el instituto de la prescripción.
<p>Actuados: El ejecutado presentó el recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago expedida el 21 de agosto del 2006, mediante la cual se revoca la Resolución expedida el 28 de junio del 2001 por 19° Juzgado Civil de Santiago, a través de la cual se admite, únicamente, la excepción 17ª del artículo 464° del Código de Procedimiento Civil.</p>		

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Objetivo específico 1

Analizar la actual regulación del convenio de integración respecto a sus implicancias en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos.

“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL – DERECHO COMPARADO”

DATOS DE LA FUENTE		OBJETO DE ANÁLISIS
Expediente	00358-2017	QUINTO: Por el contrario, la parte accionante absuelve el traslado conferido mediante escrito del 17 de julio del año en curso. Que asimismo, conforme se advierte del pagaré de fojas 05, si bien han transcurrido más de diez años de la emisión del pagaré no es menos cierto que éste tiene como fecha de vencimiento el 16 de enero del 2015; y conforme a lo dispuesto en el artículo 96° de la Ley de Títulos Valores – Ley Nro. 27287, se señala que las acciones cambiarias derivadas de los títulos valores, prescriben: a) a los tres años, a partir de su respectivo vencimiento; siendo que para el presente caso el pagaré puesto a cobro se encuentra vigente no habiendo operado en él el plazo prescriptorio deviniendo así en infundada la prescripción formulada por el ejecutado.
Tipo de Proceso	Proceso Ejecutivo	
Resolución	04	
Órgano Jurisdiccional	3° Juzgado de Paz Letrado de Lima	
Demandante	TECSUP N1	

Demandado	Ampuero Salas, Cesar Alberto y otros	
<p>Actuados: El ejecutante presenta la demanda de obligación de dar suma de dinero contra el obligado principal y sus avales, adjuntando como medio probatorio el Pagaré S/N con fecha de vencimiento al 16 de enero del 2015, la cual contiene una cláusula especial de no estar sujeto a protesto y expresa la prórroga de competencia. El petitorio es el cumplimiento de pago de la suma de US\$ 3,282.77 (Tres mil doscientos ochenta y dos y 77/100 Dólares Americanos), por concepto de un crédito educativo otorgado.</p>		

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título: “Convenio de integración y prescripción extintiva de pagarés incompletos en Juzgados de Paz Letrado de Lima – 2017”.

Objetivo específico 2

Identificar los criterios uniformes adoptados por los Jueces de Paz Letrado respecto a las implicancias del convenio de integración en la prescripción extintiva de los pagarés incompletos en los procesos ejecutivos de obligación de dar suma de dinero.

“ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL – DERECHO COMPARADO”

DATOS DE LA FUENTE		OBJETO DE ANÁLISIS
Expediente	02405-2016	TERCERO: Que la parte ejecutada se encuentra notificada con la resolución número uno, habiendo presentado escrito de contradicción por EDISON BONIER ESPINOZA ARCAYO , quien manifestó que la parte ejecutante no está tomando en consideración pagos que se han realizado siendo necesario una liquidación, no presentado medio probatorio que acredite su dicho, siendo que el Pagaré presentado conserva el mérito ejecutivo que la ley le confiere y contiene una obligación cierta, expresa, exigible y líquida. A ello se agrega que no resulta necesario establecer o acreditar el origen de la obligación contenida en el título valor puesto a cobro,
Tipo de Proceso	Proceso Ejecutivo	
Resolución	10	
Órgano Jurisdiccional	2° Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita	

Demandante	TECSUP N1	atendiendo al principio de literalidad, previsto por el artículo cuatro de la Ley de Títulos Valores; siendo así corresponde ampararse la pretensión demandada.
Demandado	Atencia Serna, Javier y otros	

Actuados: El ejecutante presenta la demanda de obligación de dar suma de dinero contra el obligado principal y sus avales, adjuntando como medio probatorio el Pagaré S/N con fecha de vencimiento al 04 de abril del 2016, la cual contiene una cláusula de no estar sujeto a protesto. La pretensión gira en torno al cumplimiento de pago de la suma de S/ 23,517.00 (Veintitrés mil quinientos diecisiete y 00/100 Soles), por concepto de un crédito educativo otorgado.

Anexo 5: Confiabilidad de Entrevistados

CARGO

PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Primer Addendum al Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte **YELL PERÚ S.A.C.** con RUC No. 20501426041 con domicilio en Av. Paseo de la República No. 3755, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señor Pablo Alejandro Villabona Arribas, identificado con Carné de Extranjería No. 000518819, según poder inscrito en la Partida Registral No. 11387296 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; en adelante **YELL**; y, de la otra, **SOSAYA, MATTA, & SHIMABUKURO ABOGADOS S.A.C.** con RUC No. 20506612536, con domicilio en Av. Arequipa No. 4130, Oficina 601, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerente General, señor Alfredo Exequiel Sosaya Gonzáles, identificado, con DNI No. 07620781; cuyo poder corre inscrito en la Partida Registral No. 11511767 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la que en adelante se denominará "**LA LOCADORA**", bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

El 1 de abril de 2011, las partes suscribieron un Contrato de Locación de Servicios (en adelante el Contrato Principal), a través del cual **LA LOCADORA** se obliga a prestar el Servicio de Gestión de Cobranza Judicial de cartera Morosa. Por su parte, **YELL** se obligó a pagar la retribución pactada en la cláusula tercera del Contrato Principal.

Las partes, acuerdan la ampliación del plazo pactado conforme a los términos señalados en el presente documento y en la Carta de Adjudicación (Proceso No. 11-01995 Ed.3), del 30 de marzo de 2012.

SEGUNDA.- FUNCIÓN

Por el presente Addendum, las partes convienen en modificar la Cláusula Séptima y Octava del Contrato Principal. Asimismo, las partes acuerdan agregar la Primera, Segunda y Tercera Cláusula Adicional; por lo que debe entenderse que a partir de la fecha de suscripción del presente Addendum, dichas Cláusulas tendrán el tenor literal que se detalla a continuación:

"SEPTIMA.- PLAZO

El plazo del presente contrato es a partir del 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. El contrato sólo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, lo cual deberá formalizarse por escrito.

*La vigencia del presente contrato estará condicionada al nivel de calidad y servicio que brinde **LA LOCADORA**, nivel que será determinado en función a la evaluación efectuada por **YELL**.*

*Asimismo, **YELL** se reserva el derecho de resolver el presente Contrato de forma automática, unilateral y sin expresión de causa, bastando para ello, únicamente la comunicación por escrito a **LA LOCADORA** con quince (15) días de anticipación a la fecha en la que se producirá la resolución.*

*La resolución anticipada no generará ninguna obligación de pago indemnizatorio a favor de **LA LOCADORA** por lo que ésta renuncia a*

12-10-12
FIRMA COMMERAS GABOZA
Abogado-Area de Normalización
Gerencia de Facturación y Normalización
YELL PERÚ S.A.C.

[Firma]
FIRMA
FIRMA
FIRMA

PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Primer Addendum al Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte **YELL PERÚ S.A.C.** con RUC No. 20501426041 con domicilio en Av. Paseo de la República No. 3755, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señor Pablo Alejandro Villabona Arribas, identificado con Carné de Extranjería No. 000518819, según poder inscrito en la Partida Registral No. 11387296 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; en adelante **YELL**; y, de la otra, **SOSAYA, MATTA, & SHIMABUKURO ABOGADOS S.A.C.** con RUC No. 20506612536, con domicilio en Av. Arequipa No. 4130, Oficina 601, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por su Gerente General, señor Alfredo Exequiel Sosaya Gonzáles, identificado, con DNI No. 07620781; cuyo poder corre inscrito en la Partida Registral No. 11511767 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la que en adelante se denominará "**LA LOCADORA**", bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

El 1 de abril de 2011, las partes suscribieron un Contrato de Locación de Servicios (en adelante el Contrato Principal), a través del cual **LA LOCADORA** se obliga a prestar el Servicio de Gestión de Cobranza Judicial de cartera Morosa. Por su parte, **YELL** se obligó a pagar la retribución pactada en la cláusula tercera del Contrato Principal.

Las partes, acuerdan la ampliación del plazo pactado conforme a los términos señalados en el presente documento y en la Carta de Adjudicación (Proceso No. 11-01995 Ed.3), del 30 de marzo de 2012.

SEGUNDA.- FUNCIÓN

Por el presente Addendum, las partes convienen en modificar la Cláusula Séptima y Octava del Contrato Principal. Asimismo, las partes acuerdan agregar la Primera, Segunda y Tercera Cláusula Adicional; por lo que debe entenderse que a partir de la fecha de suscripción del presente Addendum, dichas Cláusulas tendrán el tenor literal que se detalla a continuación:

"SEPTIMA.- PLAZO

El plazo del presente contrato es a partir del 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. El contrato sólo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, lo cual deberá formalizarse por escrito.

*La vigencia del presente contrato estará condicionada al nivel de calidad y servicio que brinde **LA LOCADORA**, nivel que será determinado en función a la evaluación efectuada por **YELL**.*

*Asimismo, **YELL** se reserva el derecho de resolver el presente Contrato de forma automática, unilateral y sin expresión de causa, bastando para ello, únicamente la comunicación por escrito a **LA LOCADORA** con quince (15) días de anticipación a la fecha en la que se producirá la resolución.*

*La resolución anticipada no generará ninguna obligación de pago indemnizatorio a favor de **LA LOCADORA** por lo que ésta renuncia a*



ALFREDO SOSAYA GONZÁLES
GERENTE GENERAL
SOSAYA, MATTA & SHIMABUKURO ABOGADOS S.A.C.
RUC 20506612536

cualquier acción o derecho que quisiera exigir posteriormente a la decisión de resolución contractual.

Frente a dicha situación, **YELL** pagará por los gastos incurridos hasta la fecha efectiva de la resolución, siempre que se hayan brindado todos los servicios de manera satisfactoria.

OCTAVA.- CARTA FIANZA

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del presente Contrato, **LA LOCADORA** se obliga a presentar a la firma del presente contrato, una carta fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión extendida a favor de **YELL** otorgada por una institución bancaria nacional de primer orden, a satisfacción de **YELL**, por la suma de US\$ 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Dólares Americanos). Dicha carta permanecerá vigente por todo el plazo del contrato hasta los noventa (90) días posteriores a la fecha de su terminación. Asimismo, el monto de dicha carta fianza deberá ser incrementado a solicitud de **YELL**. En la medida que el contrato se ejecute en la forma pactada, **YELL** podrá autorizar la reducción del monto de la fianza.

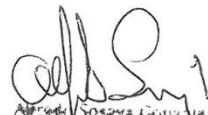
PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL.- PROTECCIÓN DE DATOS

En el caso que la prestación del servicio implique el acceso a datos personales, se establece que:

Los datos de carácter personal entregados por **YELL** a **LA LOCADORA** y los obtenidos por las partes durante la ejecución del presente Contrato, serán los estrictamente necesarios para el cumplimiento del mismo, y única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines objeto del Contrato, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo título alguno, ni siquiera a efectos de mera conservación.

LA LOCADORA como encargada del tratamiento, tratará los datos conforme a las instrucciones de **YELL**, y adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, y en especial las establecidas en la Ley No. 29733, del 3 de julio de 2011, Ley de Protección de Datos Personales, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Cuando el servicio encomendado a **LA LOCADORA** por **YELL** exija el recojo de datos de carácter personal de clientes de **YELL**, **LA LOCADORA** se obliga, con carácter previo al recojo de los mismos y a solicitar autorización expresa e inequívoca de éstos, a informar a dichos clientes de que el recojo de datos se realiza en nombre y por cuenta de **YELL** y a incorporar los datos en el Banco de Datos Personales titularidad de **YELL**, con la finalidad de ofrecerle un determinado servicio. De igual forma, se obliga a garantizar la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de sus datos, comunicándole de la posibilidad de ejercitar los derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación y supresión, oposición e impedir el suministro, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales.



Attestado y autorizado por:
GILBERTO ESPINOZA
SOLICITA LA FIANZA

No obstante lo anterior, en el supuesto de que determinados trabajos tuvieran que ser ejecutados por terceros, **LA LOCADORA** actuará en nombre y por cuenta de **YELL**, a los únicos efectos de la protección de los datos, por lo que en el Contrato que **LA LOCADORA** suscriba con dicho tercero y por el que le encomiende la realización de todos o parte de los trabajos y servicios objeto del presente Contrato, se hará constar expresamente esta circunstancia, así como la asunción, por parte de dicho tercero, de las obligaciones de protección de datos exigidas por la Ley No. 29733 de Protección de Datos Personales.

De considerarse necesario, **YELL** exigirá a **LA LOCADORA**, suscribir un contrato de Encargo de Tratamiento con Subcontratación para efecto de cumplir integralmente con la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos personales. En caso de incumplimiento **YELL** se reserva la facultad de resolución automática de pleno derecho, de conformidad al artículo 1430° del Código Civil.

Una vez cumplida la prestación contractual que motivó la entrega de datos personales, **LA LOCADORA** deberá, a discreción de **YELL**, o bien, devolver todos los datos personales transferidos y sus copias, o bien, destruirlos por completo y certificar esta circunstancia a **YELL**, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

Asimismo, será obligación y responsabilidad exclusiva de **LA LOCADORA** controlar y mantener actualizada la relación nominal de todos aquellos empleados que accedan a los sistemas de **YELL**, debiendo proporcionar a **YELL**, cuando la misma lo requiera, dicha relación actualizada.

LA LOCADORA consentirá cuantas inspecciones considere preciso efectuar **YELL** en los ficheros que contengan los datos de carácter personal entregados para la ejecución del Contrato.

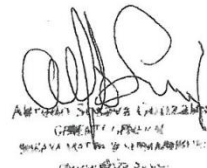
LA LOCADORA será responsable de cuantas sanciones, multas o reclamaciones por daños y perjuicios se deriven del incumplimiento de lo anteriormente expuesto y resarcirá a **YELL** de los importes que por tal motivo hubiera tenido que abonar, incluidos gastos jurídicos, extrajudiciales y costas que la defensa de **YELL** ocasionase. Todo ello con independencia de que tal incumplimiento sea considerado causa de resolución de Contrato.

LA LOCADORA manifiesta su plena aprobación para que **YELL** pueda utilizar y/o transferir a terceros los datos personales que hayan sido otorgados por **LA LOCADORA** para la correcta ejecución del servicio señalado en el Contrato Principal, por el cual **YELL** garantiza el debido respeto y cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Ley No. 29733, así como de cualquier norma relacionada respecto a este tema.

El incumplimiento por **LA LOCADORA** de la presente Cláusula, facultará a **YELL** para resolver el contrato y exigir el pago por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL.- COMPENSACIÓN

Las partes acuerdan a través del presente Contrato de forma voluntaria y anticipada, el derecho a compensar cualquier deuda vencida de ambas partes, derivada de cualquier naturaleza de la obligación. La compensación opera sin



Handwritten signature and stamp of a legal entity, likely the Locadora, with text including "Aprobado", "Firma", and "Sello".

necesidad de comunicación por parte de **YELL**, por lo que podrá informarse de la oposición en fecha posterior a la compensación.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán compensar el principal, intereses, gastos, penalidades y cualquier otro concepto que determine **YELL**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1288 y 1289 del Código Civil.

TERCERA CLÁUSULA ADICIONAL.- CESIÓN

LA LOCADORA no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, sus derechos, ni sus obligaciones emanados del contrato, salvo consentimiento previo y por escrito de **YELL**.

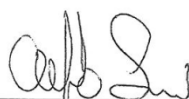
YELL podrá ceder su posición contractual, o cualquiera de sus derechos u obligaciones, a cualquier empresa que, directa o indirectamente, esté controlada por, sea controlante de, o se encuentre bajo control común con **YELL** o sea parte integrante del Grupo **YELL**. Para tal fin, **LA LOCADORA** brinda su aceptación de manera anticipada"

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL

Las partes declaran que salvo las modificaciones acordadas en el presente Addendum las demás Cláusulas del Contrato Principal permanecen invariables y vigentes.

Firmado en Lima, el 1 de abril de 2012.

Pablo Villabona Arribas
YELL PERÚ S.A.C.



LA LOCADORA
Asesoría y Servicios
Comerciales y
Industriales
S.A.C.
RUC 201001234567890

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios profesionales para cobranza Judicial y Extrajudicial y procesos varios que celebra de una parte:

TECSUP N° 1, con RUC N° 20117592899 con domicilio en Av. Cascanueces 2221 Sta. Anita, debidamente representada por el Sr. Dante Muñoz Díaz, identificado con DNI N° 08247130 y el Sr. Otto Hans Frech Hurtado, identificado con DNI Nro.08763297 a quien en adelante se denominará **LA COMITENTE**; y de la otra parte:

SOSAYA, MATTA & SHIMABUKURO ABOGADOS SAC., con RUC 20506612536 y domicilio en Avenida Arequipa 4130 Oficina 601, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales, identificado con DNI 07620781, a quien en adelante se denominará **LA LOCADORA**.
Conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: ANTECEDENTES

LA COMITENTE, **Tecsup Nro.1**, es una empresa constituida conforme a las leyes de la República del Perú.

EL LOCADOR es una persona jurídica que brinda servicios de Cobranza Judicial y Extrajudicial y que tiene capacidad técnica y económica necesaria, así como los elementos propios y suficientes, para obligarse en los términos del presente contrato y que posee la experiencia y conocimientos requeridos por **LA COMITENTE** para la prestación de los servicios materia del presente contrato.

SEGUNDO: DEL ÁMBITO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

EL LOCADOR prestará sus servicios profesionales a favor de **LA COMITENTE**, a nivel de Lima, con la finalidad de lograr la recuperación judicial ó extrajudicial de deudas vencidas y castigadas, así como llevar los procesos civiles que se deriven de los procesos de cobranza.

TERCERO: DE LOS SERVICIOS DEL LOCADOR

- A) Mediante el presente documento **LA COMITENTE** contrata los servicios profesionales de **EL LOCADOR**, para que realice las acciones de cobranza judicial y extrajudicial, con pago de honorarios sujeto a la recuperación de créditos, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula cuarta del presente Contrato.
- B) Tramitar y patrocinar los asuntos contenciosos, como demandante, en sede judicial, tales como ofrecimientos de pago, prueba anticipada, consignaciones, etc.
- C) Tramitar los exhortos y demás diligencias que requieran los procesos, seguidos desde otras localidades del Perú.
- D) Comunicar a **LA COMITENTE**, sobre cualquier situación de contingencia que pueda afectar sus intereses.

CUARTO: DE LA RETRIBUCION

Las partes de común acuerdo establecen como honorarios por los servicios profesionales de Cobranza, los porcentajes que se detallan a continuación (No Incluyen el IGV), de acuerdo a los siguientes montos efectivamente recuperados:



Alfredo Sosaya Gonzales
Alfredo Sosaya Gonzales
GERENTE GENERAL
SOSAYA MATTA & SHIMABUKURO ABOGADOS SAC.

TRAMO - CARTERA	Recupero
Preventiva - 8	1.50 %
Tramo 9 - 30	2.75 %
Tramo 31-60	4.50 %
Tramo 61-90	7.50 %
Tramo 91-150	12.00 %
Tramo 151-360	15.00 %
Tramo 361-720	20.00 %
Judicial	25.00 %

1.- Para los procesos judiciales hasta la sentencia **LA COMITENTE** abonara adicionalmente a la comisión pactada la suma S/.250.00 (Doscientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) por concepto de gastos.

2.- De interponerse o iniciar una medida cautelar en cualquiera de sus modalidades, será de cuenta y cargo de **LA COMITENTE** abonará todos los gastos debidamente justificados y/o acreditados por parte del estudio.

3.- Incobrabilidad: **TECSUP** decidirá si se emite esta constancia de **INCOBRABILIDAD**, a continuación se le proporciona un extracto del **REGLAMENTO DE LEY DE IMPUESTO A LA RENTA**. Para los certificados de incobrabilidad la empresa abonara la suma de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles).

4.- Todos los gastos deberán ser repuestos al estudio dentro de los 7 días siguientes a la justificación

LA COMITENTE Abonará los honorarios por períodos mensuales, dentro de las 2 semanas siguientes a la presentación de la correspondiente factura, acompañada de una liquidación detallada de los gastos incurridos.

LA COMITENTE remitirá a **EL LOCADOR** una liquidación con los importes recuperados, luego de recibir el Informe Mensual correspondiente, por parte de **EL LOCADOR**.

El informe que debe presentar mensualmente **EL LOCADOR** deberá contener el avance de los procesos donde se señalarán las actividades desarrolladas en el plano extrajudicial y judicial, mostrando los resultados obtenidos, observando los desfases que existieran y precisando los motivos que los originaron, asimismo, se deberá detallar propuestas de mejora.

LA COMITENTE no pagará ningún otro monto adicional a los específicamente dispuestos en la presente cláusula.

QUINTO : DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMITENTE

En virtud al presente contrato, **LA COMITENTE** se obliga a lo siguiente:

5.1 A pagar oportunamente la contraprestación.

5.2 A remitir y comunicar a **EL LOCADOR**, cualquier documento y/o hecho relevante para la prestación del servicio.



5.3 A designar uno ó más funcionarios que cumplan la labor de contacto con **EL LOCADOR**, así como cumplir con las solicitudes de información que **EL LOCADOR** pudiera efectuar y que resulten necesarios para una adecuada prestación del servicio.

SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES DE EL LOCADOR

En virtud del presente contrato, **EL LOCADOR** se obliga a lo siguiente:

- 6.1 Prestar sus servicios a satisfacción de **LA COMITENTE**
- 6.2 Elaborar un informe mensual, el mismo que deberá ser enviado a **LA COMITENTE** dentro de los tres días hábiles siguientes al cierre de cada mes.
- 6.3 **EL LOCADOR** representará, impulsará y llevará todo el proceso, hasta que se resuelva en última instancia y se ponga fin al proceso, salvo se produzca la resolución del contrato a que se refiere la cláusula décimo quinta.
- 6.4 **EL LOCADOR** deberá poner en conocimiento de **LA COMITENTE**, toda manifestación, escrito o actuación que se presente al proceso, por cualquiera de las partes o de la autoridad competente. Por lo tanto, queda entendido que es de responsabilidad de **EL LOCADOR** el cumplimiento de los plazos previstos para el presente proceso Civil, así como mantener informado a **LA COMITENTE** de las ocurrencias que se susciten dentro del mismo.
- 6.5 Mantener informado a **LA COMITENTE** de los avances de la prestación de los servicios y de cualquier aspecto relevante a los mismos.
- 6.6 En el supuesto negado que **EL LOCADOR** por negligencia, no cumpla con los términos y/o plazos establecidos para el proceso judicial y por ende el proceso caiga en abandono o similares, sin perjuicio de la responsabilidad de los daños y perjuicios que ello podría ocasionar a **LA COMITENTE**, **EL LOCADOR** asumirá los costos de todos los gastos realizados hasta ese momento.
- 6.7 Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, **EL LOCADOR** se obliga a elaborar un informe de estado actual del proceso, cuando **LA COMITENTE** así lo solicite.
- 6.8 Queda convenido que **LA COMITENTE**, podrá retirar cuentas que fueron asignadas a **EL LOCADOR** para su gestión, en el momento que lo determine conveniente, bastando para ello que curse una comunicación previa a **EL LOCADOR**. En este caso, **LA COMITENTE** no estará sujeto a pago alguno a favor de **EL LOCADOR**.

SEPTIMO: DE LA NOMINA DE ABOGADOS Y DEL ABOGADO COORDINADOR.

EL LOCADOR da a conocer a **LA COMITENTE** el nombre del abogado o abogados que indistintamente, se encargarán de los servicios materia del presente contrato. Asimismo, **EL LOCADOR** señala a un abogado para que cumpla con funciones de coordinador y facilite la cabal ejecución del contrato, quien deberá contar con la suficiente experiencia en la gestión a realizar.

Constituye una especial obligación de **EL LOCADOR**, estar siempre a disposición de los requerimientos que le haga **LA COMITENTE**.

OCTAVO: DE LOS GASTOS DEL SERVICIO

LA COMITENTE asumirá los gastos que demande la prestación del servicio de cobranza que brindará **EL LOCADOR** y que están pactados y detallados en la cláusula cuarta del presente contrato.

Asimismo, queda expresamente convenido que será de cargo de **EL LOCADOR**, la movilidad y viáticos en que incurran sus abogados, para brindar los servicios materia del presente Contrato, salvo excepción previamente aprobada por **LA COMITENTE**.



Alcides G. Soto, Locador

NOVENO: CONSERVACION DE DOCUMENTOS

EL LOCADOR asume plena responsabilidad respecto a la obligación de mantener y conservar en buen estado los documentos de todo tipo, contratos, títulos valores, papeles, libros o cualquier otra información escrita o por cualquier otro medio que le haya proporcionado **LA COMITENTE** siendo de exclusiva responsabilidad de **EL LOCADOR** cualquier pérdida, daño o deterioro que se produzca por causa de negligencia o a raíz del mal uso o descuido que se les haya dado a los mismos.

DECIMO: CONFIDENCIALIDAD

Se entenderá por "información" a efectos de este documento, toda información de tipo legal, económico, financiero, técnico, comercial, estratégico, o de cualquier otro tipo que sea revelada por **LA COMITENTE** a **EL LOCADOR**, de forma oral, escrita, en cualquier soporte o por cualquier medio, así como cualquier informe, análisis, recopilación, estudio, resumen, extracto o documentación de todo tipo, de propiedad, dominio, disposición autorizada, elaboración por **LA COMITENTE** o elaborada conjuntamente por ambas partes, a raíz de la información o documentación revelada por **LA COMITENTE**.

EL LOCADOR reconoce el carácter confidencial de la información, por lo que se obliga a que la misma sea tratada confidencialmente y exclusivamente por sus miembros y/o asesores autorizados, por lo que no será divulgada ni revelada a persona natural y/o jurídica distinta a **EL LOCADOR**, salvo que cuente con la previa autorización escrita de **LA COMITENTE**.

Los miembros, ejecutivos y/o asesores a los que les sea revelada la información de **LA COMITENTE**, deberán ser advertidos por **EL LOCADOR** de estas limitaciones, debiendo convenir en las restricciones aquí establecidas.

Asimismo, **EL LOCADOR** acepta que sin el previo consentimiento escrito de **LA COMITENTE**, **EL LOCADOR** no revelará a terceros ni hará ningún anuncio público con respecto a la información y documentación que **LA COMITENTE** le hubiere facilitado, ni sobre posibles transacciones que se realicen a futuro.

EL LOCADOR acuerda que la información será utilizada única y exclusivamente para la prestación de los servicios materia del presente Contrato, comprometiéndose a no utilizar dicha información para fines distintos al propósito antes mencionada.


La obligación de confidencialidad será de carácter indefinido, inclusive luego de resuelto el vínculo contractual.

DÉCIMA PRIMERO: CONFLICTO DE INTERESES

EL LOCADOR informará a **LA COMITENTE** por escrito o vía electrónica, respecto a cualquier circunstancia que pudiera constituir un potencial conflicto de intereses. Se entiende por conflicto de intereses, cuando los intereses particulares de **EL LOCADOR** aparecen en conflicto con los intereses de **LA COMITENTE**.

DÉCIMO SEGUNDO: INFORMACION

EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios con la mayor calidad y autonomía técnica posible, pero informará a **LA COMITENTE**, el número de veces que sea requerido, acerca del diagnóstico, evolución, riesgos, estado y pronóstico de cada asunto


Firma del Locador
Mauricio J. Sosa

a su cargo. En todo caso, **EL LOCADOR** se obliga a informar a **LA COMITENTE** una vez por mes respecto al estado de la prestación de servicios.

DECIMO TERCERO : INEXSISTENCIA DE RELACION LABORAL

Las partes declaran que el presente contrato es uno de locación de servicios regulado por los artículos 1764° y siguientes del Código Civil, declarando que no existe vínculo de subordinación, ni dependencia alguna entre el personal de **EL LOCADOR** y **LA COMITENTE**.

DECIMO CUARTO: NO EXCLUSIVIDAD

EL LOCADOR reconoce que **LA COMITENTE** podrá contratar los servicios legales de otros estudios de abogados, para la prestación de servicios similares o idénticos a los regulados por el presente Contrato.

Por su parte, **LA COMITENTE**, reconoce que **EL LOCADOR** podrá ofrecer servicios similares o idénticos a los regulados por el presente contrato a terceros, sin perjuicio de la obligación de **EL LOCADOR**, de cumplir con lo establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato.

DECIMO QUINTO: RESOLUCION SIN EXPRESION DE CAUSA

Queda expresamente entendido que el presente vínculo contractual podrá ser terminado por **LA COMITENTE** en cualquier momento, sin expresión de causa, para lo cual bastará una simple carta dirigida a **EL LOCADOR**, operando la resolución después de los 15 días de la recepción de la misma.

En este caso, **EL LOCADOR** hará entrega de toda la documentación que tenga en su poder, incluyendo los falsos expedientes de las tramitaciones, a la persona que **LA COMITENTE** le indique.

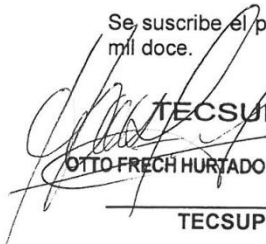
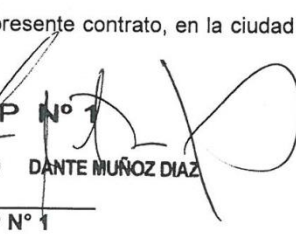
En caso que **EL LOCADOR** decidiera dar termino anticipado al contrato, deberá cursar una carta con 30 días de anticipación, en cuyo caso igualmente deberá cumplir con lo dispuesto en el párrafo precedente..

La resolución anticipada descrita en la presente cláusula, no origina pagos por concepto de indemnización por daños o perjuicios.

DECIMO SEXTO: DOMICILIO

Las partes declaran que el presente contrato contiene todos los acuerdos a los que han arribado libremente. Asimismo, establecen que el presente contrato reemplaza cualquier otra negociación, situación de hechos o contrato suscrito con anterioridad.

Se suscribe el presente contrato, en la ciudad de Lima, el 07 de noviembre del año dos mil doce.


TECSUP N° 1
OTTO FRECH HURTADO

DANTE MUÑOZ DIAZ
TECSUP N° 1


SMS ABOGADOS SAC
ESTUDIO DE ABOGADOS
SUSANA PATRICIA DE MENDOZA MENDOZA
RUC-20120303000000

Cargo de Ingreso de Expediente
(Centro de Distribucion General)

OK

18

Cod. Digitalizacion: 0000005076-2017-EXP-JP-CI

Expediente : 00358-2017-0-1801-JP-CI-03 F.Inicio : 13/01/2017 14:17:
Juzgado : JUZGADO 03
F.Ingreso : 13/01/2017 14:17:30
Especialista: DANIEL VIERA FERNANDEZ
Exp.Origen : F.Exp.Orig: 00/00/00
Proceso : UNICO DE EJECUCION
Motivo.Ing : DEMANDA Folios : 16
Materia : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Cuantia : Dólares Americ: 3,282.77 N Copias/Acomp : 4
Dep Jud : SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel : 6 889398 S/39.50 381803 S/4.10 382022 S/4.10 382234 S/4.10 382442 S/4.10 382634 S/4.10

Observación : ADJUNTA ANEXOS COMO INDICA///

Sumilla : DEMANDA///

DEMANDADO AMPUERO SALAS, CESAR ALBERTO
SALAS GUILLEN, LUIS ALBERTO
IBARCENA DE SALAS, GLADYS RUTH
DEMANDANTE TECSUP N° 1

LORRTO PALACIOS LEONILDA HERCILIA
Ventanilla i
Modulo 1
PISO 6



Recibido

CASILLA 7041

CARGO



EXPEDIENTE :
CUADERNO : PRINCIPAL
ESCRITO : 01
SUMILLA : DEMANDA

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LIMA.-

TECSUP N°1, con RUC N° 20117592899, debidamente representado por su Apoderado, el señor ALFREDO EXEQUIEL SOSAYA GONZALES, identificado con DNI N° 07620781, según facultades debidamente inscritos en el Asiento A00046 de la Partida Electrónica N° 03001091 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, señalando para estos efectos domicilio real en Av. Cascanueces Nro. 2221 (km. 27 carretera central), distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, domicilio procesal en: CASILLA N° 22596 del Servicio de Notificaciones (SERNOT) del Poder Judicial, ubicada en la Sede de los Juzgados y Salas de Subespecialidad Comercial, sito en la Av. Petit Thouars N° 4979, Séptimo Piso, Miraflores, Lima y Casilla Electrónica N° 32577; ante usted con el debido respeto decimos:

I. PETITORIO:

En la vía del **PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN** y de conformidad a lo previsto por los Arts. 688° Numeral 4), 689°, 690°, 690-A, 690-B, 690-C y demás aplicables del Código Procesal Civil, recurro a su Despacho con la finalidad de interponer **DEMANDA DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO**, a fin de que emita mandato de ejecución ordenándose que el demandado cumpla con pagar la suma de **US\$ 3,282.77 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS)**, más intereses legales, costas y costos del proceso, por concepto de servicios de Educación no pagados, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación exponemos:

II. NOMBRE y DIRECCIÓN DE LOS EMPLAZADOS:

2.1. **AMPUERO SALAS, CESAR ALBERTO** (en su calidad de obligado principal), a quien se le deberá notificar en NRO. A INT. 7 A.H. HOYOS RUBIO (ZONA A – PAMPAS DE POLANCO) – AREQUIPA – AREQUIPA – ALTO SELVA ALEGRE (domicilio expresado en el pagaré y en el Certificado de Inscripción del RENIEC).

2.2. SALAS GUILLEN, LUIS ALBERTO (en su calidad de aval), a quien se le deberá notificar en URB. LA ENCALADA MZ. F LT. 3 – AREQUIPA – AREQUIPA – JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO (domicilio expresado en el pagaré y en Certificado de Inscripción del RENIEC).

2.3. IBARCENA DE SALAS, GLADYZ RUTH (en su calidad de aval), a quien se le deberá notificar en URB. LA COLONIAL III MZ. J LT. 10A – AREQUIPA – AREQUIPA – PAUCARPATA (domicilio expresado en el pagaré y en el Certificado de Inscripción del RENIEC).

III. FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: Por medio del Pagaré que se anexa a la presente, el demandado **AMPUERO SALAS, CESAR ALBERTO** se obligó a pagar la suma de **US\$ 3,282.77 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS)**, por la prestación de servicios educativos, firmando como avales de dicha obligación los señores **SALAS GUILLEN, LUIS ALBERTO** e **IBARCENA DE SALAS, GLADYZ RUTH**, siendo TECSUP N° 1 tenedor del mismo, es por ende acreedor de las obligaciones contenidas en el título valor.

SEGUNDO: El título valor al que se hace referencia tiene como fecha de vencimiento el día **16 de enero del 2015**; por lo que, se puede advertir que a la fecha se encuentra vencido; sin embargo, pese a los reiterados requerimientos de pago efectuados por mi poderdante y al no haber obtenido un resultado positivo, hemos procedido a iniciar el presente proceso de ejecución de título valor.

IV. REQUISITOS COMUNES:

El Artículo 689° del Código Procesal Civil establece "Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética."

1. Obligación cierta: Lo establecido en el Pagaré es conocida como verdadera e indubitable.
2. Obligación expresa: El demandado manifiesta la intención de efectuar el pago del monto consignado en el pagaré.
3. Obligación exigible: Existe un plazo para efectuar el pago, el cual ya venció.
4. Obligación líquida: El monto ha sido determinado claramente.

V. **TÍTULO EJECUTIVO:**

El artículo 688° inciso 4 del Código Procesal Civil que, establece que "(...) Los títulos valores que confieran la acción cambiaria debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectivo; o en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto en la ley de la materia (...)", concordante con el Artículo 81° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores.

En el presente caso, el título ejecutivo es un pagaré emitido por TECSUP N° 1 con fecha de vencimiento el día **16 de enero del 20015**, siendo que conforme a la cláusula especial "Este pagaré no requiere ser protestado por falta de pago, procediendo su ejecución por el solo mérito de haberse cumplido la fecha de su vencimiento y no haber sido prorrogada".

VI. **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Sustento la presente acción en lo previsto por los siguientes artículos:

6.1. El Artículo 1219° del Código Civil establece que "Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado."

En el presente caso, hacemos uso del proceso de ejecución establecido en el Código Procesal Civil para procurar el pago de la deuda.

VII. **MONTO DEL PETITORIO**

El monto del petitorio asciende a la suma de **US\$ 3,282.77 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS)**, más los intereses legales, costas y costos que acarree el ejercicio de la presente acción.

VIII. **VIA PROCEDIMENTAL Y COMPETENCIA:**

La presente demanda debe tramitarse mediante el Proceso Único de Ejecución, siendo de competencia el Juzgado de Paz Letrado, de conformidad a lo previsto por el Artículo 690-B del

Código Procesal Civil, por cuanto la pretensión en ejecución que se demanda no supera las 100 Unidades de Referencia Procesal.

En el caso de autos, conforme a lo señalado por el Artículo 25° del Código Procesal Civil, concordante con el Artículo 55° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores, y tal como se advierte del pagaré puesto a cobro, la parte demandada **RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO** y se somete a la Jurisdicción y Competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima, es por ello que se hace competente su Despacho.

IX. MEDIOS PROBATORIOS:

Cumplimos con ofrecer los siguientes medios probatorios:

1. El mérito del Pagaré con fecha de vencimiento el día 16 de enero del 20015, por la suma de **US\$ 3,282.77 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS).**

X. ANEXOS:

Cumplimos con adjuntar lo siguiente:

- 1-A Arancel judicial correspondiente por ofrecimiento de pruebas y por derecho de notificación.
- 1-B Copia de documento nacional de identidad del apoderado.
- 1-C Papeleta de Habilitación Profesional del letrado que autoriza
- 1-D Copia legalizada de vigencia de poder de Representación del apoderado.
- 1-E Original del Pagaré con fecha de vencimiento el día 16 de enero del 20015, por la suma de **S US\$ 3,282.77 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES AMERICANOS).**

POR LO EXPUESTO:

Solicito se sirva admitir a trámite la presente demanda, debiendo sustanciarla conforme a derecho y, en su oportunidad, se sirva declararla **FUNDADA** en todos sus extremos, con expresa condena de costas y costos más intereses legales, conforme a ley.

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: De conformidad con el numeral 87.2 del Artículo 87° de la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores, adjunto una (01) copia de la demanda y sus anexos, a efectos de que su Despacho

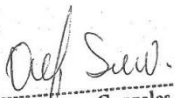
ordene la comunicación a la Cámara de Comercio de Lima respecto al incumplimiento de pago del título valor no sujeto a protesto.

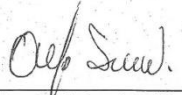
SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Al amparo del Artículo 2° inciso 23° de la Constitución Política del Perú invocando mi Legítima Defensa y por convenir mi derecho nombro como mis abogados defensores a Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales con registro CAL N° 31802 y Nery Victoria Leon Huachani con registro CAL N° 56864 y de conformidad del Artículo 80° del Código Procesal Civil, delego facultades generales de representación a los mismos, de acuerdo con los alcances de la norma establecida en el Artículo 74° del acotado Cuerpo de Leyes, y asimismo, declaro estar instruido del contenido y de los alcances de dicha norma, para cuyo efecto ratifico mi domicilio real indicado en la parte introductoria de la presente demanda.

TERCER OTROSÍ DIGO: De conformidad con el Artículo 134° del Código Procesal Civil, adjunto copia de la demanda y sus anexos para la parte contraria.

CUARTO OTROSÍ DIGO: Por convenir a nuestro interés, cumplimos con autorizar al señor, GARI NICHELSON SANDOVAL HERNANDEZ identificado con DNI N° 41560680, al señor JOHAN ALBERTO DAMIÁN ACUÑA identificado con DNI N° 70552736, al señor LUIS GABRIEL ROMERO AYQUIPA identificado con DNI N° 70555917, y GERSON NUÑEZ SALVADOR identificado con DNI N° 47591073 quienes indistintamente podrán recoger notificaciones, anexos, copias certificadas, consignaciones, oficios, exhortos, aranceles judiciales, cédulas y demás documentación que se genere durante el presente proceso, dejando constancia bajo cargo, conforme a ley.

Lima, 18 de noviembre del 2016


Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales
ABOGADO
C.A.L. N° 31802


Alfredo Exequiel Sosaya Gonzales
Apoderado
DNI N° 07620781



PAGARE N° _____ POR
US\$. 3,282.77
Vence el 16.01.2015

TECSUP N°1 que es una asociación civil sin fines de lucro constituida como un Centro Educativo dedicado a la formación profesional de alumnos en carreras tecnológicas.

Con dicha finalidad, ha aceptado el PRESTATARIO AMPUERO SALAS CESAR ALBERTO con código de inscripción N° _____, y le ha otorgado un Crédito Educativo, para lo cual existe la obligación de la devolución íntegra del crédito educativo de la capacitación en TECSUP N°1, según las condiciones fijadas por dicha asociación civil.

En virtud de ello, yo, AMPUERO SALAS CESAR ALBERTO
(Prestatario)

me obligo solidariamente pagar a la orden de TECSUP N°1 o a su legítimo tenedor en esta ciudad o en el lugar que se presenta a cobro este título valor, al 16 de ENERO del 2015, la suma de US\$. 3,282.77 el importe capital, a lo que cabe agregar el impuesto correspondiente si lo hubiera y los gastos permitidos por disposiciones legales.

Quedan aceptadas desde ahora todas las prórrogas y renovaciones que se inserten en este documento, aún cuando ellas no estén suscritas por nosotros, ya sean por su importe total, mayor o menor.

TECSUP N°1 está autorizado para cobrar los intereses compensatorios, con la tasa máxima permitida por las disposiciones legales a partir de la fecha de vencimiento. Si posteriormente la tasa fuera modificada por las disposiciones citadas, se consideran aplicables a este Pagaré desde la fecha en que entren en vigencia. De otro lado, si se suprimiese toda restricción en cuanto a la fijación de los límites de las tasas, intereses y/o comisiones, el deudor se compromete a pagar los intereses y/o comisiones más altas que abonan en plaza por operaciones análogas.

Desde el día siguiente de su vencimiento, el capital impago de este Pagaré devengará los intereses moratorios, con las variantes de la tasa fijada oportunamente más los gastos respectivos, sin necesidad de intimación en mora y todo ello de acuerdo a las disposiciones legales; estando en mora el deudor o deudores, al capital además de los intereses compensatorios devengará el interés moratorio de ____% anual, siendo esta tasa la máxima permitida a cobrar por las disposiciones legales, pudiendo la misma ser modificada cuantas veces entre en vigencia una tasa distinta, sin reserva ni limitación alguna.

En el caso de prórrogas y/o renovaciones y/o variaciones de la tasa de interés será suficiente que se anoten al reverso de este mismo documento o en sus anexos respectivos, para cuya validez absoluta no es necesario que los suscribamos nuevamente.

Este Pagaré no requiere de protesto para la ejecución de las acciones derivadas del título valor.

Para todos los efectos legales de este Pagaré se señala como domicilio la Av. Rodolfo Beeck Navarro N° 2221, distrito de Santa Anita, y se hace renuncia al fuero que nos corresponda, y por consiguiente, existe un sometimiento expreso a la competencia de los jueces de la localidad en el supuesto caso que TECSUP N° 1 tuviera que acudir al Poder Judicial para la cobranza del importe de este Título Valor, ya sea en vía ejecutiva o en cualquier otra vía legal.

El presente Pagaré es de naturaleza mercantil, se encuentra regulado por la Ley de Títulos Valores y demás normas conexas y vigentes.

Firma: [Firma]
Prestatario: ANTONIO SALAS, CESAR ALBERTO
LE/DNI: 41313739
Nº A INT. 7 A.H. ROYOS RUBIO (ZONA A - PAMPAS DE POLANCO)
AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA ALEGRE

POR AVAL: por el presente nos constituimos en avalistas permanentes del deudor o deudores para responder en forma solidaria por el importe de este pagaré, incluyendo capital, intereses compensatorios y moratorios y todas las obligaciones conexas que de él se deriven, incluyendo todas las renovaciones y prorrogas del pagaré contenido en el presente documento, las que, desde ya aceptamos y autorizo (autorizamos), sin que ello signifique renovación o liberación de nuestra garantía frente a TECSUP N°1, en forma independiente y directa como si fuéramos el deudor o deudores sin reserva alguna. En consecuencia, quedan autorizadas todas las prorrogas o renovaciones del pagaré, sin nuestra intervención, cualquiera que sea el plazo de las mismas, pues es nuestro deber controlar que el deudor o deudores amorticen o cancelen este título deudor. Se hace expresa renuncia al fuero del domicilio y, por consiguiente, existe un sometimiento expreso a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial correspondiente a la ciudad de Lima.

Fecha: Santa Anita, 07 de Octubre de 2005

Firma: [Firma]
Avalista: SALAS GUILLEN, LUIS ALBERTO
LE/DNI: 29248701
URB. LA ENCAJADA 172. F LT. 3
AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS
BUSTARANTE Y RIVERO

Firma: [Firma]
Cónyuge: BARCENA DE SALAS, GLADYZ RUTH
LE/DNI: 29248700
URB. LA COLONIAL III 172. J LT. 10A
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA

Anexo 6: Convenio de Integración

CONVENIO DE INTEGRACION DE TITULO VALOR DEL CREDITO EDUCATIVO

Conste por el presente documento el Convenio de Integración de Título Valor que celebran de una parte TECSUP N°1, identificada con R.U.C. N° 20117592899, debidamente representada por don Mario Raúl Rivera Orams, identificado con D.N.I. N° 08799392, según poderes inscritos en el Rubro N° A00007 de la Partida Electrónica N° 03001091 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, con domicilio en la Av. Cascanueces N° 2221, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, a quien se le denominará en adelante **TECSUP**; y de la otra parte don Pablo Maravi Dorcas, identificado con D.N.I. N° 20123648, con domicilio en Asociación Dalias II H/A Lote 16 Ate, a quien se le denominará en adelante **EL PRESTATARIO**, con intervención de sus padres, don Octavio Maravi Fernandez, identificado con D.N.I. N° 89224684, y doña Elisba Porcos Huayto, identificada con D.N.I. N° 20406531, con domicilio en Asociación Dalias II H/A Lote 16 Ate - Vitoria, a quienes se les denominará en adelante **LOS PADRES**; y de don Jorge Maravi Fraguete, identificado con D.N.I. N° 10151646, y doña 40412638, identificada con D.N.I. N° 40412638, con domicilio común en Nueva Alianza H/A Lote 05 - Chacabuyo; y de don Humberto Maravi Fraguete, identificado con D.N.I. N° 40412638, y doña 40412638, identificada con D.N.I. N° 40412638, con domicilio común en Nueva Alianza H/A Lote 16 - Chacabuyo, a quienes se denominará en adelante **LOS AVALISTAS**; bajo los siguientes términos y condiciones; bajo los siguientes términos y condiciones:

ANTECEDENTES.-

PRIMERA: TECSUP es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como un Centro Educativo dedicado a la capacitación y formación de alumnos en diversas áreas prioritarias para el desarrollo productivo y económico del medio laboral, fomentando del mismo modo la investigación técnica y científica.

SEGUNDA: EL PRESTATARIO es la persona que luego de un proceso de admisión, ha calificado para ingresar a cursar estudios en TECSUP, con el objeto de seguir una carrera profesional y técnica por seis semestres.

Para tales efectos, debe proceder a reembolsar el préstamo que se le otorga en el lugar, forma y oportunidad indicados, de conformidad al Reglamento de Pensiones y Crédito Educativo.

Con dicha finalidad, TECSUP emitirá un Estado de Cuenta Corriente, donde se determinará el saldo deudor de EL PRESTATARIO.

INTEGRACION DE TITULO VALOR


TERCERA: En virtud de lo expresado en las dos cláusulas anteriores, se desprende que entre ambas partes existe una relación educativa y de pago de naturaleza continua, lo que ha dado lugar a la emisión del pagaré N° _____ que se integrará conforme al saldo deudor señalado en el Estado de Cuenta Corriente existente de conformidad al Reglamento de Pensiones y Crédito Educativo.


En tal sentido y de conformidad con lo prescrito en el artículo 10° de la Ley de Títulos Valores, tanto EL PRESTATARIO, en su calidad de deudor, como LOS AVALISTAS, en su calidad de garantes, con la intervención de LOS PADRES, autorizan de manera expresa a TECSUP a integrar el título valor entregado en lo que concierne a la fecha de vencimiento y el monto de la deuda que se encuentre impago, incluyendo los intereses tanto compensatorios como moratorios, comisiones y gastos de protesto y cobranza que se hayan generado por el incumplimiento de la antedicha obligación.

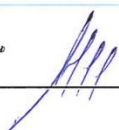
RELACION EDUCATIVA Y DE PAGO

CUARTA: Queda establecido que entre las partes intervinientes existe tan solo una relación de índole educativa y de pago, desarrollando los intervinientes su actividad en forma independiente, sin existir subordinación ni otro elemento propio de la relación de índole laboral.

Se suscribe el presente documento, en señal de conformidad, a los ____ días del mes de _____ del 201__.

Firma: 
Tecsup: _____
LE/DNI: _____

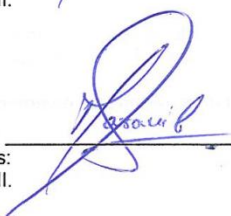
Firma: 
Prestatario: _____
LE/DNI: _____

Firma: 
Avalistas: _____
LE/DNI: _____

Firma: _____
Conyuge: _____
LE/DNI: _____

Firma: 
Avalistas: _____
LE/DNI: _____

Firma: _____
Conyuge: _____
LE/DNI: _____

Firma: 
Padres: _____
LE/DNI: _____

Firma: _____
Conyuge: _____
LE/DNI: _____

Anexo 7: Acta de Aprobación de Tesis


	ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS	Código : F06-PP-PR-02.02 Versión : 09 Fecha : 23-03-2018 Página : 1 de 1
---	--	---

Yo, **José Jorge Rodríguez Figueroa**, docente de la Facultad de Derecho y Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo - Lima Norte, revisor (a) de la tesis titulada:

"CONVENIO DE INTEGRACIÓN Y PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS EN JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LIMA - 2017", del estudiante **JOHAN ALBERTO DAMIÁN ACUÑA**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de **24.1%** verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 07 de diciembre de 2018


.....
Firma
José Jorge Rodríguez Figueroa
DNI: 10729462

Elabora	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable de SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	--------------------	--------	---------------------------------

Anexo 8: Pantallazo del software Turnitin

The screenshot displays the Turnitin Feedback Studio interface. The main document area shows the title "TITULO POR PAGARE" and the university logo "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO". Below the logo, the text reads "FACULTAD DE DERECHO", "ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO", and "CONVENIO DE INTEGRACIÓN Y PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARES INCOMPLETOS EN EL ZOGADO DE PAZ LEIRADO DE LIMA 2017". The document is for a thesis to obtain the title of lawyer.

The right sidebar shows the "Resumen de coincidencias" (Summary of similarities) with a 26% similarity score. A list of sources is provided:

Coincidencias	1	2	3	4	5	6	7	8
Entregado a Universidad...	12%			1%	1%	<1%	<1%	<1%
repositorio ucv.edu.pe		1%						
trinidad.com			1%					
Entregado a Universidad...				1%				
Entregado a Universidad...					1%			
Entregado a Universidad...						<1%		
www.scribd.com							<1%	
Entregado a Universidad...								<1%

At the bottom left, there is a circular stamp from the "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" and a handwritten signature.

Anexo 9: Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV

 UCV UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO	AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV	Código : F08-PP-PR-02.02
		Versión : 07
		Fecha : 23-03-2018
		Página : 1 de 1

Yo Johan Alberto Damián Acuña, identificado con DNI N° 70552736, egresado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, autorizo (X) , No autorizo () la divulgación y comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado "Convenio de Integración y Percepción Estativa de Pagos Incompletos en Juzgados de Paz (Ley de Lima - 2011)"; en el Repositorio Institucional de la UCV (<http://repositorio.ucv.edu.pe/>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33

Fundamentación en caso de no autorización:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


 FIRMA

DNI: 70552736

FECHA: 12 de Noviembre del 2018.

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable de SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	--------------------	--------	---------------------------------

Anexo 10: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL DOCENTE DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

RODRIGUEZ FIGUEROA, JOSÉ JORGE

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

DAMIÁN ACUÑA, JOHAN ALBERTO

INFORME TÍTULADO:

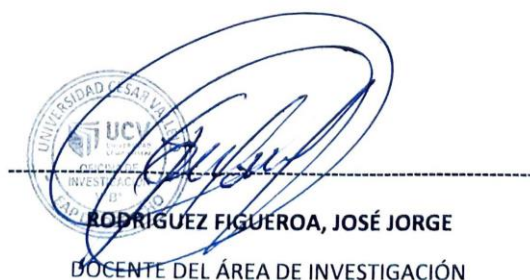
CONVENIO DE INTEGRACIÓN Y PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE PAGARÉS INCOMPLETOS EN JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LIMA – 2017.

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

ABOGADO

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA O MENCIÓN: DIECISÉIS



RODRIGUEZ FIGUEROA, JOSÉ JORGE
DOCENTE DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN